



AVISO LEGAL

Título: *Imperialismo y economía en América Latina*

Autores: Báez, Julia; Burgueño Lomelí, Fausto; López Portillo, Felicitas; Serna H., Juan Manuel de la

Colaborador: Serna Moreno, Jesús (ilustración de la portada)

ISBN: 968-36-0815-9

Forma sugerida de citar: Báez, J., Burgueño, F., López Portillo, F. y Serna, J. M. de la (1989). *Imperialismo y economía en América Latina*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos. <https://rilzea.cialc.unam.mx/jspui/>

D.R. © 1989 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510
Ciudad de México, México.

© Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510
Ciudad de México, México.
<https://cialc.unam.mx>
Correo electrónico: cialc-sibiunam@dgb.unam.mx

Los derechos patrimoniales pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto donde se indique lo contrario, este contenido en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC-BY-NC-SA 4.0 Internacional).
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>



Usted es libre de:

- > Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
- > Adaptar: remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo los siguientes términos:

- > Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Pueden hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- > No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- > Compartir igual: si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

IMPERIALISMO Y ECONOMIA EN AMERICA LATINA

JULIA BÁEZ • FAUSTO BURGUEÑO LOMELÍ •
FELÍCITAS LÓPEZ PORTILLO T. •
JUAN MANUEL DE LA SERNA H.



22

NUESTRA AMERICA

centro coordinador y difusor de estudios latinoamericanos

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

IMPERIALISMO Y ECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA

COORDINACIÓN DE HUMANIDADES
CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR
DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

IMPERIALISMO Y ECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA

JULIA BÁEZ • FAUSTO BURGUEÑO LOMELÍ •
FELÍCITAS LÓPEZ PORTILLO T. •
JUAN MANUEL DE LA SERNA H.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
México 1989

Primera edición: 1989

DR © 1989, Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria. 04510 México, D. F.

DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES

Impreso y hecho en México

ISBN 968-36-0815-9

PRESENTACIÓN

Siempre será bienvenida la aportación de estudios serios y documentados sobre el complejo devenir de Nuestra América, ahora, como nunca antes, atrapada en la difícil inserción al sistema capitalista mundial, el cual está sufriendo una crisis profunda y estructural que sentará las bases de la economía y de la política del próximo siglo. Como corresponde a su carácter de región periférica y dependiente, América Latina paga su cuota para obtener el financiamiento de la tercera revolución industrial y se apresta a ingresar, una vez más, a una modernidad que se vislumbra mucho más excluyente y onerosa que las anteriores.

La presente colección de ensayos intenta responder al por qué de la crisis y sus proyecciones futuras para nuestros países, las que no pecan, precisamente, de optimistas. Se divide en dos secciones: la primera está formada por las colaboraciones de dos economistas miembros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Julia Báez y Fausto Burgueño Lomelí —este último director del mencionado Instituto— quienes con los elementos propios de su disciplina desmenuzan los hechos y presentan sus conclusiones. La segunda parte está integrada por los trabajos de dos investigadores del CCYDEL, los cuales, con un enfoque histórico, dan una visión panorámica de los temas estudiados.

El trabajo de Julia Báez, “Crisis energética: su impacto en Paraguay”, explora las consecuencias que provoca el nuevo patrón de acumulación implantado a nivel mundial en nuestra región. En el sector energético éstas se traducen en el hincapié puesto en el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica por parte del capital transnacional, como lo ejemplifica la represa de Itaipú, en la frontera paraguayo-brasileña. En este modelo de “integración latinoamericana”, Brasil se lleva la parte del león, como corresponde a su mayor desarrollo económico industrial. En la nueva división internacional del trabajo implantada por el siempre redivivo capitalismo monopólico, el papel de Paraguay es el de servir de fuente barata de energía, a través del aprovechamiento de los saltos del Paraná, y de nueva frontera agrícola del *agrobusiness*. La situación se complica si recordamos que la dictadura del general Stroessner es la más antigua del continente, lo que dificulta la recuperación de la iniciativa histórica por parte del pueblo paraguayo.

El trabajo de investigación “Crisis, política económica y comportamiento reciente de la economía mexicana” fue presentado por Fausto

Burgueño Lomelí en el simposio “Rómulo Gallegos: México y Venezuela contemporáneos”, celebrado en el mes de junio de 1985 para conmemorar el centenario del natalicio del eminente escritor. Su inclusión en la presente revista se debe a que se consideró más apropiado publicarlo aparte, dada su índole económica. El autor comienza por situar el momento histórico anterior a la crisis, cuando el primer informe del presidente José López Portillo anunciaba a los mexicanos una era de prosperidad y progreso nunca antes contemplada, en la que el problema sería, a partir de 1977, cómo nadar en la abundancia sin ahogarse. Con la contundencia de los datos numéricos, Burgueño Lomelí señala lo que quedó del sueño de Quetzalcóatl y cómo desde 1981 se veían venir los negros nubarrones que se desataron al siguiente año.

En la toma de posesión de Miguel de la Madrid, el primero de diciembre de 1982, se planteó la creación del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), que tendría entre sus principales objetivos combatir la inflación, el déficit fiscal y externo, proteger la planta productiva y el empleo. Cuatro años después el PIRE es un cadáver bien enterrado, y a pesar de que se han seguido aplicando las políticas ortodoxas con un afán digno de mejor causa, los resultados no son halagadores. Concluye Fausto Burgueño que el resultado de la crisis y de las Cartas de Intención firmadas por el gobierno mexicano con el FMI han devenido en una mayor integración de nuestra economía en la producción y el mercado mundial, con el consiguiente abandono del proteccionismo industrial y la promoción del mercado interno.

El trabajo de Felicitas López Portillo T. fue elaborado en el seminario que sobre el desarrollo del capitalismo en América Latina dirigían en el departamento de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, los maestros Agustín Cueva y Lucía Sala de Touron, a quienes expreso mi cumplido agradecimiento por su ayuda y colaboración. La intención del trabajo es presentar una apretada síntesis de la historia venezolana contemporánea, con especial hincapié en los cambios estructurales ocurridos en la economía, sin descuidar los políticos. Desgraciadamente falta una mayor presencia de los movimientos sociales, pero abarcarlos hubiera rebasado los límites de la investigación.

Con el trabajo de Juan Manuel de la Serna H. “La economía antillana de posguerra (1945-1983): una interpretación”, accedemos al conocimiento de una región muy importante como la antillana, pero a la vez tan desconocida por los latinoamericanos hispanohablantes. La heterogeneidad económica, política y social de las islas del Mar Caribe hace difícil su seguimiento por los interesados, por eso trabajos de esta naturaleza son muy útiles.

El autor empieza por señalar que la diversidad antillana viene en primer lugar de su diferente centro metropolitano, concentra su estudio en las excolonias inglesas, francesas y holandesas. Destaca la capacidad de lucha del campesino, la mayor parte de origen esclavo, pues la temprana

vinculación de las Antillas al mercado capitalista mundial fue a través de la economía de plantación azucarera. Las inquietudes políticas comenzaron a hacerse patentes a partir de la tercera década de este siglo, por lo que los poderes metropolitanos tuvieron que ceder su dominio a partir de la segunda guerra mundial, cuando se presentó el fenómeno de la descolonización.

La adscripción a una u otra metrópoli conforma las maneras de independizarse. Por ejemplo, Inglaterra salva los restos de su eximperio en la *Commonwealth*, mientras que Francia prefiere asimilarlos como provincias con todos los derechos. La presencia norteamericana es muy importante, sobre todo en el renglón de la extracción de bauxita, petróleo y en el turismo, junto a la exportación de productos tropicales.

En su enorme mayoría, las islas antillanas se adscriben al subdesarrollo, proveedoras de mano de obra barata para las maquiladoras o de recursos naturales para el mundo industrializado. A pesar de que una porción importante de la población se dedica a la agricultura, no cuentan con autosuficiencia alimentaria. La importancia estratégica de la región está dada por la invasión a Granada por parte de los Estados Unidos en octubre de 1983, con el pretexto de la “subversión comunista” ejemplificada en la construcción de un aeropuerto. Sin embargo, existen barruntos de independencia de la hegemonía norteamericana en Surinam y Guyana.

La lectura de los trabajos contenidos en la presente revista ayudará a la comprensión de los complejos fenómenos que actualmente se viven, prolegómenos de un fin de siglo que se presenta preñado de dificultades que, sin embargo darán la pauta de tiempos venideros cualitativamente superiores.

FELÍCITAS LÓPEZ PORTILLO T.

CRISIS ENERGÉTICA: SU IMPACTO EN PARAGUAY

JULIA BÁEZ

Dentro de la actual crisis general del sistema capitalista mundial existe una mayor tendencia al fracaso de los mecanismos tradicionales con los que dicho sistema opera, al mismo tiempo que enfrenta un conjunto de crisis parciales que van agudizando sus propias contradicciones internas y externas. Tales desequilibrios son la crisis monetaria internacional, la crisis alimentaria y la llamada “crisis de los energéticos”. Esta última se deriva de un sistema de relaciones capitalistas que ve como objetivo la máxima ganancia, sometiendo el precio del petróleo a sucesivos encubrimientos en un proceso de competencias dominado por las empresas transnacionales.

La cuestión energética es sólo uno de los aspectos planteados por la crisis del sistema capitalista mundial. Sin embargo, si en realidad la obtención de recursos energéticos estuviera en crisis, su solución pasaría sólo por la necesidad de encontrar una nueva posibilidad tecnológica que permitiese suprimir la demanda del energético con base en nuevas fuentes competitivas, en cuyo caso, el modo de organización social de la producción y de las formas de distribución —resultado del modo de producción en sí mismo— no estarían sujetos a transformaciones.

Así, los ideólogos burgueses presentan a la “crisis energética” como una variable independiente al sistema capitalista, es decir, como un eslabón técnico más que debe ser conquistado por la ilimitada capacidad creativa del sistema en su marcha inexorable hacia el desarrollo de sus fuerzas productivas. La especulación en torno al “apocalipsis” del petróleo es un tipo de formulación recurrente que los hechos se han encargado de desmentir sistemáticamente. El petróleo, con su disponibilidad de reservas conocidas, como es el caso de otros minerales, ha tendido a crecer más que la propia producción y constantemente se descubren nuevos yacimientos —como ocurrió en México y la URSS en los últimos años—, sin perjuicio de que el problema tecnológico en sí permita incrementar la tasa de recuperación.

Debido a que el problema del petróleo, como fuente principal de generación de energía en la economía competitiva, es más una cuestión de política energética que de disponibilidad de recursos, interesa saber qué fuente de energía utilizar y qué precios fijar. Por ello, encontramos que

lo que está realmente en crisis es la explotación capitalista del petróleo, expresada en los elevados precios impuestos por los monopolios y la consecuente agudización de las contradicciones del sistema capitalista en su fase imperialista, enmarcada dentro de una crisis general de carácter permanente. Estados Unidos, al transformarse en la potencia más importante del sistema capitalista y poseer el dominio absoluto de la producción petrolera a nivel mundial a través de sus empresas monopólicas, inauguró un modelo de acumulación y una línea de producción fundamentados en el uso intensivo del petróleo y de sus derivados. Los bajos precios del petróleo establecidos por estos monopolios frenan el progreso técnico en la generación de sustitutos.

Los países industrializados desarrollan tecnologías cada vez más complejas en el uso de la energía y los países en desarrollo adoptan los mismos patrones a través de los mercados internacionales de productos industriales y de tecnologías que son controlados igualmente por los países desarrollados.

Después de la segunda guerra mundial, los hidrocarburos se habían constituido ya en la principal fuente energética del sistema capitalista, por tanto, la reestructuración industrial bélica y del transporte se vinculó estrechamente al petróleo. Por esta razón, hubo inversión de capital para que los equipos y el mismo proceso productivo se orientaran hacia el aprovechamiento de energía; prevaleció, entonces, un alto patrón de consumo. Por ello, el reducido costo del petróleo no sólo influyó en la determinación de los recursos petroleros disponibles, sino también en las posibilidades de explotación de fuentes energéticas alternativas que no han sido rentables y que, por lo mismo, son menos atractivas para la inversión.

Cuando Estados Unidos utilizó el petróleo barato como arma de penetración en Europa, puso la reconstrucción europea bajo su control, lo que constituyó uno de los pilares del "Plan Marshall". Desde la década del sesenta, Europa ha sustituido, en forma paulatina, la carboquímica por la petroquímica. Tales tendencias se han manifestado, a partir de la segunda guerra mundial y hasta nuestros días, acentuada y prolongadamente hasta cambiar, en forma radical, la configuración del panorama energético dentro del capitalismo.

La situación mencionada adquiere proyecciones nacionales e internacionales. A nivel internacional, las estructuras construidas a lo largo de 30 años sufrieron importantes resquebrajamientos en los años setenta por la inestabilidad que creó el alza de los precios de los hidrocarburos y la posición ventajosa del empleo de la energía sobre el de la fuerza de trabajo, desde el punto de vista del costo de producción.

Los recursos energéticos de América Latina

Dentro del llamado Tercer Mundo, América Latina es el área que

posee mayores reservas de alimentos, de minerales y la mayor base industrial, principalmente en Brasil y Argentina; también es la región que tiene el potencial más grande de recursos energéticos del mundo.

Como se sabe, toda crisis implica, necesariamente, la implantación de un nuevo modelo de acumulación como único camino para salir de ella. En este sentido, la tendencia general de las inversiones imperialistas en el continente es la creación de empresas "líderes" elaboradoras, en muchos de los casos, de medios de producción. Esto incrementa la necesidad de petróleo y, complementariamente, propicia también la búsqueda de alternativas, quiero decir, de otros recursos energéticos disponibles. Debido al aumento del precio del petróleo y de sus derivados, las grandes empresas capitalistas explotan, en su beneficio, estas alternativas. Los recursos hidroeléctricos son la otra opción en América Latina y en función de su aprovechamiento, las inversiones norteamericanas y multinacionales en la región han experimentado un reordenamiento que también obedece, en segundo término, a la reducción de la demanda de ciertos productos agrícolas y pecuarios latinoamericanos en las áreas desarrolladas.

La economía de América Latina depende en buena parte del petróleo importado, a pesar de poseer una de las regiones más ricas en potencialidad energética petrolera y no petrolera; no obstante disponer de suficientes recursos energéticos, la región no los aprovecha por las imposiciones de la estructura capitalista que han implantado los grandes monopolios.

Actualmente encontramos que gran parte de los requerimientos de electricidad de los países industrializados se satisfacen con fuentes hidroeléctricas; en esos países, la producción total de electricidad es nueve veces mayor que la de los países en vías de desarrollo pero, paradójicamente, éstos tienen potenciales mucho más elevados de energía hidráulica sin utilizar, ubicados principalmente en África, en el sur y centro de Asia y en América Latina. Algunos de los países de Latinoamérica que cuentan con un gran potencial de recursos hidroeléctricos aún no explotados son: Chile, Venezuela, Perú y Colombia, y dentro del área de la Cuenca del Plata hay cuatro países que, sin lugar a dudas, son los primeros de América Latina en dicho renglón: Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. A partir de la década del setenta, al surgir la crisis energética, ciertos organismos especializados como la CEPAL iniciaron estudios sobre la rentabilidad de las alternativas energéticas en el área. Las investigaciones realizadas por la señalada institución,¹ antes de 1973, ya planteaban la necesidad de reducir el uso del petróleo y apuntaban, como fuente sustitutiva, la explotación de los recursos hidroeléctricos "teniendo en cuenta que el potencial hidroeléctrico de la región se estimaba entonces en 2.8 millones de gigawats/hora/año, equivalente a unos 900 millones de barriles de petróleo por año".²

Debemos indicar que en América Latina, por esa misma fecha, se estaba utilizando sólo el 4 por ciento del total estimado. La capacidad instalada

para generar electricidad en el año de 1953 era de 51.4 millones de kilowatts/hora/año, que equivalían a una generación del 55 por ciento proveniente de las hidroeléctricas y de un 45 por ciento de origen térmico; en esas centrales se utilizaba el 16 por ciento del total del petróleo consumido en la región. La situación se presentaba aún más grave, ya que este proceso se daba en áreas donde el desarrollo de estudios sobre tecnología hidráulica era mínimo, debido a la dependencia impuesta por el capitalismo. Este mismo factor determinó que las investigaciones sobre la factibilidad y la puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos requirieran grandes inversiones iniciales.

Los adelantos tecnológicos alcanzados principalmente en la fabricación de turbinas gigantescas en los países socialistas permiten, hoy en día, echar a andar proyectos hidroeléctricos en América Latina que antes no eran rentables, lo cual obligará a esta región a importar equipos fabricados por el bloque socialista y/o a producir los mismos en naciones controladas por el capital extranjero.

Por tanto, se habrán de conceder privilegios a las grandes fábricas y fundamentalmente a las ubicadas en aquellas regiones donde se concentran las filiales de las empresas transnacionales, como es el caso de Brasil. A las pequeñas hidroeléctricas se les considera opciones no rentables, pues no representan “economías de escala”.

Respecto a la rentabilidad, puede apreciarse que América Latina requerirá, dentro de los programas previstos para la década del ochenta, la incorporación de sólo un 10 por ciento de unidades de petróleo o derivados.³

En el curso de los años ochenta estarán en funcionamiento centrales hidroeléctricas que cubrirán las necesidades energéticas en un 58.4 por ciento; el 22.5 corresponderá a la generación de energía con base en el petróleo y sus derivados y un 11.8 por ciento lo aportarán el gas natural, el carbón o la energía nuclear.⁴

Recientes informes proporcionados por la CEPAL señalan que en 1974 el 12 por ciento de las instalaciones térmicas de la región tenían un alto porcentaje de consumo de combustible/kwts/hora. Por ello, las mejoras técnicas en las líneas de transmisión y distribución, así como el consumo menor de petróleo para la generación térmica —al ser en gran parte sustituido por hidroeléctricas— podrían significar un ahorro millonario.

Sin embargo, los problemas que plantea el sector eléctrico y el nuevo nivel de los precios del petróleo varían mucho de un país a otro. Sobre este particular los estudios de la CEPAL indican que, a pesar de las dificultades para establecer reglas generales, se habían determinado ciertos lineamientos de acción para varios países de la región, entre los que se destacaban dos vías: la primera, restringir la utilización de los derivados del petróleo y la segunda, dar prioridad al uso de los recursos energéticos locales:

...el panorama energético de la región no es muy optimista, de los 28 países de América Latina, 24 son importadores de energía y 16 dependen del petróleo para satisfacer el 90% de sus necesidades y además, muchos importan todo el crudo que consumen.⁵

Por otro lado,⁶ todas las soluciones importantes que pudieran tener efecto sustancial sobre el abastecimiento energético para América Latina están lejanas, pues aún requieren el desarrollo de nuevas tecnologías, la movilización de muchos millones de dólares y el otorgamiento de considerables garantías para protegerse de los riesgos. Por ello, los expertos en energía no esperan grandes avances —antes de la década del noventa— en cuanto al aprovechamiento de otras fuentes energéticas, abundantes y baratas, que no sean las hidroeléctricas.⁷

En cuanto a la primera sugerencia: “restringir la utilización del petróleo”, los países más industrializados de América Latina (por ejemplo Brasil con sus clases dominantes estrechamente vinculadas al capital internacional) comienzan a invertir en grandes hidroeléctricas como vía alterna. Para las transnacionales esta política se traduce en una doble ganancia pues, por un lado, logran abatir los precios de costo que a sus filiales ofrecen esos países latinoamericanos y, por el otro, pueden financiar los nuevos proyectos que auguran la obtención de altas tasas de beneficios.

Por ello, el desarrollo de los planes hidroeléctricos de la región sudamericana es de vital importancia para las transnacionales y es de esperarse que tome un ritmo más acelerado dentro del nuevo modelo de acumulación capitalista.

Si bien es cierto que las inversiones requeridas en la industria hidroeléctrica son entre un 50 y 80 por ciento mayores que las que exige la termoeléctrica, hay que considerar que el costo de instalación de la primera —por kwts/hora— es mucho menor, al igual que el de las centrales nucleares en proyecto.⁸

Los aspectos técnicos, atendiendo a su tiempo de maduración y al problema financiero señalado, nos permiten aseverar que la hidroelectricidad durante el actual decenio desplazará a los combustibles vegetales, sustituyéndolos en el segundo lugar en importancia que actualmente ocupan: “las fuentes energéticas no convencionales y nucleares tendrán una importancia menor”.⁹

Por tanto, las mejores alternativas del momento son las gigantescas hidroeléctricas, como la de Itaipú. El potencial de agua almacenada por su presa en un área de 1 350 kilómetros cuadrados no sólo servirá para generar energía eléctrica, sino que representará también la base real de otra forma de utilización del agua con vistas al desarrollo intensivo de la agricultura a gran escala. La “materia prima” fundamental de esa hidroeléctrica creará así las condiciones infraestructurales para la inversión masiva del capital transnacional en la explotación agrícola, como es el caso del grupo Adela Investment.¹⁰

El caso de Itaipú es por demás significativo porque, a través de esta obra bilateral paraguayo-brasileña,¹¹ Brasil trata, de hecho, de encontrar la solución a un antiguo y espinoso problema de límites con Paraguay, por un territorio localizado a la altura de los legendarios Saltos del Guaira, pues aprovechando el caudal de estas caídas de agua para formar la presa, la zona de litigio dejaría de representar un motivo de disputa convirtiéndose en cambio en un beneficio para ambos países.

Al mismo tiempo que se propicia este proceso en la región de la Cuenca, complejo por sus derivaciones político-económicas, se pretende, además, enmarcar los proyectos hidroeléctricos dentro de la llamada “integración latinoamericana”, política que sólo ha servido para consolidar aún más el poder de las transnacionales en la región, dado que estas compañías se sirven de ella para mejorar sus condiciones de operación. No obstante la CEPAL afirma que:

... las ventajas que ofrece la interconexión son reales. La integración de sistemas posibilita la construcción de centrales que requieren grandes mercados, como es el caso de las hidroeléctricas que no admiten un desarrollo paulatino. Asimismo pueden encararse mejor y a menor costo los aspectos del mantenimiento y de generación con vistas a la electrificación rural, sequeñas, etc., ...¹²

Si bien es cierto que las ventajas de una cooperación son reales, la interconexión en América Latina, en las condiciones actuales, beneficiará a las transnacionales, pues les ofrece la posibilidad de abastecer áreas con déficit energético, particularmente aquellas donde exista la urgente necesidad de abastecer a sus filiales, como es el caso de la zona centro y sudoccidental del Brasil.

En cuanto al aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos multilaterales en América Latina existen varios proyectos. Por ejemplo: 1) la interconexión del sistema de Costa Rica —que trabaja en su mayor parte con generación hidroeléctrica— con Panamá y Nicaragua; 2) la hidroeléctrica de Río Lindo y Cajón que podrá unir a Honduras con Nicaragua; 3) la de Salto Grande del sistema de Río Negro y 4) la hidroeléctrica de Itaipú de condominio paraguayo-brasileño, que por su potencial de 12 600 000 kwts/hora/año, promete convertirse en una de las más grandes del mundo. Además están los proyectos de Paraguay y Argentina de YasyReta y Corpus.

Aparentemente, los programas compartidos de recursos bilaterales y explotación de los mismos parecen simples. Sin embargo, su puesta en ejecución presenta distintos problemas de orden político y económico que trascienden las fronteras nacionales, pues, por ejemplo, para el caso de la Cuenca del Plata, los recursos que se pretenden aprovechar de esta manera se hallan en puntos estratégicos de las demarcaciones territoriales de los países de la zona. Por otro lado, estos mismos están alineados bajo los términos del Tratado de la Cuenca del Plata¹³ y vinculados además por factores históricos comunes de indudable peso. Añádase a este panorama la

lucha que por la hegemonía de la región sostienen Argentina y Brasil, y se tendrá con estos elementos un cuadro cabal de la problemática que rodea a los proyectos hidroeléctricos.

Motivo adicional de preocupación es el hecho de que, desde 1960, Brasil viene poniendo en práctica una ofensiva proimperialista y en consecuencia, ha hecho letra muerta de todos los tratados, volcando en el vacío toda una retórica de “buena voluntad” y de “cooperación”, que los personeros de los regímenes en turno pregonan en los foros internacionales en función de sus propios intereses.

Las transnacionales y el Pacto del Cono Sur

En el marco de la crisis general del sistema, la relativa debilidad del mercado de consumo de bienes duraderos de los grandes centros capitalistas, principalmente Estados Unidos y Japón, implica la necesidad de apertura de nuevos mercados para dichos bienes, como también la búsqueda de otras áreas de inversión para el excedente no reinvertible en este sector.

Ante tal situación, hay que analizar la presencia, en el Cono Sur, de cuatro grupos de inversionistas: el francés y el alemán, en los rubros de tecnología nuclear y agroindustria, y en este último sector ambos en franca competencia con el capital norteamericano, que también interviene en las finanzas; por último, el capital japonés que da financiamiento a los rubros de la metalurgia y el agro.

En la actual coyuntura, los monopolios de los Estados Unidos no sólo se ven forzados a adaptarse a los nuevos procesos que operan en el continente, sino también a enmascarar al máximo su penetración. Éste es el principal motivo por el que tratan de consolidar los vínculos con los capitales nacionales y de convertir a las burguesías latinoamericanas en socios menores y “aliados”, para lo que el capital bancario cumple una función estratégica. Por otro lado, el rotundo fracaso del panamericanismo y la tendencia de los países latinoamericanos a ampliar sus relaciones económicas internacionales, obligan a los Estados Unidos a coordinar sus acciones con los países de Europa occidental y Japón. Por ello, “el neocolonialismo económico colectivo se convierte más y más en la base de la estrategia norteamericana en el área”.¹⁴

El Pacto del Cono Sur, acordado entre los gobiernos militares de Argentina y Brasil, no es sino un producto más de las propias contradicciones del sistema capitalista, que en su actual etapa de crisis trata de proteger a toda costa sus intereses. Dicho pacto¹⁵ es el resultado de imposiciones oligárquicas antinacionales y desempeña papeles fundamentales, como por ejemplo, el de promotor del proyecto de inserción de esas estructuras económicas en la nueva división internacional capitalista del trabajo; la apertura de dichas estructuras sirve, a su vez, para dar salida a los excedentes de productos de los países industriales.

Las dictaduras militares están atadas al capital monopólico internacional, lo que explica que en momentos de crisis de hegemonía mundial, Argentina no aceptara el embargo cerealero impuesto por los Estados Unidos en 1978 y que, después, gran parte de estas exportaciones fueran realizadas por compañías multinacionales.

El Pacto del Cono Sur pretende, básicamente, una reestructuración regional y convertir a Sudamérica en punta de lanza de las empresas transnacionales para controlar el mercado latinoamericano. Para este fin se ha propuesto el estudio de la integración de dos áreas perfectamente definidas en cuanto a la potencialidad de explotación de sus recursos, dentro de una línea política proteccionista dictada por las transnacionales, con lo que se busca eliminar los acuerdos multilaterales derivados de los intentos de integración de América Latina, como serían la ALALC y el Pacto Andino. De esta manera, entraría en vigor la nueva estrategia imperialista de los acuerdos bilaterales, que caracteriza, hoy en día, una nueva forma de dominación neocolonialista.

Encontramos, así, el área denominada Eje Buenos Aires-São Paulo, ubicada en el litoral atlántico, que representa el mercado más importante por su base industrial, por su poder adquisitivo, por su potencial hidroeléctrico y por su abundancia en materias primas necesarias para la agroindustria y la producción alimentaria destinada al mercado mundial.

La integración industrial, bajo el control de grandes transnacionales, tiene como objetivos explotar lo que llamaríamos la línea “metal-mecánica-bélica” y además, fomentar la inversión en el sector de comunicaciones, para lo cual la energía nuclear y las hidroeléctricas desempeñan papeles capitales. Ese proyecto oligárquico-imperialista se complementaría con el área de Capricornio que abarca el noreste argentino, Bolivia, la mitad occidental de Paraguay y el norte de Chile.¹⁶ Esta región posee yacimientos minerales y recursos naturales para la agroindustria. Si bien como mercado de consumo, esta área resulta menos atractiva que la mencionada arriba, hay que aducir en su favor la inmensa importancia de tener una salida directa al Pacífico que cubre cinco países. Las multimillonarias inversiones extranjeras en infraestructura en esta zona se orientan hacia los planes de explotación que son propiciados por los sucesivos acuerdos entre los gobiernos militares del Cono Sur para financiar la construcción de “puentes de amistad”, carreteras y ferrocarriles.¹⁷

Este proyecto que abarca a varios países amenaza, incluso, con modificar el mapa geopolítico del Cono Sur. De ahí el surgimiento de pugnas entre grupos de la oligarquía sudamericana sobre el control y dominio de determinados recursos naturales y de los puertos. Como puede apreciarse, la crisis capitalista genera fisuras en el bloque imperialista y ofrece posibilidades para la estructuración de un aparato productivo regional más autónomo, capaz de hacer frente al capital internacional.

Las agroindustrias y la migración brasileña

En el caso de Brasil, la existencia de importantes recursos hidráulicos y el conjunto de intereses agrupados en torno a las hidroeléctricas determinaron que el país se orientara, fundamentalmente, hacia la promoción y fomento de dicha industria, buscando satisfacer la creciente demanda de electricidad. De ahí que los recursos hidráulicos nacionales se estimaran, de 1920 a 1977, en el 85.6 por ciento del total del potencial eléctrico instalado en megawatts/hora/año.

El programa hidroeléctrico basado en la construcción de un aparato energético propio —propuesta autónoma encabezada por algunos sectores industriales— se enfrenta, en abierta contradicción, a un movimiento más general y dominante en la economía brasileña: la internacionalización de la producción bajo el control del capital extranjero. Esta última tendencia cobró fuerza y agudizó los problemas existentes a partir de 1964, con las medidas gubernamentales que los militares adoptaron para favorecerla. Se trata, en suma, de una lucha interna entre quienes abogan por la construcción de un aparato energético propio y autónomo y los que quieren consolidar un aparato productivo que se articula progresivamente a la estructura capitalista mundial.

En la década de los cincuenta, el gobierno encabezado por Getulio Vargas se esforzó en construir, internamente, las bases concretas de la industrialización a través de un aparato autónomo con los mismos esquemas de los países capitalistas desarrollados. Desafortunadamente, este programa no fue más allá de promover la petroquímica. Con todo, esto significaba que dicho sector autónomo podía considerar los derivados de hidrocarburos, producidos de las plantas en construcción, como parte de los recursos energéticos nacionales y satisfacer la propia demanda. Además, en el renglón de recursos, Brasil contaba con importantes elementos, como los hídricos y el potencial petrolero, subyacente en las extensas cuencas sedimentadas del país.¹⁸

Sin embargo, el proyecto fracasó porque el capital internacional exigía que la demanda interna fuera abastecida con los derivados energéticos obtenidos de una sola fuente: el petróleo. Por ello, el proceso de integración de Brasil a la economía mundial se da dentro de la esfera de la división internacional capitalista del trabajo. El sector energético, al tener que alinearse a las normas internacionales, tendrá que abandonar el empleo de las técnicas más adecuadas para explotar los recursos nacionales; tampoco podrá aprovechar cabalmente la fuerza de trabajo y los equipos locales,¹⁹ y sí, en cambio habrá de importar tecnología a un alto costo y en forma masiva, o, en su defecto, permitir que el capital internacional saque adelante su producción. En el curso de la década de los ochenta las plantas nucleares figurarán como la opción para proveer de energía eléctrica al Brasil; también las gigantescas hidroeléctricas, como Itaipú y Tucuruí, se considerarán alternativas ventajosas. Ambos proyectos se adecuan perfec-

tamente en la avanzada de la tecnología moderna que condena al país a importar equipos y como el problema brasileño fundamental a este respecto es el del financiamiento, no es extraño que se sucedan, unos a otros los reacomodos. En estas condiciones, el aparato productivo del Brasil se relaciona con la economía mundial y realiza el “milagro” que originalmente parecía ofrecer enormes e inagotables posibilidades de desarrollo.

La “crisis energética” desequilibra en forma grave la balanza de pagos de todos los países importadores de petróleo, condición que comparten Brasil y Paraguay, para quienes el problema se agudiza. En Brasil, de hecho, la señalada crisis cierra la etapa del famoso “milagro” y su economía se mantiene, coyunturalmente, gracias a los grandes préstamos.²⁰

Si bien la cuestión del petróleo pone en evidencia el carácter de estas economías como una parte más en el engranaje capitalista mundial, la crisis general del sistema capitalista exige cambios en la forma de acumulación a nivel internacional, por lo que la transformación del aparato productivo en los países en desarrollo no es más que una respuesta, una vía de solución, que el capital internacional trata de dar a la crisis.

Así, dentro de la nueva división internacional capitalista del trabajo, la cambiante localización de los recursos fundamentales exige como condición necesaria las constantes modificaciones que se operan hoy en día en las actividades industriales controladas por las transnacionales, ajustes que se ha dado en llamar “redespliegue industrial”.

Las transnacionales no sólo intervienen en la producción fabril, sino también en la gran producción agrícola mecanizada; a consecuencia de esto último, se ha generado un fenómeno migratorio en la frontera paraguayo-brasileña y en la zona donde está instalada la hidroeléctrica.

Las inversiones del gran capital internacional en el campo han expandido la frontera agrícola y propician el incremento del movimiento migratorio brasileño. El surgimiento de hegemonías regionales, dentro del marco del “milagro brasileño”, deriva y depende de la localización de los centros de mayor productividad y del impulso que éstos reciben por medio de la agroindustria; éste ha sido el caso, principalmente, del estado brasileño de Paraná, situado cerca de la frontera paraguaya.

El “milagro” vino a polarizar aún más a las clases sociales y benefició a los círculos burgueses terratenientes vinculados a las transnacionales que se guiaban por el modelo agro-exportador.

Así, en el Brasil encontramos por un lado, a la gran propiedad que empleaba tecnología avanzada y daba prioridad a los productos de exportación; ésta desarrollaba su actividad con el apoyo de los créditos, e inclusive de la fuerza militar, si el caso lo requería; y por el otro, a la pequeña propiedad, sin ninguna de las ventajas anteriores, y apenas produciendo lo suficiente para el consumo interno. Paulatinamente la pequeña propiedad fue estrangulada por las grandes empresas dentro de un proceso de competencias y acumulación capitalista.

A partir de 1970 el desarrollo agrícola se aceleró, propiciado por la demanda del mercado mundial y monopolizado por el uso intensivo de la tierra mediante los mismos mecanismos capitalistas, pero ya entonces bajo el influjo de una propaganda masiva que especializó la producción y la confinó a la dependencia de determinados productos de exportación sujetos a las grandes oscilaciones de precios en un mercado mundial manejado por los grandes monopolios. En este proceso en el que se van desarticulando las formas precapitalistas de producción, paraguayos y brasileños identificaron su empuje gradual con el desarraigo, la proletarización y la pauperización impuestas por el desarrollo capitalista en el campo.

El cambio se inicia en Brasil y prosigue en Paraguay con la llamada “marcha hacia el oeste”. En este último país, el Instituto de Bienestar Rural (IBR) se encargó de establecer el proyecto. La supresión de la cláusula del Estatuto Agrario que el gobierno de Stroessner hiciera en 1967, y por virtud de la cual se prohíbe vender tierras en las zonas de frontera seca a personas o entidades extranjeras, no fue sino la acción lógica de la representación político-jurídico-militar con la que las clases dominantes paraguayas habían sellado un acuerdo con la oligarquía y la burguesía brasileñas ligadas al imperialismo para extender el área de influencia de los grandes capitales transnacionales al territorio paraguayo.

La confluencia de ambas “marchas” permiten la expansión y el impulso del desarrollo agrícola capitalista en la zona de frontera. En Paraguay este proceso se inició a partir de la década de los setenta, coincidiendo con la crisis alimentaria. Actualmente, esa zona abarca 3 000 000 de has., donde se encuentran asentados más de 400 mil colonos brasileños —a este fenómeno de poblamiento se le conoce con el nombre de “penetración silenciosa”— de los cuales, sólo el 25 por ciento son propietarios, cantidad que representa el 13.3 por ciento de la población total del Paraguay.²¹

Si la presencia de estos inmigrantes cumple, por un lado, con los intereses expansionistas de Brasil, por el otro, viene a estimular rencores entre dos pueblos hermanos, que son igualmente explotados y que por ese solo hecho contribuyen a la ganancia capitalista. Es indudable que la expansión de la frontera agrícola —reiteramos, dentro del proceso de acumulación— genera conflictos sociales. Para los colonos brasileños la ocupación factual de la zona fronteriza paraguaya convierte a esa franja territorial en una prolongación del Brasil, porque el cambio de su lugar de residencia no implica la supresión de su dependencia política, económica y cultural respecto a su país. Por otra parte, esta migración asegura el cumplimiento de los objetivos planteados en el tratado paraguayo-brasileño de Itaipú, que beneficiará a los intereses multinacionales (la hidroeléctrica constituye una infraestructura básica para garantizar el crecimiento económico de la zona sur-sureste-centroeste del Brasil) y el programa agroindustrial y de industria pesada que ya comienza a articularse con vistas a la utilización de recursos minerales.

Itaipú es una gran hidroeléctrica —que apunta a ser en su género la obra más grande del mundo con una capacidad de 12 600 000 kwts/hora/año y cuya construcción superó el costo de 10 mil millones de dólares— que representa sólo un punto de encuentro entre esas dos “marchas”, partes del mismo modelo. La participación paraguaya en el proyecto tiene el carácter de subordinada a los dictámenes del desarrollo capitalista de Brasil. Indudablemente los designios brasileños requieren la hidroeléctrica y ésta, a su vez, necesita de la expansión de la frontera agrícola como espacio económico de inversión de capital. Por su parte la inversión —para ser reductible— implica la formación de grandes asentamientos de campesinos expulsados de sus unidades productivas, con lo que se benefician las empresas transnacionales al disponer de fuerza de trabajo barata.

Itaipú y el problema energético brasileño

Con fundamento en las afirmaciones de los distintos informes del Ministerio de Energía y Minas del Brasil y en las de los trabajos del investigador paraguayo Ricardo Canese, nos parece necesario realizar un breve análisis sobre el panorama energético brasileño y su dependencia de los recursos paraguayos.

En 1966 el potencial hidroeléctrico brasileño se estimó en 657 000 gigawats/hora/año;²² en 1974 los cálculos se elevaron a 915 420 gigawats/hora/año. Si se considera la totalidad de estos recursos, independientemente de su ubicación, rentabilidad y/o factibilidad de aprovechamiento, podremos concluir que Brasil tiene teóricamente asegurado el abastecimiento de energía con fuentes puramente hidroeléctricas hasta el año de 1997. Pero de los 915 420 gigawats/hora/año potenciales que posee Brasil, sólo el 54.45 por ciento del total lo generan realmente sus instalaciones y se aprovecha en forma debida. En la práctica, la capacidad hidroeléctrica de Brasil únicamente podría abastecer sus necesidades de energía eléctrica hasta 1991.

En el período de 1966 a 1970, la demanda de energía eléctrica brasileña había crecido en un 7.16 por ciento y entre los años de 1970 a 1978 se elevó al 12.17 por ciento. Entre los diversos factores que explican esta demanda están, desde luego, el incremento del precio del petróleo, la acelerada mecanización agrícola y el desarrollo energético desigual en las distintas regiones de este país. Es evidente que los recursos hidroeléctricos del propio territorio brasileño no pueden abastecer la creciente demanda nacional a corto plazo; de ahí que debemos admitir que si Brasil desea cubrir esta necesidad, deberá reducir drásticamente las tasas de crecimiento de las regiones desarrolladas; pero ¿es este sacrificio razonable? Como se presenta la situación en un futuro cercano es de preverse que la demanda de energía eléctrica se eleve y en consecuencia, el gobierno brasileño se ha propuesto sustituir al petróleo por otras fuentes opcionales.²³ Por tanto, cuanto más

retrase la puesta en ejecución de sus nuevos planes energéticos, mayor será el consumo de petróleo y mayores sus gastos de importación del crudo. Según los proyectos y estimaciones gubernamentales la generación de energía eléctrica será uno de los principales sustitutos de los hidrocarburos.

Más del 40 por ciento de la energía que Brasil consume proviene del petróleo, que se importa en cantidad superior al 80 por ciento del total requerido; en 1980 las erogaciones en este renglón sobrepasaron los 10 mil millones de dólares, o sea más del 50 por ciento del total de sus importaciones. Si bien para Brasil resulta prioritario sustituir el petróleo por otra fuente energética, este plan se ve obstaculizado por la infraestructura creada durante los últimos 30 años: todo el sistema de transporte terrestre se canaliza básicamente por las carreteras; los transportes aéreo, fluvial y marítimo extendieron sus radios de acción y dependen también del petróleo, al igual que el funcionamiento del sector industrial —metalurgia, cemento, cerámica, etcétera—, por ello, no resulta sencillo reemplazar a los hidrocarburos por otra fuente energética a corto plazo. Además, en la actualidad, Brasil tropieza con otro problema: el paulatino agotamiento de los bosques naturales, y la consecuente disminución de la aportación de la leña y el carbón vegetal al balance energético global. Para 1987, solamente una sexta parte del consumo energético total del Brasil dependerá de la leña, el carbón vegetal y el bagazo de caña.²⁴

En resumen, las medidas que se propone adoptar el gobierno brasileño indican claramente que la demanda de energía hidroeléctrica irá en aumento en los próximos años y el problema a este respecto es sustituir el consumo de petróleo por otra fuente que requerirá cuantiosas inversiones que la nación difícilmente podrá realizar en momentos en los que “la deuda externa llega al límite que puede soportar un país”.²⁵ En enero de 1981, esta deuda alcanzaba los 60 mil millones de dólares, acompañada de una inflación, no prevista, del 110 por ciento.

Las regiones más industrializadas del polo sur-sureste-centroeste experimentarán un agudo déficit de energía eléctrica a partir de 1988. Para esta fecha se deberá generar por medios termonucleares un 27.1 por ciento de la energía adicional demandada por esa región y, si se dejaran de utilizar los recursos paraguayos de Itaipú, el déficit brasileño alcanzará el 59.6 por ciento, es decir, que sería exactamente equivalente al porcentaje que el Paraguay podría aprovechar si empleara la energía que le corresponde.

Si Paraguay no cede a Brasil su parte de los recursos energéticos de Itaipú, el déficit de este último país, a partir de 1983, alcanzaría niveles críticos.²⁶

El caso paraguayo

La economía paraguaya parece un caso atípico dentro de la crisis generalizada del sistema capitalista. En los últimos cinco años, Paraguay presentó altas tasas de crecimiento de sus variables fundamentales que

sobrepasan en alto grado al desarrollo promedio de América Latina en el mismo periodo y, sobre todo, supera ampliamente a los del Brasil y la Argentina.²⁷

Este hecho no resulta extraño, si tenemos en cuenta que en ello influyen ciertas condiciones: por ejemplo, que Paraguay es un país que ofrece enormes recursos naturales no explotados o que son semiexplotados y que tienen una enorme demanda en el mercado internacional (ricas tierras, cuantiosos recursos energéticos —estimados en 56 000 gigawats/hora/año—, incalculables recursos forestales y una infraestructura básica que financió el capital internacional en los años sesenta).²⁸ Históricamente, en este país ha predominado una estructura agraria de bajo rendimiento productivo, manejada por una clase latifundista que emplea un sistema extensivo de producción agrícola y pecuaria. El complemento a esta estructura era el capital extranjero que monopolizaba los sectores dinámicos de la economía, hecho que impidió, a su vez, la conformación de una burguesía fuerte.

Precisamente por estos factores, el nuevo modelo de acumulación capitalista mundial hace que Paraguay se constituya en la región perfecta para emprender acciones cuya ejecución sería menos viable en áreas más desarrolladas. Por sus inmensas extensiones de tierras fértiles y sus posibilidades para disponer de energía abundante y barata, el capitalismo vuelve los ojos hacia lo que antes consideró desperdicios.

En el orden político, Paraguay cuenta con una férrea dictadura militar impuesta por el imperialismo para mantener el *statu-quo* y para servirse de ella como el instrumento que defiende a ultranza al capital monopólico internacional. De ahí la promulgación de las leyes proteccionistas²⁹ para el capital extranjero que se van sucediendo ininterrumpidamente desde 1954, y cuyo fin es hacer flexibles las condiciones de operación y la transferencia total de utilidades, sin perjudicar el papel de abastecedor de materias primas que cumple el Paraguay en el mercado mundial. Mediante una sistemática represión al movimiento obrero, la dictadura restringe los derechos del trabajador y mantiene el valor de la fuerza de trabajo a niveles de subsistencia, con lo cual el régimen garantiza un cierto margen de “paz social”, que tranquiliza a las transnacionales y les asegura pingües ganancias.

Estas condiciones han propiciado un ingreso masivo del capital internacional en la estructura paraguaya; solamente en el período de 1974 a 1980, el crecimiento anual acumulado ha sido del 17 al 14 por ciento. Así, para 1970 encontramos que las inversiones extranjeras alcanzaron un poco más de 30 millones de dólares; en 1980 el ingreso de capital extranjero fue de 2 500 millones de dólares, suma exorbitante para un país cuyo PIB total, en el año señalado, fue de 1 300 millones de dólares.

Esta enorme inversión —independientemente de la desnacionalización económica que acarrea— reestructura totalmente la producción paraguaya de acuerdo a los intereses de dicho capital foráneo y al nuevo modelo de

acumulación capitalista. Es claro que el acelerado crecimiento no es espontáneo y que responde a la nueva división capitalista del trabajo organizada a través de las transnacionales radicales que apoyan fundamentalmente la expansión de la frontera agrícola y el ritmo de construcción de las hidroeléctricas en Brasil y Paraguay.

Por consiguiente, la agricultura y la explotación hidroeléctrica son los programas que presentan mayores perspectivas de desarrollo, a fin de satisfacer la demanda de los polos ya industrializados de la región, como son São Paulo y Buenos Aires, que cuentan con complejos industriales y filiales de las mismas transnacionales.

Las inversiones que ha captado este proyecto —en un paradójico crecimiento sin industrialización— beneficiarán principalmente a la agricultura, y su orientación exportadora favorecerá a 3 o 4 productos,³⁰ que si bien representan el rubro más redituable tienen escaso efecto “multiplicador”, porque generan poco empleo y no dejan utilidades para el mercado interno. Por otro lado, dicha producción se genera y propicia en determinadas áreas, lo cual agudiza aún más la deformación de este aparato productivo.³¹

Entre 1975 y 1979 la superficie total cultivada del Paraguay se incrementó en un 50 por ciento, equivalente a unas 500 mil hectáreas, de las cuales un 60 por ciento se encuentra en la región central.³²

También en este caso la agroindustria representa el 80 por ciento³³ de la producción industrial actual del país, cuyas ventas al exterior se concentran más y más en productos que requieren escasa elaboración, por lo que la participación relativa de la industria, dentro de la generación del valor agregado global se ha mantenido en un nivel muy bajo y casi uniforme (16 por ciento) en el período 1975-1979.

La instalación de estas industrias responde a la coyuntura actual de la demanda mundial de alimentos, de ahí la presencia del capital internacional en esa área cuya redituabilidad depende también de la contabilización del empleo de la energía. Por tanto, Itaipú y las demás hidroeléctricas³⁴ representan para la región la alternativa energética más viable y barata y por ello, la más lucrativa en el marco de la “crisis energética” y de la crisis alimentaria.

El significado político-económico del Tratado de Itaipú para el Paraguay

El Tratado de Itaipú celebrado entre Brasil y Paraguay para la explotación de la hidroeléctrica en abril de 1973, representó un punto importante dentro del nuevo modelo de acumulación capitalista mundial y la inserción de Paraguay dentro de dicho modelo. Tal convenio abrió una etapa nueva en la historia económica de este país, acentuando su dependencia de las transnacionales y del capital monopólico brasileño desde los años sesenta, a través de una construcción acelerada de

infraestructura de comunicación directa entre ambos países, como el “Puente de la Amistad” y la proyectada “Ferrovía de Soja”.³⁵ El referido tratado trajo también consigo la presencia de grandes grupos financieros, la ocupación y explotación de un amplio territorio fronterizo, la estrecha cooperación militar y diversas formas de inversión de capitales.

En lo relativo a la explotación de los recursos hidráulicos del río Paraná —una de las riquezas naturales más importantes del mundo— se cuenta la construcción de la represa de Itaipú con una potencia instalada de más de 12 000 000 kilovatios-hora que entró en funcionamiento en 1983.

Este tratado, francamente leonino, beneficia en su totalidad al Brasil, tanto en aspectos políticos, como en aspectos técnicos fundamentales (considérese por ejemplo, la sala de máquinas y ciclajes); se debe tener presente sobre este particular que la zona de construcción de la represa no está delimitada oficialmente entre ambos países. Por otro lado, las estipulaciones de los artículos XII y XVIII del tratado son por demás significativas, ya que establecen que las “altas partes contratantes”, a través de protocolos adicionales, o de actos adicionales, y / o *actos unilaterales**, adoptarán todas las medidas necesarias para el cumplimiento de dicho tratado, especialmente aquellas que tengan relación con la seguridad y el tránsito en la zona.

Por decisiones o acciones unilaterales se entiende el cumplimiento de los designios del Estado, y en este caso, de los del Estado brasileño. Para corroborar tal afirmación, baste comparar las cifras que ambos países presentan en cuanto a extensión territorial, población, PIB, y/o recursos militares.³⁶

La ambigüedad de los términos en los que está redactado el acuerdo, harto comprometedor para cualquier tipo de convenio bilateral, demuestra cuán importantes pueden ser las palabras, sobre todo las que definen los arreglos de un tratado de la envergadura del de Itaipú. En este caso, quizás dejan un camino abierto a Brasil para intervenir militarmente y en forma directa en nuestro país, si se presenta la eventualidad de un peligro real para la seguridad de la represa o simplemente si el gobierno brasileño así lo “supone” por la existencia factual o ficticia de movimientos o luchas revolucionarias en Paraguay.

En los mencionados artículos del tratado se habla también de “medidas de necesaria adopción unilateral” cuyo riesgo y alcance son prácticamente ilimitados, en cuanto que no se determina cómo y cuándo se tomarán esas decisiones, ni el tiempo de vigencia de dichas medidas. Reiteramos, pues, que las deliberadas imprecisiones del tratado no sólo constituyen un tema espinoso, sino que propician también serios conflictos de interpretación en cuanto a derechos y obligaciones, entre los países de la zona.

El tratado de Itaipú plantea, además, graves problemas económicos y ecológicos para la región que derivan de la utilización unilateral y/o

*El subrayado es nuestro. N. del A.

irracional de los recursos. A este respecto, sirva de ejemplo el uso bilateral del agua de la Cuenca del Plata que amenaza los intereses de terceros países, como la Argentina.

En el plano económico, Paraguay pierde, según este tratado, el control sobre su principal recurso energético natural y se ve obligado a costear, por partes iguales con Brasil, la conversión de divisas para los servicios de empréstitos internacionales que contrae para el sostenimiento del ente binacional.

*La situación energética en Paraguay*³⁷

El sector energético en Paraguay está a cargo de la Asociación Nacional de Electricidad (ANDE), monopolio estatal financiado por el capital extranjero, y de las Refinerías Paraguayas S. A. (REPSA), filial de la transnacional Bolivian Oil Company, que igualmente ejerce el monopolio de la importación, refinación y comercialización del crudo en el país. Entre 1974 y julio de 1980, REPSA había percibido de sus operaciones una utilidad neta de 270 millones de dólares, que representa más del 50 por ciento de las ganancias globales, de las cuales más de la mitad se remitieron al exterior.³⁸ En Paraguay el consumo interno de petróleo y sus derivados es de unos 150 mil barriles diarios que, en relación al valor total de sus exportaciones en 1979, representan alrededor del 35 por ciento.³⁹

El petróleo y otras fuentes minerales de energía resultan opciones cuya viabilidad de empleo en el país es remota, pues lo exiguo de las reservas nacionales probadas no justifica, ni hace rentable su explotación.⁴⁰ En 1979 el consumo interno de energía eléctrica era de 700 gigawts/hora/año⁴¹ y durante el periodo comprendido entre 1975 y el año arriba mencionado el consumo de la misma tuvo un incremento anual acumulativo del 14.7 por ciento; para 1980 el consumo *per cápita* se calculó en 270 kwt, equivalente a un aumento del 15 por ciento.⁴²

Paraguay es un país productor-exportador de energía pero, paradójicamente, tropieza con una barrera en cuanto al abastecimiento energético interno. Las alternativas, por tanto, se reducen a dos: importar más petróleo o utilizar el más importante recurso natural de que dispone: el desnivel de las aguas del Río Paraná y sus afluentes.

Las posibilidades de desarrollo en Paraguay

El Paraguay no aprovechará ni el 10 por ciento de la energía disponible en la década presente, si no comienza a estructurar un adecuado esquema de decisiones económicas y políticas para determinar sus prioridades en relación a este recurso, fundamental fuente de ingresos previsibles en un futuro cercano.

En este sentido, la burguesía nacional paraguaya plantea dos proyectos económicos distintos, de acuerdo también a dos giros de actividades principales: uno es el proyecto de la burguesía comercial exportadora y otro el de la burguesía industrial.

El primero propone acelerar el modelo agroexportador con el aprovechamiento gradual de la energía y la renegociación del precio de la misma —no iniciada oficialmente con Brasil—, lo que generaría un ingreso de 700 a 1 200 millones de dólares anuales de divisas para el país. Si tal proyecto se pusiera en ejecución beneficiaría casi exclusivamente al grupo que lo propone, por su vinculación directa con las políticas impuestas por las empresas imperialistas; por otra parte, a corto plazo, introduciría al Paraguay en la nueva división capitalista del trabajo.

El proyecto de la burguesía industrial paraguaya propone el uso intensivo de la energía para industrializar al país con la estrecha alianza del capital extranjero, afianzándose desde supuestas posiciones nacionalistas de “defensa de los recursos naturales”.

En un futuro inmediato, las perspectivas de la burguesía local para desarrollar el sector “electrointensivo” son inciertas por la debilidad de este mismo para competir en un mercado altamente tecnificado, de ahí la búsqueda de enlaces con el capital internacional.

El proyecto en sí no es tan viable porque los intereses de las transnacionales giran básicamente en torno a la agroindustria en esta primera etapa.⁴⁹ Por otro lado, se plantea la necesidad de un cronograma para la utilización cabal de la energía eléctrica a muy corto plazo, además de que en el plano político existe desconfianza en cuanto a la renegociación con Brasil del “justo” aprovechamiento de la energía en los términos planteados por la burguesía comercial.

Es evidente que la competencia capitalista genera contradicciones entre grupos monopólicos y en el seno mismo de la burguesía en la búsqueda del control de las fuentes de materias primas y del mercado. En Paraguay esta rivalidad se manifiesta en las posiciones respectivas de los grupos industrial y comercial, particularmente porque este último posee el monopolio de ciertos sectores claves de la economía en manos de familiares y personeros del régimen. Este grupo se ha enriquecido gracias a sus relaciones con la burocracia estatal y/o a su vinculación con el capital extranjero.

Si hoy en día se definen dos líneas dentro de las clases dominantes de Paraguay, en cuanto a la utilización que deberá darse a los recursos energéticos, ello no deberá atribuirse a la importancia que se conceda al desarrollo económico nacional, sino a los particulares intereses de cada grupo y al beneficio que puedan obtener del empleo de la energía. Sin embargo, en el modelo agroexportador se viene gestando la acumulación capitalista y sobre ésta se orientan los ajustes correspondientes.

La situación de los empresarios de América Latina en la coyuntura actual demuestra que el proceso de su integración al sistema aún no ha

concluido. Éste es un factor que deben tener presente las fuerzas democráticas y antiimperialistas en sus luchas contra tales asociaciones.

En cualquier caso, las alternativas que pueda tener la burguesía paraguaya no auguran éxito, porque el auténtico desarrollo económico del país será imposible mientras no sobrevenga la caída del poder dictatorial antinacional y no se rescate la soberanía paraguaya usurpada por un régimen fascista aliado a las compañías transnacionales.

El pueblo paraguayo tiene la imperiosa y perentoria necesidad de llegar a un acuerdo con Brasil sobre la soberanía de los límites fronterizos, negociar y hacer efectiva la dotación del 50 por ciento de la energía que le corresponde de la hidroeléctrica de Itaipú y fijar a esa energía un precio acorde al del mercado capitalista. Si todo esto se lleva a cabo, quedarían sin efecto las actuales cláusulas del tratado que determinan la cesión de la energía paraguaya al Brasil por espacio de 50 años con un precio de venta equivalente al del costo de producción.

En cuanto a la política interna que debe adoptarse, igualmente parece necesario:

a) Convertir a la ANDE en una empresa con capital nacional y financiar las líneas de distribución y transmisión de la energía eléctrica para uso interno con las divisas obtenidas de la venta de nuestra energía de Itaipú.

b) Establecer una política de precios estables y baratos para la electricidad de modo que su empleo beneficie realmente a la amplia mayoría de la población, fundamentalmente a las áreas campesinas.

c) Realizar estudios y elaborar cronogramas de utilización de la energía eléctrica para aquellas industrias cuya producción sea prioritaria en la economía nacional para optimizar su funcionamiento.

Conclusiones

Hemos visto que la actual “crisis energética” sólo es una forma de manifestación de la crisis general del capitalismo y una búsqueda de solución a la misma. La imposición de nuevos modelos de acumulación capitalista a nivel mundial, que se manifiesta a través de la creación de empresas cuyo uso de la energía eléctrica es intensivo, ha permitido aminorar los costos de producción. Esto ha sido posible en América Latina porque en la región existen países con recursos hidráulicos suficientes, de ubicación estratégica, para satisfacer las necesidades de las empresas transnacionales.

Hemos visto, pues, cómo comienza una nueva política energética en América Latina para abaratar los costos de la energía. En Paraguay tal política se manifiesta en la construcción de las grandes represas: Itaipú, Yasy-Reta y Corpus. Las mayores riquezas naturales de Paraguay son absorbidas, en esta coyuntura, por los capitales internacionales debido a la

presencia de un Estado proimperialista que los exonera de compromisos y los beneficia ampliamente.

Encontramos que dentro de esta nueva política se dan diferencias en el grado de desarrollo de los países: Brasil tiene un alto desarrollo de industrialización con inmensos recursos energéticos potenciales, pero depende de la importación de petróleo al igual que Paraguay. Esto hace que para satisfacer la demanda industrial se comiencen a construir las grandes empresas hidroeléctricas, más viables económicamente.

De ahí el tratado bilateral de Itaipú que de hecho significa una imposición imperialista a través de Brasil y la explotación de otros recursos naturales como son los forestales y los agrícolas. Por ello encontramos que dentro de la estructura económica paraguaya se da un alto crecimiento sostenido por sus variables fundamentales, lo que ha permitido que, en una sola década, Paraguay pase de ser un país de débil desarrollo a ser un país de desarrollo capitalista monopolista dominado por las compañías transnacionales.

Lo anterior da por resultado la profundización de la dependencia económica y política de Paraguay y su inclusión dentro del sistema capitalista como país subdesarrollado.

NOTAS

¹ CEPAL, *América Latina y los problemas actuales de energía*, p. 13.

² *Ibid.*, p. 145.

³ *Ibid.*, p. 147.

⁴ *Loc. cit.*

⁵ *Energy Détente*, enero, 1981; Enrique Flores Díaz, en: *Uno más Uno*, México, 22 de febrero de 1981, p. 13.

⁶ *National Geographic*, febrero, 1981; Bolívar Hernández, en: *Uno más Uno*, México, 22 de febrero de 1981.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Energy Détente*, enero, 1981.

¹⁰ “Adela” (Atlantic Development Group for Latin America) constituida por 240 monopolios de las finanzas y la industria. El gobierno paraguayo en 1969 le otorgó un contrato para el desarrollo agrícola, ganadero, forestal e industrial. Henry D. Ceuppens, *Paraguay año 2 000*, p. 188-190.

¹¹ Interesante y extensa información sobre los términos del Tratado de Itaipú podemos ver en Efraín Enríquez Gamón, *Itaipú, aguas que valen oro*.

¹² CEPAL, *op. cit.*, p. 147.

¹³ El Tratado de la Cuenca del Plata fue firmado el 24 de abril de 1969 en Brasilia, entre Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Su objetivo principal estaba encaminado a mancomunar esfuerzos para promover el desarrollo armónico y la integración física de la Cuenca del Plata.

¹⁴ Revista *América Latina*, núm. 5, URSS, Academia de Ciencias, 1980.

¹⁵ “[Ya] a mediados del siglo pasado, el Paraguay era uno de los países más progresistas de América Latina. Tenía altos hornos, ferrocarriles, una amplia red vial y una avanzada política educativa, con instrucción gratuita y obligatoria a cargo del Estado. Este nivel de desarrollo había sido logrado, bajo los gobiernos de José Gaspar Rodríguez de Francia y López, sobre la base del propio esfuerzo nacional y sin someter al país bajo ninguna de las potencias extranjeras de la época. Las oligarquías pro-imperialistas de Brasil y Argentina y el Uruguay veían con alarma el ‘mal ejemplo’ que el gobierno de Francisco Solano López representaba al señalar la ruta de un desarrollo independiente. Resolvieron, por tanto poner fin a esa experiencia semi-autárquica paraguaya. La Triple Alianza —Brasil, Argentina y Uruguay— montó un gigantesco ejército. No contaron con el extraordinario heroísmo del pueblo paraguayo. La guerra resultó más difícil de lo que esperaban, duró seis años. Cuando al final —1870— Paraguay fue derrotado, había perdido más del 70% de su población y constituyó un corte drástico en su desarrollo histórico”... Revista *Vencer*, núm. 5, México, 1980.

¹⁶ *Ibid.*, p. IX.

¹⁷ Desde 1970, se han firmado convenios bilaterales con Brasil, principalmente en el área de las obras de infraestructura, “Puente de Amistad”, rutas, etc., y en 1980, se comienza la construcción de la “ferrovia de Soja”. Entre Argentina y Paraguay en diciembre de 1980 se firman 7 convenios con vistas a obras de infraestructura, que financiará en su mayor parte este país.

¹⁸ Entre las diversas opciones nucleares existentes, Brasil prefiere la del uranio enriquecido —que se ve obligado a importar de E. U. por un convenio firmado en 1964. La opción

tecnológicamente más acorde al aparato productivo es el reactor de uranio natural del cual es poseedor... Nilton Kosminsky V., *Perspectivas de la política energética brasileña frente a la crisis del capitalismo*.

¹⁹ Se estima que Brasil tiene en la plataforma continental una reserva de 739 000 000 barriles de petróleo. Periódico *Excelsior*, México, 17 de febrero de 1981.

"...Brasil es quien tiene después de E. U., la mayor reserva de pizarra en el mundo. Su explotación saldría en un promedio del 20 por ciento menos que el precio actual del petróleo." Periódico *Excelsior*, México, 16 de enero de 1981.

²⁰ Situación financiera de Brasil: deuda externa: 14 700 millones de dólares; servicio deuda externa: 60 000 millones de dólares. *Uno más Uno*, México, 23 de enero de 1981.

²¹ Secundino Giménez, *Los brasileiros en Paraguay*: "... entre los distintos trabajos de investigación que podemos encontrar alrededor de este fenómeno, tenemos: ... la ocupación ya tomó internamente los departamentos de Alto Paraná, Kanendiyú y Amambay. Pero en continuo proceso de expansión están los departamentos de Caazapá, Itaipú, San Pedro, Guairá y Concepción, e inclusive ya se les tiene en el Chaco en la empresa brasileira COPAGRO S.A., con todo su personal brasileño, que compró en el departamento de Nueva Asunción 48 mil Has. de tierra ..." *ABC-Color*, Asunción, 1 de octubre de 1979.

²² Ricardo Canese, *Demanda de energía eléctrica en el Paraguay*, Asunción, 1980.

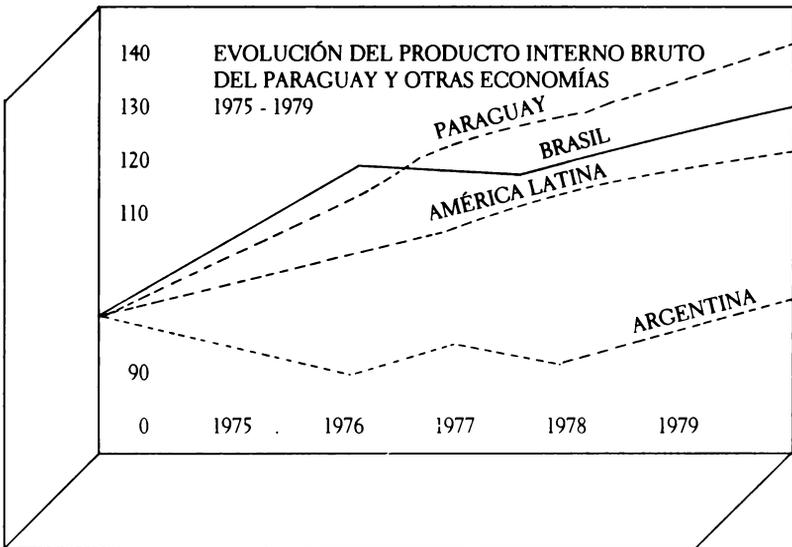
²³ "... todos los derivados del petróleo sufrirán en Brasil un aumento del 20-30% decretado por el Consejo Nacional del Petróleo, lo cual reducirá el consumo en un 30% como una política de desalentar el consumo a través del precio". Periódico *Excelsior*, México, 3 de febrero de 1981.

²⁴ Brasil consumió una proporción de 20% menos de petróleo que vendría a corresponder a la parte sustituida por el alcohol, para los vehículos. *Uno más Uno*, México, 20 de enero de 1981.

²⁵ Periódico *Excelsior*, México, 20 de abril de 1980, p. 28.

²⁶ Ricardo Canese, *¿Puede el Brasil?*

²⁷ Evolución del PIB en América Latina, CEPAL/1979.



FUENTE: CEPAL, Balance preliminar, 1979.

²⁸ Domingo Laino, *Energética en el Paraguay: fraude y entrega*, Asunción, 1975.

²⁹ Desde el año 1953, la inversión en el Paraguay está regulada por cuatro leyes: Ley n° 202 de Fomento Industrial, la n° 246 vigente hasta 1970, año en que se promulga la n° 216 cuyo objetivo principal fue liberar la incorporación de bienes de capital hasta 1975 y actualmente rige la n° 550 que exonera de todos los derechos actuales e impuestos a la renta, libre convertibilidad y envío utilidades al exterior. Domingo Latino, *De la independencia a la dependencia*, Asunción, 1972.

30

PARAGUAY

PRODUCCIÓN	MILES	TON.		
	1979 volumen ton. (miles)	Kg. rendimiento por Ha.	1980 volumen ton. (miles)	(miles Kg.) rendimiento por Ha.
algodón	234.000	1.560	260.000	1.330
soya	850.000	1.800	900.000	1.900
trigo	58.508	1.065	71.000	1.090

FUENTE: Elaborado en base a BPD, *Paraguay económico*, Asunción, de enero-diciembre.

³¹ El departamento regional más tecnificado es Itaipú, donde el desempleo crece en unos 20 000 trabajadores por año y donde a pesar de que el área cultivada aumenta, disminuye el número de trabajadores, a ese ritmo; dentro de 10 años se cultivará un 60 por ciento más de Ha. pero con 50 por ciento menos de fuerza de trabajo. BPD, *Paraguay económico*, núm. 16, Asunción, julio de 1980.

32

PARAGUAY

Proyección de la superficie cultivada mecanizada (Has.)

Años	Superficie mecanizada	%	Superficie no mecanizada	%	Total
1975	159.782	14	944.778	86	1.103.960
1976	171.310	15	969.505	85	1.140.815
1977	188.850	16	1008.610	84	1.197.400
1978	209.170	17	1044.370	83	1.253.540
1979	229.205	17	1094.035	83	1.323.240
1980	249.845	18	1146.505	82	1.396.910
1981	271.735	18	1279.895	82	1.491.030

FUENTE: STP, *Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal*, Asunción (/), 1977-1981.

Nota: Los datos últimos señalan que las metas han sido pasadas.

PARAGUAY: VALOR Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (FOB)

	Millones de dólares					Composición porcentual			Tasas anuales de crecimiento		
	1970	1973	1974	1975a	1970	1970	1975	1971-1973	1974	1975	
Principales productos de exportación	33.9	65.9	83.8	82.7	52.8	47.0	24.8	27.2	1.3		
Productos de la carne	15.0	40.0	34.2	32.2	23.4	18.3	39.0	14.5	5.8		
Maderas	6.1	11.8	24.7	27.0	9.5	15.9	24.5	103.9	13.0		
Aceites vegetales	7.0	6.6	13.5	10.6	10.9	6.0	2.0	104.5	21.5		
Tabaco	5.8	7.5	11.4	12.0	9.0	6.8	9.5	52.0	5.3		
Nuevas exportaciones	4.9	25.8	45.4	53.0	7.7	30.0	74.0	76.0	16.7		
Soya	-	10.4	15.0	17.5	-	9.9	-	44.2	16.6		
Algodón	4.0	11.6	16.5	20.1	6.3	11.4	43.0	42.2	21.8		
Azúcar	-	1.1	10.0	6.7	-	3.8	-	809.0	33.0		
Café	0.9	2.7	3.9	8.7	1.4	4.9	44.1	44.4	123.0		
Otras exportaciones	25.3	35.2	40.6	40.5	39.5	23.0	11.6	15.3	0.2		
Total	64.1	126.9	169.8	176.2	100.0	100.0	25.5	33.8	3.8		

FUENTE: Banco Central de Paraguay. a/ Cifras preliminares.

	Millones de dólares				Composición porcentual			Tasas anuales de crecimiento	
	1976	1977	1978	1978	1970	1978	1976	1977	1978/a
	7.7	9.7	7.9	30.7	52.8	17.2	26.0	18.6	
	2.1	2.2	2.4	9.3	23.4	34.4	4.8	9.1	
	1.2	2.0	2.0	7.8	9.5	57.1	66.7	41.4	
	1.7	2.9	1.7	6.6	10.9	54.5	70.6	41.4	
	1.5	1.4	.9	3.5	19.0	25.0	6.7	35.7	
	6.7	13.7	13.8	53.7	7.7	76.3	104.5	0.7	
	3.2	5.6	3.8	14.8	—	77.8	75.0	32.1	
	3.5	8.1	10.0	38.9	6.3	75.0	131.4	23.5	
	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3.8	4.5	4.0	15.6	37.7	17.4	18.4	11.1	
	18.2	27.9	25.7	100.0	100.0	2.8	53.3	7.9	

FUENTE: CEPAL, sobre base del BCP, Boletín estadístico y el FMI, abril, 1979.
a/ preliminares.

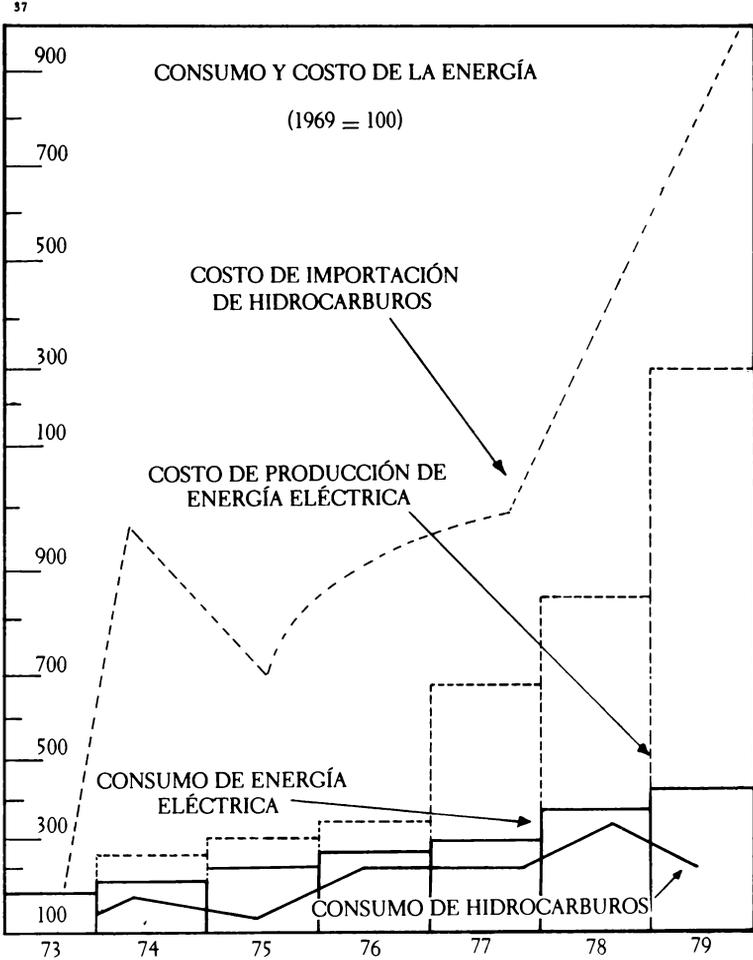
HIDROELÉCTRICAS

	Itaipú	Yacyretá	Corpus
1. Ejecución a cargo de	Brasil/Paraguay	Argentina/Paraguay	Argentina/Paraguay
2. Fecha inicio de obras	1975	1973	En estudio
3. Capacidad	12.6MMKw	Aprox. 4.0 MMKw	Aprox. 2.5 MM 3.6 MMKw
4. Costo	US\$ 9,700 MM	Aprox. US\$ 5,000 MM	Aprox. US\$ 2,500. 3,500 MM
5. Inversiones directas realizadas hasta Agosto de 1978	US\$ 1,600 MM	Nominal	—
6. Inversiones proyectadas para 1970	US\$ 800 MM	US\$ 200 MM	—

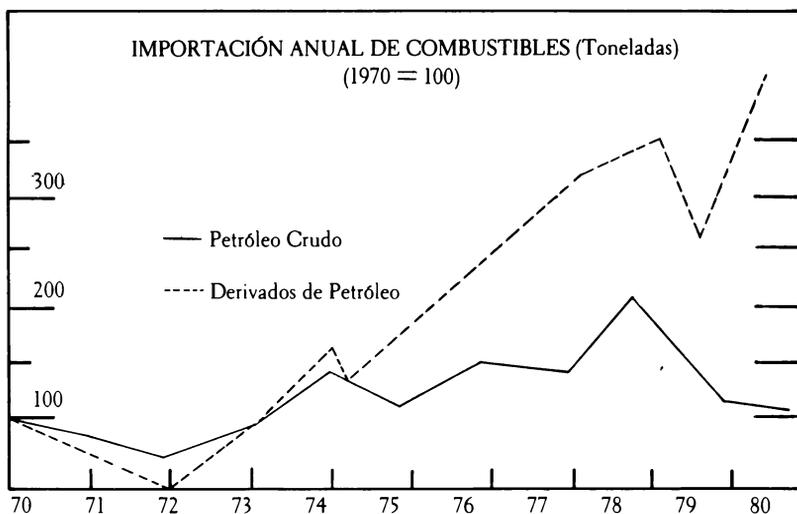
FUENTE: Asociación de Bancos Privados de Paraguay, Asunción, 1978.

³⁵ A un costo de 500 millones de dólares, no se prevé su electrificación... servirá para trasladar miles de tons. de soja, vía Brasil, al mercado internacional. BPD, *Paraguay económico*, núm. 11, Asunción, marzo 1980.

³⁶ Brasil: 113 200 000 habitantes; Paraguay: 2 800 000 habitantes. PIB Brasil 231 000 millones de dólares y Paraguay: 1 300 millones de dólares, en 1978.

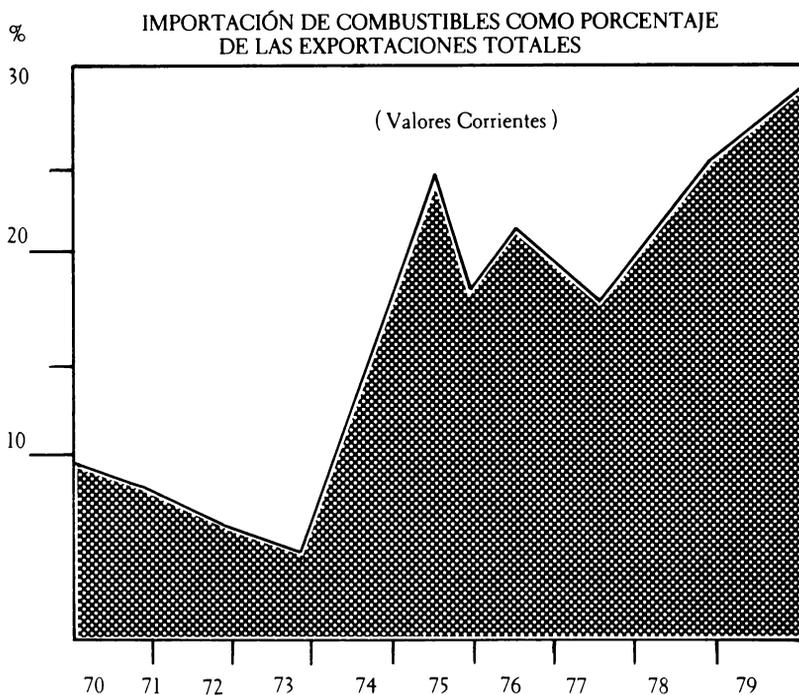


FUENTE: BPD, *Paraguay económico*, núm. 16, Asunción, julio de 1980.



La evolución de las importaciones de derivados del petróleo demuestra la creciente incapacidad de las instalaciones de REPSA para satisfacer la demanda interna.

FUENTE: Banco Central. Para 1980, extrapolación en base al primer semestre.



FUENTE: BPD, *Paraguay económico*, vol. II, núm. 15, Asunción, junio de 1980.

³⁸En junio de 1979, REPSA incrementó precios internos de los derivados del petróleo en más del 60 por ciento. Ingeniero Ricardo Canese en: BPD, *Paraguay económico*, núm. 16, Asunción, julio de 1980.

³⁹Balanza de Pagos 1979/ Banco Central del Paraguay, ver cuadros sobre importación anual de combustibles y consumo y costo de la energía.

⁴⁰En el Chaco paraguayo, el 60 por ciento del territorio nacional. Prospecciones realizadas por empresas extranjeras, a las que el gobierno de Stroessner privilegia con múltiples concesiones, señalan que existen enormes reservas de minerales (uranio) y petróleo.

⁴¹“Comenzando desde 1983 y creciendo continuamente a medida que se instalan las máquinas de Itaipú, Yacyretá y Corpus, el Paraguay tendrá acceso a un total de energía hidroeléctrica de 56,000 gigawatshora-año, aproximadamente en el próximo decenio”, según afirmó el ingeniero Enzo Debernardi en el Segundo Simposio de Energía del Hemisferio Occidental, en Río de Janeiro, al disertar sobre el “caso paraguayo”. ABC - Color, Asunción, 12 de septiembre de 1980.

⁴²En 1980 ya existe el plan de sustitución del petróleo por el alcohol de caña, y es justamente Brasil quien financia la creación de cultivo e instalación de tres plantas procesadoras que en su primera fase de producción requieren de 10 mil Has. de caña en áreas de predominio minifundiarario, que irá por tanto a eliminar en gran parte la producción de subsistencia. BPD, *Paraguay económico*, septiembre, 1980.

PROMEDIO DE INCREMENTO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL PARAGUAY.

1966 - 1971	1971 - 1975	1975 - 1979	1980
8.6	10.3	14.9	15

BPD, *Paraguay económico*, núm. 14, mayo de 1980.

LISTA PARCIAL DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN PARAGUAY AÑOS 1975-1979

<i>Nombre de las empresas</i>	<i>Has.</i>	<i>Capital (millones de dólares)</i>	<i>Ocupación</i>
—Florida Peach Corporation	17,500	12	Soya
—CAIGISA	15,000	15	aceites-silos
—Grupo Diefenthal	—	—	programa-agrícola
—Grupo Troibesithal	15,000	2	agrícola-ganadero
—Grupo Proyecto	840,000	8	agrícola
—Mennonitas	385,000	—	agrícola-ganadero
—Karapá S.R.L.	80,000	—	agrícola
—Americana S.A.	100,000	—	agrícola
—Gulf and Western Corp.	54,000	—	agrícola
—Empresa F. Trasatlántica	169,740	—	agrícola
—American Jojoba	40,000	—	aceites
—Parivents	4,500	3	agrícola
—Empresa INTRA	3,200	—	agrícola
—ADELA	500,000	—	agrícola-forestal
—BLAISUR S.A.	—	1	—
—CAPSA	—	5	agrícola
—ACRILA	—	3	agrícola
—San Pedro Ind. y Col.	—	2	silos

FUENTE: Recopilado de informes del diario ABC-Color, Asunción, 1979-1980.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. ALSHERIDAH, Mazhar, “América Latina y el petróleo árabe”, en: *MOI*, núm. 10, febrero, 1980.
2. CANESE, Ricardo, “¿Puede el Brasil sustituir la energía de Itaipú con sus recursos hidráulicos propios?”, en: *Estudios paraguayos*, Asunción, 1980.
3. ———, *Tarifa y demanda de la energía eléctrica en el Paraguay*, Asunción, 1980.
4. CEPAL, *América Latina y los problemas actuales de energía*, México, FCE, 1975.
5. ENRÍQUEZ GAMÓN, Efraín, *Itaipú, aguas que valen oro*, Buenos Aires, 1975.
6. JACOBO, Juan, “El petróleo y el Tercer Mundo”, en: *MOI*, núm. 9, diciembre de 1979 y enero de 1980.
7. KUZNETSOV, Viacheslav, *La influencia de la crisis energética en la situación monetaria financiera de los países latinoamericanos*.
8. LAINO, Domingo, *Energética en el Paraguay: fraude y entrega*, Asunción, 1975.
9. LINARES, Pablo Eleazar, “El fondo especial de la OPEP, y sus operaciones en América Latina”, en: *MOI*, núm. 9, diciembre de 1979.
10. MIERES, Francisco, *Crisis capitalista y crisis energética*, México, Nuestro Tiempo, 1979.
11. PERLO, Víctor, “Ellos dijeron”, en: *MOI*, núm. 11, marzo, 1980.
12. Revista *América Latina*, núm. 1, URSS, Academia de Ciencias, 1977.
13. Revista *Síntesis* (resumen de noticias del Paraguay), núm. 13, 1979; núms. 14, 15 y 16, 1980 y núm. 17, 1981.
14. RISTÓNOV, Valeri, *Cabeza de playa de los monopolios japoneses en América Latina*.
15. TANZER, Michael, *Energéticos y política mundial*, México, Nuestro Tiempo, 1975.

CRISIS, POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LA ECONOMÍA MEXICANA

FAUSTO BURGUEÑO LOMELÍ

El periodo 1977

El inicio de 1977 se caracterizó por el optimismo gubernamental respecto al comportamiento de la economía. Ya el Primer Informe de Gobierno del presidente José López Portillo señala el destino de la economía restringiendo el ciclo económico al sexenio. En dicho informe se manifestaba que en los dos primeros años de gobierno (1977-1978) se tratarían de resolver los problemas más agudos; los años 1979-1980 corresponderían al proceso de consolidación de la economía y los de 1981-1982 a la franca recuperación y desarrollo autosostenido. Además, ya en el año de 1978 se nos alertaba sobre la principal dificultad que tendríamos que afrontar: prepararse para vivir en la opulencia.

Es innecesario comentar, ante los hechos de 1982 y 1983, cuáles fueron, en realidad, los resultados de las predicciones formuladas, y cómo los diversos voceros gubernamentales y la mayoría de los economistas tuvieron que reconocer que los hechos, al fin y al cabo objetivos y concretos, se contraponían a sus palabras. El hecho económico y social rebasó así todo el planteamiento ideológico que sirvió de sustento a los “conductores” de la Nación.

I. Antecedentes de la profundización de la crisis

Hemos sostenido que cuando se habla de crisis nos referimos al proceso de acumulación capitalista, cuya tendencia y desarrollo implica una agudización de las contradicciones del sistema.

El desarrollo de las fuerzas productivas en el periodo 1950-1976 permitió un mayor crecimiento y desarrollo del sector productor de los medios de producción que el alcanzado en el sector de bienes de consumo. Algunos datos ofrecidos por el Banco de México, Cuentas Nacionales y Acervo de Capital demuestran un crecimiento en la producción bruta del capital en el Sector I: del 46.6 por ciento en 1950 al 54.4 por ciento en 1975. Por otra

parte, la producción del sector de bienes de consumo decreció de un 53.2 por ciento a un 45.6 por ciento en el mismo periodo. El mismo comportamiento se dio en relación al producto interno bruto en el que creció la producción de los medios de producción a tasas mayores que los del consumo. A su vez, el proceso de acumulación en el periodo se caracterizó por un pronunciado incremento en la composición orgánica de capital, manifestado éste en varias ramas de la producción industrial, que además recibiría la transferencia de valor del sector primario, convirtiéndose en un elemento central de la acumulación capitalista. Asimismo se manifestó un creciente proceso de monopolización en industrias básicas tales como la metálica, aparatos eléctricos, equipo de transporte, química, farmacéutica y automotriz, que fueron controladas por empresas multinacionales que poseían una alta composición orgánica de capital y obtenían altas tasas de plusvalía.

En los años setenta, se produjeron y desarrollaron cambios importantes de tipo estructural promovidos por el carácter que asumió el proceso de acumulación de capital en México, de los que se pueden destacar los siguientes:

a) Desarrollo y crecimiento de las fuerzas productivas que modificaron la estructura de proceso de acumulación, tanto en relación a los medios de producción como a la utilización de las fuerzas de trabajo.

b) La estructura de la producción sufrió cambios significativos en cuanto a su composición, teniendo la industria y los servicios un papel cada vez más importante.

c) El PIB mantuvo altas tasas de crecimiento aun cuando existieron marcadas diferencias entre las actividades productivas. El PIB creció un 4.1 por ciento en 1975, 2.1 en 1976, 3.3 en 1977, 7 en 1978, 9.2 en 1979, y 8.3 por ciento en 1980.

d) La producción agropecuaria obtuvo incrementos importantes, sobre todo en los años de 1977-1978.

e) Aun cuando existieron serios desequilibrios, la industria y, particularmente, las manufacturas mantuvieron un crecimiento importante, a precios de 1960 en el periodo 1975-1980; la industria en su conjunto creció a una tasa promedio del 6 por ciento. Las manufacturas aumentaron en un 3.6 por ciento en 1975, 3.5 en 1976, 3.6 en 1977, 8.8 en 1978 y 8.5 por ciento en 1979.

Pero al mismo tiempo se generaron las propias contradicciones que provocó el proceso de acumulación adoptado en el que se presentaron varios ciclos económicos y sus crisis recurrentes hasta 1976. La reproducción ampliada del capital entró en contradicciones cada vez más agudas y pronunciadas y el propio Estado, que jugó un papel central como factor contrarrestante a la crisis, encontró sus límites como elemento regulador. El proceso de acumulación puesto en movimiento en los años sesenta y setenta creó también otros aspectos estructurales que lo condicionaron

y limitaron generando la devaluación de 1976, así como la baja de la tasa de ganancia a partir de 1975, combinada con desequilibrios del sector externo, inflación y desempleo; disminuyó la inversión privada y se presentaron altas tasas de interés en el mercado financiero internacional, que acompañadas de una crisis monetaria y crediticia, fiscal y del sector externo, se constituyeron en los efectos de un proceso de crecimiento basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. La creciente desproporción y el desequilibrio entre los sectores productivos e incluso entre las ramas productivas, el incremento de actividades y el empleo improductivo, la ausencia de una política clara de integración industrial y de una política científica y tecnológica, fortalecieron el control de la producción más dinámica puesta en manos de las transnacionales, manteniendo así una alta dependencia de los bienes de importación que, sumada al deterioro de la producción agropecuaria, agravó los desequilibrios externos entre importaciones y exportaciones, así como lo relativo al déficit global de divisas.

El Convenio con el Fondo Monetario Internacional, en 1976, fue el punto de partida de una política de recuperación de la crisis que se basó, fundamentalmente, en la reducción del gasto público y su reorientación productiva, la contención salarial, la disminución de la deuda pública y la elaboración de una política fiscal y crediticia. El gobierno de López Portillo centró su administración económica en dos prioridades centrales: el sector agropecuario, que con el programa denominado Sistema Alimentario Mexicano buscaría satisfacer la demanda interna de alimentos y el sector energético, con cuyos recursos se podría responder a los requerimientos financieros del país y a su vez serviría como instrumento de financiamiento y desarrollo del resto de las actividades productivas de México.

Ya en el año de 1977, la formación bruta de capital se incrementó respecto a la obtenida en 1976 y en 1978 fue de 93.451 millones de pesos, lo que representó un incremento del 15.8 por ciento respecto a 1977. El producto interno bruto creció en un 8.1 por ciento en 1978 y un 9.2 por ciento en 1979, con lo cual sobrepasó las tasas de crecimiento alcanzadas en los años de 1972 a 1974. Por su parte, los salarios mínimos reales disminuyeron en un 8.6 por ciento entre el primer trimestre de 1977 y el primer trimestre de 1978, mientras que las utilidades de las empresas más grandes aumentaban en un 90 por ciento en 1977 respecto a 1976. El financiamiento a las empresas privadas por parte del sistema bancario fue recuperado en 1979, además de que se establecieron nuevos sistemas de ahorro a mayor plazo, con lo que la captación interna creció ligeramente.

Sin embargo, la economía en su conjunto continuó manteniendo grandes desequilibrios entre los sectores y las ramas productivas, y aun cuando se incrementaron la inversión pública y la privada y se lograron altas tasas de incremento en el PIB, en la fabricación de bienes duraderos y en la industria de la construcción, que junto con el petróleo obtuvieron mayores incrementos en la producción, persistieron los desequilibrios en el sector externo y el aumento en el déficit fiscal.

1. No es posible desligar la crisis de la economía mexicana de la crisis internacional. Por ello es importante anotar que la política económica como el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, se elaboró y estableció con una visión eficientista sobre el crecimiento económico a lograr, planteando una estrategia de desarrollo que no consideró las contradicciones y desequilibrios que generaría:

a) Desproporción en la producción agrícola: a pesar de que este sector fue considerado prioritario puso de manifiesto un crecimiento negativo que ya en 1979 fue del -2 por ciento. Ello repercutió en la importación de granos por 4 millones de toneladas y de 8.8 en 1981.

b) Dentro de la producción manufacturera se observó una polarización entre los bienes de consumo duraderos, que en 1978-1979 crecieron a tasas tres veces mayores que las de los bienes no duraderos. En pleno auge manufacturero (1980) este sector bajó su producción en un 2 por ciento en el primer semestre y 4 por ciento en el segundo semestre.

c) La crisis del sector externo se agravó por el incremento de las importaciones que requirió el sector manufacturero, la política de liberación de importaciones seguida después del convenio con el FMI en 1976, cuyo resultado y efecto fue de un 30 por ciento del total de la penetración de importaciones entre 1977-1980 y la creciente deuda externa total, agregando a ello las altas tasas de interés internacional.

d) A pesar de que el superávit petrolero creció más rápido que el déficit manufacturero, aquél no fue capaz de cubrir el segundo. En 1981, el déficit global en cuenta corriente fue de 11 704 millones de dólares. Además la balanza agropecuaria y de servicios mantenía déficits.

e) En 1981, el déficit industrial fue del 61 por ciento del total de divisas y el originado por pagos al extranjero y el servicio de la deuda alcanzó el 37 por ciento.

El año de 1981 se caracterizó por la profunda crisis y la recesión internacional, baja del precio del petróleo y otras materias primas, políticas proteccionistas, déficit externo, deterioro de las finanzas, aumento de la deuda externa, espiral inflacionaria y las contradicciones entre sectores productivos e improductivos. La crisis comprende así, tanto la interrupción del proceso interno de acumulación de capital, como el recrudescimiento de las contradicciones generadas por las relaciones de producción. La interrupción del proceso de producción social real se presenta como la reproducción incompleta del circuito total del capital. En este sentido, "La crisis sólo puede explicarse y exponerse en base al movimiento real de la producción capitalista, de la competencia y el crédito que nace de las determinaciones de formas de capital".

La acumulación de capital constituyó un proceso de reproducción ampliada, iniciada en los años treinta y que se prolongó hasta los años setenta, tan sólo interrumpida por fases cíclicas recesivas menores por la

influencia del sector externo, de los ciclos de la economía internacional, particularmente de los Estados Unidos. A partir de 1970, el proceso de producción y reproducción del capital entró en contradicción y empezó a tener obstáculos; asimismo éste se vio interrumpido tanto en 1976 como a fines de 1981 y principios de 1982.

2. 1981, antecedente claro de la profundización de la crisis.

En el año de 1981, en relación a 1980, las importaciones de mercancías fueron de 23 900 millones de dólares y las exportaciones de 19 000 millones de dólares, alcanzándose un déficit al cierre de 1981 de 4 900 millones de dólares. Del total de las exportaciones, el petróleo y el gas representaron el 71 por ciento. Las exportaciones industriales sólo aumentaron el 1.4 por ciento respecto a 1980, con un total de 3 425 millones de dólares. Del total de las adquisiciones del exterior el 65 por ciento fue del sector privado y el 35 por ciento del sector público.

Entre las principales importaciones se encuentran las de la industria manufacturera (principalmente en productos metálicos), la de maquinaria y equipo y la de productos siderúrgicos, con la siguiente composición: bienes intermedios, 59 por ciento; bienes de capital, 31 por ciento y bienes de consumo, 10 por ciento. La composición del total de las exportaciones fue: bienes intermedios, 90 por ciento; bienes de consumo, 9 por ciento y bienes de capital, 1 por ciento.

El déficit de la cuenta corriente se mantuvo deficitaria en forma cada vez más pronunciada, incrementándose de 6 600 millones de dólares en 1980 a 12 544 millones de dólares en 1981.

1980	6 600
1981	12 544
1982	3 360

a) La deuda externa pública se duplicó de 1977 a 1981 como resultado de una irresponsable política de financiamiento externo, y al optimismo con el que se esperaban los ingresos derivados del petróleo, que de 22 912 millones de dólares en 1977 ascendieron a 45 000 millones de dólares en 1981.

1977	22 912 millones de dólares
1978	26 264 millones de dólares
1979	29 757 millones de dólares
1980	34 200 millones de dólares
1981	45 000 millones de dólares

Ya en 1981, se calculaban cuando menos 15 000 millones de dólares de la deuda privada. Deuda total: 60 000 millones de dólares; para 1982, la deuda total fue de 85 000 millones de dólares.

De la deuda pública total en 1981, sólo PEMEX debía en julio de 1981, 11 000 millones de dólares y para febrero de 1982, su deuda era de 22 000 millones de dólares. En 1981 se calculaba que, debido a la flotación del peso, por cada centavo de aumento del dólar significaría un aumento de la deuda de 600 millones de pesos, y que por cada punto de incremento en la tasa de interés internacional, la deuda se incrementaría en 100 millones de pesos.

El déficit gubernamental aumentó en forma constante: en 1980 fue de 258 000 millones de pesos, aumentando casi tres veces para 1981, a 657 000 millones de pesos. En 1982 el déficit alcanzó el 17 por ciento cón relación al PIB.

Déficit gubernamental (miles de millones de dólares)	
1978	72.7
1979	150.1
1980	258.0
1981	657.0

La inflación se convirtió en un fenómeno estructural y crónico en el comportamiento de la economía mexicana: después de pasar de una inflación de dos dígitos a mediados de los setenta —en 1975 era del 15.7 por ciento y en 1978 del 16.7 por ciento—, se pasa en 1980 del 28.7 por ciento al 32 por ciento en 1981, para alcanzar en 1982 el 98.8 por ciento.

Tasa de inflación (porcentaje)	
1977	30.4
1978	16.7
1979	20.1
1980	28.7
1981	32
1982	98.8

Con relación a transferencias y subsidios se nota un incremento constante, que de 613 000 millones de pesos en 1980 asciende a 720 000 millones en 1981.

1980	613
1981	720
1982	1 billón (aproximadamente)

De estos totales, buena parte de los recursos fueron de PEMEX, FF.NN., CFE, CONASUPO e IMSS-ISSSTE.

Por otra parte, la inversión extranjera directa acumulada se incrementó en forma sobresaliente entre 1977-1978, en relación con otros periodos. Si bien en el periodo mencionado se mantuvo en 6 000 millones de dólares, aumentó en 1980 y 1981 hasta llegar en 1982 a un total de 11 000 millones, aproximadamente. A su vez, las nuevas inversiones empezaron a decrecer en 1981 y alcanzaron un monto menor que el de 1979; en 1982 existió realmente un estancamiento.

IED acumulada

1978	6 026 millones de dólares
1980	8 458 millones de dólares
1981	10 159 millones de dólares
1982	10 786 millones de dólares

Si bien la inversión extranjera directa no representó un alto porcentaje en la formación bruta del capital, sus efectos fueron de gran importancia en el comportamiento de la economía, en la medida que cerca del 78 por ciento de su total se canalizó en las industrias más dinámicas del sector manufacturero.

La inversión bruta fija en relación a sus incrementos presentó serias disminuciones con relación a otros años. En 1980 esta inversión se incrementó con relación a 1979 en un 18.1 por ciento en el sector público y un 13.5 por ciento en el sector privado. Para 1981 el incremento respecto a 1980 fue del 14 por ciento y 12 por ciento respectivamente. En 1982, descendió la inversión total en un 16.8 por ciento, 12.7 por ciento en el sector público y 20 por ciento en el sector privado.

El valor del producto interno bruto en precios corrientes se incrementó en un 26 por ciento en 1978, 31.2 por ciento en 1979, 39.4 por ciento en 1980, 37.4 por ciento en 1981 y 57.6 por ciento en 1982.

1977	1.849 billones de pesos
1978	2.337 billones de pesos
1979	3.068 billones de pesos
1980	4.276 billones de pesos
1981	5.874 billones de pesos
1982	9.417 billones de pesos

Sin embargo, el PIB de 1982 en relación al de 1981 fue menor (a precios constantes) en un 0.5 por ciento. La variación porcentual en precios constantes, después de mantener una tasa de crecimiento adecuada del 4.5 por ciento promedio en el periodo 1975-1977, logró incrementos del 8.2 en 1978, 9.2 en 1979, 8.3 en 1980 y del 7.9 por ciento en 1981, para descender en una tasa negativa de cuando menos el -0.2 por ciento en 1982.

T. C. del PIB (porcentaje)

1977	3.4
1978	8.2
1979	9.2
1980	8.3
1981	7.9
1982	-0.2
1983	(-5.3)

El producto interno bruto *per cápita* tuvo también una tendencia a decrecer, ya que si bien aumentó progresivamente de 1977 a 1981, bajó en 1982 (precios corrientes).

PIB por habitante (Dls.)

1977	1 287
1978	1 563
1979	1 992
1980	2 685
1981	3 364
1982	2 235

Para el año de 1981 fue clara la recesión y en algunos casos el estancamiento de la producción industrial. El sector industrial, según datos del primer semestre de 1981, se incrementó en un 6.7 por ciento respecto a 1980, mientras que en 1980 el incremento fue del 8 por ciento. Por otro lado, las manufacturas cuyo incremento en 1980 fue del 7.2 por ciento en 1981 fue sólo del 5.7 por ciento (ponderado a enero-marzo de 1980), aclarando que en el caso del vestido, del papel, de los alimentos y las bebidas, hubo un estancamiento.

Según datos del Banco de México, la tasa de crecimiento industrial a precios de 1970 tuvo el siguiente comportamiento:

1977	2.6%
1978	10.1%
1979	11.3%
1980	9.2%
1981	8.6%
1982	(-2.5%) estimado

Las actividades más importantes en 1981 respecto a 1980 tuvieron el siguiente comportamiento en porcentajes de incremento (primer trimestre de 1980 y primer trimestre de 1981).

	Porcentaje		
	1980	1981	1982
Electricidad	10.6	4.3	7
Minero-Metalurgia	12.9	5.0	-2
Petróleo-Petroquímica	20.4	18.3	5
Siderurgia	0.3	0.8	
Mat. Construcción	12.9	10.7	-4
Papel, celulosa	11.4	-0.9	
Prod. Químicos	9.6	6.6	4
Textiles		-2.6	0
Alimentos	9.4	1.1	3
Bebidas	16.9	1	2

En general, la producción de manufacturas desde 1978 inicia un proceso de decrecimiento. El índice de producción fue el siguiente:

1978	9 %
1979	8 %
1980	5.6%
1981	4.8%
1982	-2.6%

El dato obtenido para 1983 muestra que la actividad industrial (septiembre 1983) bajó en su conjunto en un 10 por ciento sobresaliendo la disminución de las manufacturas en un 10.5 por ciento y el de la construcción en un 11-12 por ciento.

Crecimiento industrial 1982-83 (enero-mayo)
(porcentaje precios constantes)

	1982 (Anual)	Enero-Mayo 1982/1981	1983/1982
Ind. básicas	2.9	3.0	- 4.6
B. Consumo Int.	- 3.8	2.5	- 4.8
B. Consumo Final	- 6.3	0.8	-16.9
Alimentos	(3.0)	4.0	(- 2)
Duraderos	(-20)	-4.7	(-37.8)
General	- 2.9	1.9	- 9.8

El sector agropecuario que durante 1980 logró un incremento del 7 por ciento y en 1981 de un 6.4 por ciento, en 1982 decrece al -2 por ciento.

II. El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Inmediato de Reordenación Económica

El 1º de diciembre de 1982, en su discurso de posesión, el presidente de la República propuso un Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), que posteriormente quedó integrado al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este programa inspiró las diversas acciones del Estado y su política económica orientada a resolver los principales obstáculos y problemas que revistió la crisis de la economía mexicana. Durante los años de 1982-1985 se encuentran las principales líneas de acción contenidas en lo fundamental en lo siguiente:

1. Disminución del gasto público.
2. Protección del empleo.
3. Continuación de obras con criterio selectivo.
4. Reforzamiento de las normas relativas a la gestión del gasto público.
5. Protección y estímulo a los programas de producción, importación y distribución de alimentos básicos.
6. Aumento de los ingresos públicos.
7. Canalización del crédito a prioridades del desarrollo nacional.
8. Reivindicación del mercado cambiario.
9. Reestructuración de la Administración Pública Federal.
10. Rectoría del Estado.

Se puede afirmar que en base a estos diez puntos del llamado Plan Nacional, se planteó la búsqueda —según los términos del gobierno en turno— de la equidad en el ajuste económico en los rubros del gasto, precios y tarifas, combatiendo desequilibrios fundamentales como la inflación, el déficit fiscal y externo, la protección de la planta productiva y el empleo. Estos factores también fueron acogidos y reiterados en las diversas “Cartas de Intención” del Fondo Monetario Internacional.

En ocasión de la publicación del PND, fue también inmediata la reacción y opinión de los diversos voceros del gobierno en el sentido de manifestar elogios desmesurados a los propósitos y objetivos del Plan; lo mismo que por parte de los empresarios y de los partidos políticos como el PRI, PST, PAN y el PPS.

Los objetivos que se proponían en el PND fueron en esencia, los siguientes: *a)* Conservar y fortalecer las instituciones democráticas; *b)* vencer la crisis; *c)* recuperar la capacidad de crecimiento y *d)* iniciar los cambios cualitativos.

Sin abundar demasiado, nos resulta claro que de todos estos objetivos ninguno de ellos fue resuelto y que en el caso de la capacidad de crecimiento, éste no se caracterizó por un crecimiento constante, y si bien en 1984 se obtuvo una tasa de crecimiento del producto interno bruto del 3.5 por ciento y en 1985 se calculaba en un posible 3 por ciento, lo anterior

era a partir de tasas de crecimiento de -0.2 por ciento en 1982 y de -5.3 por ciento en 1983.

En el planteamiento sobre “La estrategia económica y social” se formularon dos aspectos centrales: reordenación económica (PIRE) y cambio estructural. Sobre los cambios estructurales, sería ocioso comentar lo que no se llevó a efecto y en cuanto a abatir la inflación, proteger el empleo y la planta productiva y recuperar capacidad de crecimiento, se partió de diversos supuestos que la realidad ha demostrado que no se manifestaron de la manera prevista. Se esperaban cambios importantes en el comportamiento de la economía internacional y que a partir de 1985 se mantendría una recuperación en las economías subdesarrolladas, superar el estrangulamiento financiero externo, abatir la inflación, la recuperación del comercio, cambios favorables en los precios de las materias primas, etc. Se calculaba, también, una tasa promedio de crecimiento del 6 por ciento anual para el periodo 1985-1988; incremento del empleo en un 4 por ciento anual e incremento de la inversión en el PIB de un 24 a 25 por ciento; financiamiento en base a recursos internos reduciendo al máximo la deuda externa; disminución del déficit en la cuenta corriente de sólo de 1 a 1.5 por ciento del PIB, y reducción de la inflación a un 10 a 15 por ciento anual, cercana a la tasa de inflación de algunos países desarrollados.

Sin embargo, es evidente que los resultados de la política económica que hasta hoy se mantiene, así como los supuestos en los que se sustenta no han sido satisfactorios. Bastaría mencionar que ya en 1983 la tasa de crecimiento del PIB disminuyó en un 5.3 por ciento, el producto interno bruto por habitante también disminuyó en relación a 1982, la tasa de inflación fue del 80.8 por ciento, el desempleo abierto era superior al 13 por ciento y la deuda externa alrededor de los 90 000 millones de dólares. La política económica establecida por el gobierno ha demostrado no sólo ser incorrecta y antipopular sino además, errática y subordinada a las necesidades del capital internacional. Se profundizaron los desequilibrios estructurales en la planta productiva, se agudizaron las contradicciones y obstáculos en el sector externo, se persistió en una mayor apertura al exterior, trátase del comercio, del financiamiento externo o de la inversión extranjera. Los precios mantuvieron un aumento constante mientras que el salario se redujo, se incrementó el impuesto y se redujo el gasto público como aporte a la producción y al consumo social. La industria en su conjunto continuó subordinada a los requerimientos del comercio internacional con alto grado de dependencia tecnológica y de insumos básicos industriales, y con graves desigualdades entre sectores productivos, entre rama y rama e incluso entre empresa y empresa. Se fomentó y se avanzó en una mayor transnacionalización de la economía, cuyo grado de subordinación se dio a través de una mayor integración de la misma a las necesidades del capital a escala mundial, lo cual encontró su expresión en los “nuevos marcos nacionales”.

III. *El curso de la crisis y el comportamiento reciente de la economía mexicana*

En el curso del año de 1984, se manifestaron por parte del gobierno diversas opiniones optimistas sobre la situación económica de México. Se planteó en diversas ocasiones la posibilidad de recuperación y de importantes avances en las metas propuestas. Se aceptaba, que si bien la crisis no estaba resuelta, sí estaba controlada y se fortalecería con ello a las instituciones democráticas, a las libertades y a la paz social. Hubo repetidos pronunciamientos en el sentido de que el camino adoptado era el correcto y el único posible.

En realidad, con la aplicación severa del programa de ajuste se conseguía disminuir ciertos desequilibrios logrando reducir en forma significativa el déficit fiscal y la balanza de pagos, así como se alcanzaba una tasa de crecimiento del PIB del 3.5 por ciento respecto a 1983. La inflación se redujo en 22 puntos porcentuales, la balanza comercial continuó registrando un superávit y se reestructuró la deuda externa.

Para el propio gobierno no dejan de ser sorpresivos los resultados al final de 1984. Durante dos años de aplicación del programa de ajuste se pudieron atenuar algunos desequilibrios que se manifestaron desde 1982. Aunque precaria, reconoce la CEPAL, se consiguió cierta recuperación del aparato productivo, tanto por una mayor holgura en los gastos corrientes del sector público, como un repunte de la inversión privada y por efecto de una demanda externa mayor. Recordemos que la tasa de 3.5 por ciento del PIB de 1983, con respecto a 1982 fue más alta de lo previsto por las propias autoridades gubernamentales. Sin embargo, este repunte de la economía se logró con un alto costo social y, sobre todo, por nuevas reducciones de los salarios reales.

Pero, ¿en qué medida el año de 1984, caracterizado por un crecimiento económico, permitió asegurar una tendencia permanente que hiciera posible a su vez, resolver los graves desequilibrios de la economía así como los factores más importantes de la crisis? Por una parte está la enorme dificultad que representó el pago del servicio de la deuda externa que para 1984 llegó casi a 12 000 millones de dólares, situación que afectó directamente y de manera fundamental la estructura de flujos, tanto comerciales como financieros y de las finanzas públicas. Por segundo año consecutivo se obtuvo un superávit comercial cercano a los 14 000 millones de dólares y de 4 000 millones en la cuenta corriente y sin embargo, para compensar distintas partidas se tuvo que recurrir a más financiamiento externo, de tal manera que la deuda total externa se elevó a los 95 000 millones de dólares. También hubo una importante reacción en el rubro de las exportaciones no petroleras que se incrementaron en un 19 por ciento. Pero en esto jugaron un papel importante, entre otras cosas, la persistente devaluación del peso respecto al dólar, cierto grado de contención del

consumo interno y la elevada capacidad ociosa de varias y diversas ramas industriales.

En 1984, el servicio de la deuda externa e interna, según datos de CEPAL, representó el 37 por ciento del presupuesto total; tan sólo la deuda externa fue el 20 por ciento que fue igual al total de gastos del capital en el sector público. Se intentó así disminuir el déficit del sector público y limitar los gastos corrientes y, en particular, los de inversión. En relación a los ingresos se continuó con la política de revisión de precios y tarifas en los servicios.

En 1984, también se redefinieron las relaciones entre el sector público y el privado. Se ofreció el 34 por ciento de las acciones a los antiguos banqueros, se devolvieron empresas filiales y se establecieron las bases para la venta de empresas de propiedad estatal. Ello, sin duda, dio buenas bases para atraer la inversión privada que reaccionó favorablemente con un 9 por ciento del crecimiento, que se destinó principalmente a la construcción de viviendas, al comercio, a las actividades primarias y a las manufacturas.

La tasa inflacionaria se redujo, en 1984, al 60 por ciento. Recordemos que el pronóstico oficial era lograr una tasa de inflación del 40 por ciento y de un 35 por ciento para 1985. Esta meta no se cumplió. Las versiones oficiales sobre este aspecto fueron diversas y el hecho fue que, a pesar de las reducciones en el gasto público, de la disminución en términos reales del circulante y de la reducción de los salarios, no se impidió el aumento constante en los precios. Así, la política antiinflacionaria no cumplió su cometido y ello repercutió desfavorablemente en otros renglones. Con una inflación superior a la prevista y ante la flexibilidad del control de cambios, la fuga de capitales continuó. Por ello el gobierno aplicó, dentro de los marcos de su política económica, la aceleración del deslizamiento del peso respecto al dólar y el aumento en las tasas de interés. Ante una economía altamente especulativa, se respondió con medidas que promovieron, aún más, la especulación ante una situación de divisas y crédito costosas.

Pero las opiniones optimistas de las autoridades gubernamentales se centraron, sobre todo, en relación al sector comercial externo y financiero, pues consideraban que México podía convertirse en un país importante en el contexto internacional manteniendo una política exportadora, la que le proporcionaría las divisas que se requerían. Sin embargo, esta situación presentó serias dudas en su efectividad.

Baste señalar que en realidad las exportaciones totales crecieron sólo el 1 por ciento en 1983 respecto a 1982, mientras que las importaciones disminuyeron en casi la mitad tanto en 1982 respecto a 1981, como en 1983 respecto a 1982. Además, la estructura productiva no tuvo modificaciones y en 1984, al inicio de la recuperación, el PIB creció en un 3.5 por ciento y el ritmo de las importaciones casi dobló al de las exportaciones. El superávit comercial disminuyó en este año, por lo que fue posible prever una mayor disminución para 1985. El crecimiento relativo de la economía mexicana, en 1984, se caracterizó también por ser desigual y errático y si bien se dieron

avances en algunos aspectos ya mencionados, ello no significó que se resolvieran los principales obstáculos y las causas profundas de la crisis. La participación de los salarios en el PIB descendió en un 27 por ciento, el consumo privado sólo se incrementó en un 2.9 por ciento, prácticamente estacionario, y buena parte de este incremento fue efectuado por los estratos de altos ingresos. Se destaca, por otra parte, el auge de la actividad maquiladora a lo largo de una franja donde se instalaron básicamente empresas transnacionales.

Analizada por sectores, la recuperación económica presentó graves diferencias. La industria manufacturera creció en un 4.7 por ciento en buena medida debido a la industria automotriz. La actividad petrolera permaneció estancada y, por su parte, los servicios básicos se incrementaron: la electricidad en un 7 por ciento, el transporte y las comunicaciones en un 5.7 por ciento, mientras que el sector agropecuario creció sólo un 2.3 por ciento.

En buena medida el incremento del PIB en un 3.5 por ciento en 1984, se explica por el ascenso de la producción industrial de un 31.8 como participación sectorial en el incremento del PIB. A su vez, las actividades industriales, sector comercio, restaurantes y hoteles representaron el 50.20 por ciento del incremento mencionado. La minería sólo creció en un 1.60 por ciento y dicho incremento se explica en un 29 por ciento debido al incremento de la extracción de petróleo crudo y gas natural. La industria manufacturera después que presentó una tendencia negativa en 1982 y 1983, se recuperó en 1984 para todas las ramas, pero aquí también su evolución e impacto fue desigual. Los subsectores considerados en la producción de bienes indispensables para el consumo mostraron tasas muy inferiores: productos alimentarios (14 por ciento), textiles y prendas de vestir (0.0 por ciento), industria de papel, imprenta y editoriales (6.5 por ciento), sustancias químicas (7.0 por ciento), industrias metálicas básicas (12.3 por ciento), y productos metálicos (6.0 por ciento).

El 81.8 por ciento del incremento experimentado en la producción industrial se debió así, a la evolución favorable de los rubros mencionados.

PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Denominación	Variación Anual	
	1983	1984
Total	- 7.3	4.7
Produc. alimentarios, bebidas	- 0.9	1.4
Textiles, prendas de vestir	- 5.6	0.0
Ind. y prod. de la madera	-16.6	1.2
Ind. papel, imprenta, editorial	- 6.4	6.5
Sust. químicas, derivados petróleo	0.3	7.0
Prod. minerales no metálicos	-10.9	9.0
Prod. metálicos, maquinaria y equipo	-22.8	6.0
Ind. metálicas básicas	- 6.5	12.6
Otras ind. manufactureras	- 8.9	6.0

Las industrias metálicas básicas fueron las que reportaron un mayor crecimiento como resultado del comportamiento de dos subramas: las industrias del hierro y del acero (13 por ciento), y la de los metales no ferrosos (10.5 por ciento). Igualmente la industria metal-mecánica que encontró en el aumento de la producción automotriz un importante impulso (26.6 por ciento), junto con la de la carrocería, motores y partes (19.3 por ciento). Ante este comportamiento del aparato productivo industrial, la evolución del empleo significó, según datos oficiales, un crecimiento del empleo del 2.4 por ciento. De todas maneras pensamos que este aumento en la ocupación, aceptando la cifra dada, no fue suficiente para absorber a la población en busca de empleo, de tal manera que para 1984 la tasa de desempleo abierto se situó en un 13.7 por ciento.

En 1984, es cierto, se manifestó una recuperación en las tasas de crecimiento del sector productivo, desigual como hemos señalado, y se pudo avanzar por un segundo año en la aplicación del programa de estabilización acordado con el FMI y que coincidió con lo planteado en el Programa Inmediato de Reordenación Económica. Durante el periodo se avanzó en un cierto mejoramiento de las variables externas, excepto en el aspecto financiero, la inflación y el empleo. Pero ello no significaba, ni significó que se hubieran superado los graves desequilibrios de la estructura productiva, ni que se hubieran sentado las bases seguras para resolver la crisis. La enorme deuda externa, la devaluación progresiva del peso, las altas tasas de interés, el mercado internacional errático y altamente proteccionista, la gran dependencia en productos de exportación, la falta de inversión, la austeridad presupuestaria, la fuga de capitales, la disminución del consumo y de los salarios reales, el desempleo y el subempleo, etc., denotan graves limitaciones y desequilibrios no resueltos.

Pensamos que el hecho real es que se trató de una recuperación cíclica débil, errática y limitada a algunas ramas de la producción, que agravaron los desequilibrios entre los sectores productivos. Su recuperación (1984) descansó básicamente en la utilización de la capacidad ociosa, ampliada por la recesión en 1982 y en 1983. Otro elemento que debe considerarse es que el consumo de los estratos privilegiados y en general de la clase burguesa impulsaron en buena medida la recuperación. También hubo un factor central que fue la expansión de varias exportaciones no petroleras. La recuperación señalada fue sólo momentánea y se inscribió en un periodo cíclico de corta duración, que si bien se prolongó hasta mediados de 1985, encontró a su vez sus propias limitaciones y contradicciones que llevaron a una nueva recesión en 1986.

En resumen: entre los objetivos planteados dentro de la política económica del Estado para 1984, se expresó que se trataba de evitar un mayor deterioro de la actividad económica e inducir una recuperación gradual y moderada sin provocar un repunte en la inflación. Cautelosamente se planteó como meta un crecimiento del PIB no mayor al 1 por ciento. Sabemos hoy que este crecimiento fue del 3.5 por ciento respecto a

1983, superior a lo previsto. Este crecimiento de la economía se manejó como la mejor prueba de los aciertos y avances del PIRE. Si bien aún no son suficientemente claros cuáles fueron los factores que impulsaron la recuperación —aunque nosotros hemos hecho algunas consideraciones—, la caída del mercado interno, promovida por las restricciones salariales, la disminución de la inversión pública, la situación económica internacional, la inflación, el desempleo, la magnitud de la deuda, el crecimiento desigual del sector industrial, así como la presencia de otros factores, permiten señalar que esta fase de recuperación fue además de corta, desigual.

IV. *Evolución de la economía en 1985 y los “Criterios Generales de Política Económica” en 1986*

En el documento oficial “Criterios Generales de Política Económica”, correspondiente a 1986, se realizó un recuento o balance del periodo 1983-1985. En él se reconoció que esta etapa se desenvolvió en circunstancias sumamente complejas y que el esfuerzo de la sociedad mexicana y la acción del gobierno se orientaron en el campo de la economía para abatir la inflación, proteger el empleo y renovar las bases de un desarrollo sostenido, eficiente y equitativo. Se planteaba así, que en el trienio señalado se había superado “la emergencia económica que prevalecía a finales de 1982”. Creemos que la situación de emergencia a que se refiere este documento fue atenuada durante 1983-1985, porque se logró una importante reducción en el déficit fiscal, se mantuvo un monto significativo de reservas internacionales y la actividad económica sostuvo un crecimiento cercano al 4 por ciento. Sin embargo, lo propuesto para abatir la inflación y aumentar el empleo en actividades productivas permantes no se cumplió. El proceso de reducción del déficit se estancó y los intereses de la deuda siguieron siendo uno de los principales problemas. En cuanto a recuperar y renovar las bases de un desarrollo sostenido, eficiente y equitativo se puede afirmar que está todavía lejano su cumplimiento, fincado sobre las propias líneas de acción que la política económica contempla.

El documento en cuestión también señala que durante 1985, la economía mexicana siguió sujeta al proceso de reordenación iniciado en 1982. Ya el documento sobre “Criterios Generales para 1985” señalaba la importancia de “conciliar el abatimiento de la inflación con el sostenimiento de la recuperación económica” y que paralelamente se induciría a un aumento en los niveles de bienestar y ajuste estructural de las finanzas públicas. En el documento se reconoce que esto no fue posible debido a “evoluciones adversas” tanto en lo externo como en lo interno.

Efectivamente: la dinámica del crecimiento económico se sostuvo en términos similares a los de 1984 y el gasto privado mostró una expansión importante, sobre todo debido a una mejoría de expectativas, a un aparato

productivo con capacidad ociosa y a una política de incentivos fiscales de inversión. Frente a la denominada evolución adversa, el gobierno mantuvo las estrategias adoptadas y estableció medidas más restrictivas en el aspecto fiscal y monetario, así como una mayor liberalización de la política de comercio exterior. Sus “atinadas medidas” adoptadas el 24 de julio de 1985 fueron:

1. Disminuir el gasto corriente del Gobierno Federal.
2. Sustituir permisos de importación por aranceles.
3. Inducir un tipo de cambio flexible.
4. Mejorar la recaudación fiscal.
5. Fortalecer la intermediación financiera.

Estas medidas confirmaron la política de reordenación económica del régimen actual y se presentaron como elementos que iniciarían los cambios estructurales ya anunciados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Oficialmente se señala que el sector industrial creció en el primer semestre de 1985 en un 7 por ciento, que las reservas internacionales fueron superiores a los 6 000 millones de dólares y que el pago de intereses de la deuda externa se redujo en 9 000 millones de dólares para 1985. Se destaca asimismo que la inversión privada creció en un 9 por ciento en términos reales en 1984 y se estimó un aumento de un 15 por ciento en 1985.

A su vez, el crecimiento anual del sector manufacturero alcanzó un 6 por ciento en el segundo cuatrimestre, se redujo en un 4.5 por ciento en los últimos meses y se calculó un crecimiento anual del 4.5 por ciento. La producción de bienes de capital registró un aumento del 22 por ciento en el primer cuatrimestre y se redujo a la mitad durante el segundo. La producción de bienes de consumo no duradero sostuvo un crecimiento anual promedio de cerca del 4 por ciento. La industria de la construcción después de crecer en un 8 por ciento redujo su dinamismo a fines del año.

Para 1985, se pronosticó una tasa de crecimiento del 3.9 por ciento, sin embargo el comportamiento errático y desigual de la actividad productiva, las variaciones en el ritmo de expansión, tomando en cuenta el último trimestre de 1984, el primer trimestre de 1985 y el último trimestre del mismo año, indicaron una tasa de crecimiento real menor a la prevista y, sobre todo, un franco estancamiento en la producción en 1986.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADAS
1983-1985
(Tasas de crecimiento real)

	1983	1984	1985
Oferta total	-8.6	4.6	4.6
PIB	-5.3	3.7	3.9
Importaciones	-41.7	19.9	14.0
<i>Demanda total</i>	-8.6	4.6	4.6
Consumo	-6.8	3.0	4.3
Público	-1.3	6.9	3.8
Privado	-7.5	2.5	4.3
Inversión	-27.9	5.5	8.6
Pública	-32.5	0.6	-1.0
Privada	-24.2	9.0	15.0
Exportaciones	11.5	10.1	-4.0

En relación a la inflación el gobierno tuvo nuevamente dificultades para cumplir con lo establecido en el PIRE y con lo previsto posteriormente, alcanzar un 35 por ciento para 1985, pues la verdad es que la inflación siguió manteniendo una alta tasa no menor al 60 por ciento.

El pago de intereses de la deuda del sector público presupuestal ascendió a casi 5.8 billones de pesos. El déficit fiscal después de reducirse en 1983 en un 9.4 por ciento del PIB, a partir del nivel de un 17.4 por ciento en 1982, se mantuvo en un 9.1 por ciento en 1984 y un 9.6 por ciento en 1985. La carga de los intereses de la deuda que representó el 14.4 por ciento del PIB en 1983 y de un 13 por ciento en 1984, se redujo a un 12.4 por ciento en 1985.

En el primer semestre de 1985, la balanza comercial y de la cuenta corriente experimentaron reducciones en su superávit y se estimó una reducción del 11 por ciento en las exportaciones no petroleras, por otra parte, se calculó que las importaciones alcanzarían una tasa de crecimiento de alrededor de un 15 por ciento sobrepasando las importaciones de bienes de capital.

A pesar del cuadro anterior, que permite destacar el carácter cíclico de la crisis desde 1981, que se prolonga a 1982 y 1983 con una leve recuperación en 1984, la crisis se acentúa nuevamente a fines de 1985 y durante el año de 1986. Además del carácter desequilibrado y desigual del crecimiento económico y de las actividades propiamente productivas, se agudizaron las múltiples contradicciones en el área monetaria y financiera y en general en las relaciones económicas con el exterior. Además la persistente fuga de capitales reconocida en 1 600 millones de dólares sólo en el primer semestre de 1985, bajó el nivel en la nueva inversión extranjera, aun cuando ésta (acumulada) fue del orden de los 15 000 millones de dólares. El proceso inflacionario es difícil de contener y si pocos meses antes de 1985 ya se

aceptaba un 60 por ciento en los últimos incrementos de precios en diversos artículos de consumo y particularmente en el de la gasolina, gas y energía eléctrica, la tasa de inflación se debe haber aproximado a un 70 por ciento. El desempleo se agrava en aproximadamente un 13.5 por ciento en 1984, la tasa que se preveía para 1985 era alrededor del 15 por ciento. Pese a la reestructuración de la deuda externa, se calculaba para su pago en 1985 entre 9 000 mil y 10 000 millones de dólares. La deuda interna cuya cifra acumulada fue del orden de 7.5 billones de pesos representó otro grave obstáculo, al igual que el peso mexicano que, después de sucesivas minidevaluaciones y dejar “flotar el peso”, descendió de 110 a 390 y posteriormente a 500 pesos por dólar. El proceso de reconcentración del ingreso, la creciente monopolización de la economía, su creciente transnacionalización y el hecho de que esté cada vez más subordinada a los nuevos procesos de integración a la producción y al mercado mundial, así como la cada vez mayor privatización de la economía, la apertura casi indiscriminada hacia el exterior y los intentos de una reconversión industrial que obedece a las necesidades del capital internacional, ofrecen un panorama que difícilmente puede aceptarse como el único camino posible.

Ante esta situación en las tendencias de la economía mexicana y que más allá del discurso promueven acciones encaminadas a proporcionar una mayor oportunidad a las inversiones extranjeras directas, a una política de apoyo a la producción para la exportación, a un mayor endeudamiento, a unas devaluaciones progresivas, a la entrada al GATT, a un aumento de la dependencia tecnológica y a los intentos de una nueva inserción internacional de la economía mexicana, nos lleva a concluir que efectivamente se realizan cambios importantes en el previsible comportamiento de la economía mexicana encaminados a reestructurar los sectores productivos y las relaciones económicas internacionales hacia los ajustes que requiere el capitalismo en crisis, así como la búsqueda de salidas posibles. En este sentido podrían interpretarse las propuestas para 1986 y las que le han antecedido, en el documento oficial sobre los “Criterios Generales de Política Económica para 1986”:

Articular en el marco de una gran tarea nacional las exigencias de un esfuerzo adicional de reordenación económica con las orientaciones del proceso de reconstrucción y de cambio estructural, que se derivan en tres objetivos:

- a) Sanear las finanzas públicas y reducir la inflación fortaleciendo la capacidad de crecimiento sostenido de la economía y procurar mejoras al bienestar social.
- b) Impulsar los programas de reconstrucción.
- c) Acelerar el proceso en marcha del cambio estructural y reconversión económica, elevando la productividad del sector público... modernizando la planta industrial y estimulando la descentralización.

Durante 1986 —dice el documento—, “la tarea de renovación nacional enmarcará así un triple reto: el de la reordenación, el de la reconstrucción y el del cambio estructural”.

Por lo pronto, en sus previsiones para 1986, se estima un crecimiento del PIB, del 1 al -1% por ciento, un crecimiento del 10 por ciento de exportaciones no petroleras, sostenimiento del dinamismo de las importaciones del sector privado y del superávit de la cuenta corriente entre 0-500 millones de dólares, así como una inflación que se acepta difícil de predecir, pero se espera sea del 45.50 por ciento.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA ESTIMADA PARA 1986

Producción -1 a + 1

Inflación (precios al consumidor)
Crecimiento diciembre-diciembre 45 a 50

Finanzas Públicas

Uso total de recursos financieros (porcentaje del PIB) 4.9
Superávit excluyendo intereses (porcentaje del PIB) 8.3
Ingresos presupuestales (porcentaje del PIB) 31.8
Gasto programable presupuestal devengado (porcentaje del PIB) 20.6
Saldo de la deuda pública interna real (TC) -13
Saldo de la deuda pública externa real (TC) 0

Sector Externo

Saldo de la balanza comercial (MD) 7 500 a 8 500
Saldo de la cuenta corriente (MD) 0 a 500
Exportaciones no petroleras (MD) 7 000 a 7 500
Importaciones totales (MD) 13 000 a 14 000
Exportaciones de petróleo crudo (MBD) 1 500

Variables financieras (diciembre-diciembre)

Medio circulante real (TC) -7.5
Saldo real de la captación financiera total (TC) -9.8
Saldo real del financiamiento al sector privado y social (TC) = 14.0
Endeudamiento público externo neto (MD) 4 000
CPP promedio

NOTA:

TC =Tasa de crecimiento
MD =Millones de dólares
MBD =Miles de barriles diarios

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PRODUCTO INTERNO BRUTO

(A precios constantes de 1970)
(Tasas de crecimiento)

	1971-1976	1977-1982	1981	1982P	1983	1984 ^e	Promedio 1985-1988
PRODUCTO INTERNO BRUTO	6.2	6.1	7.9	(-0.2)	-4.7	0.0-2.5	5.0-6.0
1. Agropecuario, silvicultura y pesca	2.7	4.0	6.1	(-0.4)		0.0-2.0	3.5-4.5
2. Minería	6.1	14.0	15.3	9.6		2.8-3.5	3.7-4.7
3. Industria manufacturera	6.8	6.0	7.0	(-2.4)		1.0-4.0	6.7-7.9
4. Construcción	6.7	6.7	11.8	(-4.2)		(-3.0)-2.0	7.0-9.0
5. Electricidad	10.3	7.9	8.4	6.8		2.0-4.0	6.2-7.2
6. Comercios, restaurantes y hoteles	6.0	6.1	8.5	(-1.6)		0.0-1.5	4.3-5.4
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones	11.0	9.5	10.7	(-2.3)		(-0.6)-2.0	6.5-7.0
8. Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles	5.4	4.3	4.3	2.9		0.8-2.0	3.2-4.0
9. Servicios comunales, sociales y personales	6.6	6.4	7.7	4.7		(-0.5)-1.5	4.1-4.5

FUENTE: INEGI, S.P., *Sistemas de cuentas nacionales de México (1971-1981)*.
(1982- preliminar).
(1984-1988) estimaciones del Plan

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE VENEZUELA (1945-1983)

FELÍCITAS LÓPEZ PORTILLO T.

INTRODUCCIÓN

La dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935)

En 1908 se inauguró en Venezuela la dictadura de Juan Vicente Gómez, personaje que perteneció al clan de los militares andinos que tomaron el poder en 1899; quien gobernó en forma unipersonal, con un sentido patrimonial del poder, apoyándose en la profesionalización de las fuerzas armadas y en la integración militar del país. Casi todas las carreteras que construyó —transitables sólo durante la sequía y realizadas con el trabajo de los presos políticos— tuvieron como objeto sujetar al país bajo su mando militar.

Durante el gobierno gomecista se dio el proceso de apertura de Venezuela al imperialismo inglés y norteamericano, que se disputaron la riqueza petrolera. Mediante la explotación de este recurso natural, no renovable, el país conoció una nueva situación: por un lado, el Estado recibió sustanciales ingresos, mucho mayores que los recibidos anteriormente por la exportación de café, cacao y de los aranceles impuestos a los productos importados; y por otro, la burguesía comercial importadora se vio, de pronto, enriquecida con la “danzas de las concesiones” que les otorgó el omnipotente Gómez a cambio de su complicidad y sumisión. Por ello, Venezuela tuvo una situación singular respecto del resto de los países de América Latina: la quiebra de la hegemonía agrícola exportadora de café y cacao no coincidió con un recambio en la economía del tipo de sustitución de importaciones con base urbana industrial, sino que se dio una nueva fase en la acumulación de capital, sustentada ésta en las grandes cantidades de dinero que las compañías petroleras pagaron para obtener enormes porciones del territorio venezolano.

Las concesiones petroleras eran vendidas, posteriormente, a las compañías extranjeras, principalmente a la angloholandesa Royal Dutch Shell, que entre 1909 y 1918 obtuvo más de 30 millones de has. para la exploración petrolera.¹ Las compañías norteamericanas aparecieron después de la primera guerra mundial, concretamente la Standard Oil of New Jersey la cual disputó el predominio a la compañía angloholandesa, que ganó finalmente.

El interés de los grandes monopolios en el oro negro venezolano aumentó en 1922, cuando los periódicos europeos y norteamericanos dieron a conocer la noticia de que el pozo Los Barrosos núm. 2 había explotado en el campo petrolero La Rosa, derramando petróleo en cantidades calculadas en más de cien mil barriles diarios.² En los años siguientes se establecieron en Venezuela 73 compañías petroleras, en su mayoría subsidiarias de la Standard Oil y la Royal Dutch Shell, estas empresas acapararon las mejores tierras del país, lo que trajo consigo la decadencia de los agricultores y ganaderos tradicionales. A pesar de que la estructura económica latifundista y precapitalista contó con la ayuda de los inversionistas extranjeros, que disponían de los recursos económicos necesarios y de una tecnología avanzada, el carácter agrario primitivo de la sociedad venezolana continuó predominando durante las tres primeras décadas del siglo. Se establecieron las refinerías en las Indias Occidentales Holandesas: Aruba y Curazao. La Standard Oil Co. enviaba el petróleo crudo a sus plantas refinadoras del oriente norteamericano.

En 1928 se firmó el Acuerdo de Achnacarry o acuerdo ASIS, que estipulaba las zonas de influencia de los monopolios petroleros (Royal Dutch Shell, Standard Oil of New Jersey y Anglo Persian); en dicho acuerdo Venezuela quedó dentro del área norteamericana. En el occidente del país prevalecían las inversiones de capital angloholandés, precisamente en el Estado de Zulia, donde se encuentra el lago de Maracaibo; y en el oriente, en los Estados de Anzoátegui y Monagas, la supremacía correspondía a los norteamericanos. En ambas regiones las operaciones se llevaban a cabo a través de subsidiarias de las principales compañías.

Así, Venezuela se integró dentro de la división internacional del trabajo, impuesta por el sistema capitalista mundial, en calidad de exportadora de un recurso natural de excepcional importancia: el petróleo, energético que mueve las fábricas del mundo industrial. Las compañías petroleras apoyaron la ascensión de Gómez al poder, quien les proporcionó a cambio la paz social y la tranquilidad política que necesitaban para poder establecerse en territorio venezolano.

Un ejemplo del interés de estas empresas lo tenemos en las cuantiosas inversiones norteamericanas que ascendieron de 3 millones de dólares en 1912 a \$247 238 000 en 1938, mientras que las inversiones angloholandesas pasaron, en el mismo período de \$41 350 000 en 1912 a \$125 000 000 en 1938.³ También invirtieron en minas de oro, cobre y magnesio, aunque la mayor parte del capital correspondió al energético. De esta forma Venezuela se convirtió en el segundo productor mundial de petróleo a partir de 1928, después de Estados Unidos, hasta que en 1960 fue superada por la URSS.⁴

Las compañías extranjeras disfrutaron de un régimen de excepcionales prerrogativas, una de ellas fue la exoneración del pago de impuestos por importación. En 1920 y 1930, el doctor Gumersindo Torres, ministro de Fomento, trató de cambiar esta situación, pero en las dos ocasiones que lo

intentó fue eliminado del gobierno debido a la presión que ejercieron los monopolios. En 1921 se dictó una constitución que incorporó todas las exigencias de las compañías en cuanto a la exploración y explotación del energético y se estableció la participación que debería tener el Estado venezolano en el negocio.

La explotación comercial del petróleo comenzó en 1917, pero no fue sino hasta 1926 cuando ocupó el primer lugar en el total del valor de las exportaciones, el cual alcanzó 247 millones de bolívares contra 149 millones correspondientes a los productos agropecuarios.⁵

Los terratenientes tradicionales que cultivaban café, tabaco y cacao recibieron un duro golpe con la crisis de 1929, que desplomó los precios de sus productos y, además, por la importancia que cada día adquiría el petróleo en las exportaciones. Al mismo tiempo que se dio este fracaso económico, disminuyó el poder político de los terratenientes. En cuanto a la disponibilidad de mano de obra, se agudizó la escasez de ésta por la afluencia de los campesinos a las zonas petroleras y urbanas, en donde las condiciones de vida eran mejores y las perspectivas se presentaban más favorables frente a la precaria vida rural.

La crisis de 1929 afectó el precio del petróleo, pero no en la medida en la que castigó el precio de los productos agropecuarios que exportaba América Latina. Prueba de ello es que Gómez, en 1930, como tributo al Libertador, en el primer centenario de su muerte, pagó la deuda externa que se arrastraba desde el siglo pasado.

Con motivo de la explotación petrolera aparecieron considerables porcentajes de obreros, que procedían del medio rural, con una escasa o nula conciencia de clase, si acaso formaban asociaciones mutualistas bajo la advocación de un santo patrón. Los salarios en las áreas petroleras eran los más altos del país, pero con todo no eran óptimas las condiciones en el trabajo ni fuera de él. El proletariado se encontraba aún en proceso de formación en estas zonas y en las ciudades, donde se ubicaban pequeñas industrias, más bien de carácter artesanal.

Con la captación petrolera el Estado mejoró sus ingresos, aunque este renglón no aportara más que el 20 por ciento, en término medio, de todo el ingreso público,⁶ canalizándose el excedente hacia el enriquecimiento del grupo gomecista; la burguesía comercial se convirtió de exportadora de productos agrícolas e importadora de los productos manufacturados que requería la cada vez más diversificada sociedad; se consolidaron los bancos existentes y se desarrolló una embrionaria burguesía industrial —más relacionada con actividades artesanales que propiamente industriales— ligada fuertemente a los anteriores sectores burgueses. No hay que olvidar que la “danza de las concesiones” benefició a algunos latifundistas y, si bien no fueron muchos, una parte importante de ellos ingresó a la corte de aduladores del hombre fuerte.

La muerte de Gómez ocurrida el 17 de diciembre de 1935 —las malas lenguas dicen que se esperó a anunciarla para que coincidiera con la del

Libertador— dejó una Venezuela muy diferente a la de 1908, cuando le arrebató el poder a su compadre Cipriano Castro, en ocasión de su viaje a Europa, con claro padrinazgo imperialista.

Aunque el país siguió siendo predominantemente rural —el latifundio fue la principal riqueza privada y la mayoría de la población residía en el campo—, la explotación petrolera propició cambios sociales y económicos que exigían mayor libertad política y una nueva orientación en la gestión estatal.

Si bien en esta época los ingresos provenientes del petróleo fueron cuantiosos, sobre todo si los comparamos con los raquíticos ingresos de años anteriores, no eran todavía los que exigía una conciencia nacionalista y emprendedora interesada en orientar al Estado a la construcción de una infraestructura que le sirviera de base para sus procesos de acumulación. Ya había empezado a gestarse una incipiente burguesía que demandaba un Estado y una sociedad modernos, aquélla se concentraba en las ciudades dedicadas a ciertas actividades productivas dinamizadas por la economía petrolera, tales como el comercio, los servicios, la industria ligera, e inclusive empleada en las oficinas gubernamentales y en las compañías extranjeras.

Sin embargo, la ocupación principal continuaba siendo la agricultura, a la que seguían los servicios (éste es un defecto estructural de nuestros países en donde se da un exagerado aumento del sector terciario frente a un raquítico sector industrial, cuya simple enunciación resulta ambiciosa), el artesanado, las industrias de bienes de consumo y al final la industria petrolera y minera.

Durante el período gomecista se fortaleció y centralizó el poder, se terminó definitivamente con las revueltas caudillescas y el dominio de los dos partidos históricos: el liberal y el conservador. Se contó con fuerzas armadas disciplinadas y garantes del orden público, aunque con muchos jefes y oficiales de la antigua montonera, lo que causó fricciones con los militares jóvenes salidos de la Escuela Militar fundada en 1910. La burguesía de las principales ciudades, sobre todo la caraqueña, se enriqueció súbitamente con los dólares y libras esterlinas de las compañías petroleras y con el formidable negocio que significó la revalorización de sus terrenos urbanos y rurales, cercanos a las ciudades que crecieron rápidamente.

Las capas medias urbanas protagonizaron en 1928 un importante movimiento de rebeldía en contra de la dictadura, con el inocuo pretexto de la coronación de una reina estudiantil. Gómez respondió con el arresto y expulsión de los líderes y estudiantes de la Federación de Estudiantes de Venezuela, agrupación que concentraba a los más fervientes antigomecistas. De esta generación saldrían posteriormente los principales líderes políticos con los que contará la moderna Venezuela, entre los cuales se cuentan Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Jóvito Villalba.

La fracción de clase dominante de la época estuvo conformada por Gómez y sus áulicos, y la burguesía comercial, que consolidó su vocación importadora con la derrama petrolera y los intereses imperialistas. Debemos señalar también a los latifundistas que, aunque en términos políticos y sociales disminuyeron su influencia durante el período, mantenían un importante papel en el sistema de dominación rural.

Por lo que respecta a las cifras de la exportación petrolera, éstas alcanzaron para 1935, 649 millones de bolívares, mientras que las demás exportaciones solamente contabilizaron 62 millones.⁷ Esto indica la importancia que tuvo el energético en la economía, durante la época dictatorial.

El estudioso norteamericano Harvey O'Connor señala que en 1935, año de la muerte de Gómez, las exportaciones de petróleo abarcaban el 99 por ciento de las exportaciones totales de Venezuela y su valor alcanzaba el 80 por ciento de las mismas.⁸ Escribe también, que en 1927 el 31 por ciento de las ganancias de la Standard Oil Co., provenían de América Latina, principalmente de Venezuela, frente al 15 por ciento de Canadá, el 8 por ciento de Europa y el 46 por ciento del mercado interno norteamericano.⁹ No había correspondencia entre las utilidades obtenidas por las compañías petroleras y lo que percibía el Estado venezolano, puesto que todavía no se promulgaban las leyes que hicieron de Venezuela el país pionero en esta materia y que tenían el propósito de que se percibieran mayores impuestos, como correspondía a la explotación de un recurso natural no renovable.

En cuanto a la población, el censo de 1926 reportaba un total de 3 026 878 habitantes, lo que indica que creció entre este año y 1936 a una tasa demográfica del 1.5 por ciento, la cual es muy baja para un país latinoamericano.¹⁰ Venezuela es un país extenso, con una superficie de 912 500 km² y riquísimo en recursos naturales de toda índole, con escasa población.¹¹

El periodo de transición postgomecista (1936-1945)

El gobierno del general Eleazar López Contreras (1936-1941)

En el año de 1936 estalló el conflicto que la dictadura había contenido durante tanto tiempo. Se desataron inusitados movimientos callejeros y las masas urbanas congregadas en las calles demandaban la liberación política y la disminución de la represión. Cundió una verdadera fiebre de organización, que se reflejó en la creación de innumerables gremios y sindicatos y surgieron los núcleos que posteriormente originarían los principales partidos políticos venezolanos.

Ante esta efervescencia social, la respuesta del sucesor de Gómez, el general Eleazar López Contreras —jefe nato del ejército y miembro del

clan andino que monopolizaba la hegemonía política—, no se hizo esperar. Expidió la “Ley Lara” por medio de la cual se ordenaba que era necesario el permiso oficial para las concentraciones de masas y se anulaban las garantías individuales, que por lo demás nunca habían tenido una verdadera vigencia. Disolvió las organizaciones sindicales, expulsó a los principales líderes y emprendió un gobierno cuyo lema “Calma y cordura” expresa bastante bien su actuación política; inició una democratización muy restringida, bajo el pretexto de que el pueblo venezolano no estaba listo para la democracia, y una modernización del aparato estatal.

En 1937 disminuyó la organización de sindicatos y las movilizaciones de las masas urbanas. El resto del periodo lopecista transcurrió en una aparente tranquilidad.

A pesar de ser un hombre surgido de las viejas filas del gomecismo, López Contreras demostró cierta apertura hacia las demandas de los nuevos grupos sociales surgidos en el país, los cuales estaban cansados del acaparamiento que el presidente y su camarilla hacían de la economía nacional y de la dictadura autoritaria y represiva del viejo caudillo. Ejemplo de que quería abrir el espectro político fue el nombramiento de José Rafael Pocaterra, enemigo acérrimo del gomecismo, como miembro de su gabinete. Rómulo Gallegos fue ministro de Educación durante su periodo, pero renunció en cuanto se endureció la política del régimen.

En 1936 se promulgó una nueva Constitución, que reconocía el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, afiliarse a centrales obreras internacionales, el derecho de huelga y el reparto de utilidades. Se expidió una nueva Ley del Trabajo que estableció, entre las medidas más importantes, la jornada de trabajo de ocho horas, vacaciones anuales remuneradas, descanso semanal remunerado, preaviso para el despido injustificado y protección a las mujeres embarazadas.¹²

Otro aspecto destacado de la gestión lopecista fue la fundación de organismos gubernamentales destinados a propiciar una mayor intervención que le fue exigida, lo mismo que la mayor apertura política, por la incipiente burguesía industrial y de servicios, así como por las capas medias urbanas, sectores sociales que necesitaban una infraestructura crediticia para el mejor funcionamiento de sus negocios. La importancia que tuvo el Estado venezolano dentro de la economía fue grande, pues captó los ingresos provenientes de la explotación petrolera con lo que se convirtió en el mayor empleador y el rector de la actividad económica del país, debiendo proporcionar al capital extranjero y nacional las condiciones necesarias para su reproducción.

Las empresas gubernamentales fundadas durante el periodo lopecista —Banco Obrero, Banco Agrícola y Pecuario, Banco Industrial de Venezuela, además del Banco Central de Venezuela— no tuvieron una verdadera importancia sino hasta el trienio 1945-1948, cuando el partido Acción Democrática encabezó la Junta Revolucionaria de Gobierno y se canalizaron sustanciales cantidades de dinero para la revitalización de estos

organismos fundamentales en la tarea de modernización que el Estado emprendió, sobre todo, a la muerte de Juan Vicente Gómez.

Asimismo se creó el Consejo de la Economía Nacional, donde tuvieron cabida los representantes de la burguesía comercial caraqueña y del gobierno, que dictaría las medidas para desarrollar la postrada economía, cuyo único aliciente lo conformaba la exportación petrolera.

General Isaías Medina Angarita (1941-1945)

Isaías Medina Angarita, sucesor del general Eleazar López Contreras y ministro de Guerra y Marina de su gabinete, hizo posible una mayor democratización de la vida política del país mediante la legalización de los partidos que todavía hoy actúan en Venezuela. Promulgó una reforma agraria de contenido avanzado —la cual contemplaba la expropiación de los latifundios improductivos— que no fue superada por la que posteriormente lanzó Acción Democrática. Mantuvo relaciones de apoyo con los comunistas, lo que influyó en su posterior derrocamiento cuando, vencido el Eje, las baterías se enfilaron en contra de la Unión Soviética, antiguo aliado en la lucha antifascista.

Medina Angarita, en el ejercicio del poder, subestimó a la institución armada —concretamente a la oficialidad joven— y se apoyó principalmente en la incipiente burguesía industrial y en los sectores más progresistas de la intelectualidad pequeño burguesa, a pesar de que llegó al poder respaldado por los viejos cuadros de la jerarquía castrense y por los políticos veteranos de la cordillera.

El secretario de Educación, Arturo Uslar Pietri, popularizó la consigna de “sembrar el petróleo”, y en pos de ello se dictaron medidas arancelarias para proteger los esfuerzos industrializadores que estaba llevando a cabo una parte de la burguesía más progresista, centrada alrededor de Medina. Esta burguesía se encontraba con suficiente liquidez a causa de la guerra, amén de que ésta provocó que se conociera en toda su magnitud, la vulnerabilidad de la economía venezolana, ya que a raíz de ella escasearon o dejaron de llegar los artículos manufacturados y alimenticios que satisfacían las necesidades de una creciente población urbana, engrosada por la migración campesina.

El petróleo sirvió para mover la maquinaria bélica de las naciones en lucha, por lo que el país contó con divisas suficientes que le permitieron elaborar un proyecto de industrialización. Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo en su totalidad, porque Medina fue derrocado y la burguesía industrial no contaba con la fuerza suficiente para hacer frente a sus competidoras —la comercial y la financiera— que estaban mejor situadas para aprovechar las divisas con el fin de importar toda clase de productos. Asimismo, un factor negativo fue el hecho de que en 1938 se firmara con Estados Unidos un tratado comercial, que facilitaba la introducción de los

productos norteamericanos a Venezuela, puesto que con ello existió un importante obstáculo para el desarrollo de una industria nacional.

Durante el gobierno medinista se hicieron esfuerzos por aumentar la participación estatal en la industria petrolera. Entre las medidas que se tomaron está la supresión de la prerrogativa que tenían las compañías petroleras de importar maquinaria y equipos sin pagar impuestos aduanales, enorme sangría fiscal a la que se puso fin.

Igualmente, en 1943 se expidió la Ley de Hidrocarburos, el primer intento serio y el más importante de la época por sistematizar y controlar el régimen impositivo de las petroleras. Por medio de esta ley se uniformó el régimen de concesiones, con el cual se estableció que la duración de éstas fuera de cuarenta años —anteriormente eran de cincuenta—, se aumentó la cuota de petróleo crudo que tenía que refinarse en Venezuela, y se decretó una regalía o “royalty” para todos los concesionarios, la cual consistía en que se entregarían al Estado $16\frac{2}{3}$ de barriles de petróleo de cada cien que se extrajeran.¹³ El Estado podía vender este petróleo a quien quisiese, ya fuera a las propias compañías o a terceros.

Otra medida importante del régimen medinista fue la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, destinada a terminar con el latifundio improductivo y transformar a los campesinos conuqueros en pequeños propietarios.

Las medidas reformistas del gobierno afectaron a las compañías petroleras con el aumento de impuestos y con la imposición de una mayor fiscalización estatal. La promulgación de la reforma agraria y su alianza con los comunistas, le atrajeron la animadversión de importantes sectores sociales, aunque el mayor error de Medina Angarita fue no haber impulsado la reforma del voto directo y secreto, lo que le hubiera quitado la bandera a la oposición —representada principalmente por el partido Acción Democrática— que pregonaba la democratización de la participación política. Todo esto, junto con su evidente progresismo y falta de política adecuada hacia la institución armada, desencadenó una crisis que se resolvió el 18 de octubre de 1945 con un golpe de Estado cívico militar, que liquidó políticamente al gomecismo.

La participación cívica estuvo a cargo de Acción Democrática, partido que se opuso firmemente al régimen medinista. Por ejemplo, cuando fue promulgada la Ley de Hidrocarburos, la más importante en esta materia y que duró hasta enero de 1976, Betancourt abogó por la nacionalización, la que no llevó a cabo cuando estuvo en el poder. A partir del problema de la sucesión presidencial y que el candidato oficial aceptado por la oposición enfermó gravemente, Medina nombró candidato al doctor Angel Biagini, ministro de Agricultura y Cría, encargado de realizar la reforma agraria expedida en septiembre de 1945, ante lo cual se aceleraron los preparativos del golpe.

El partido Acción Democrática fue fundado por Rómulo Betancourt en 1941, este partido ostentaba una plataforma programática de carácter

reformista, nacionalista, democrático y antiimperialista. Su antecedente directo era el Plan de Barranquilla, el primer intento sistemático que proponía un plan de acción política para Venezuela, suscrito en 1931 por Rómulo Betancourt y otros líderes de las capas medias urbanas, que habían sido expulsados del país por la dictadura gomecista a raíz de los sucesos de 1928. Para 1943 Acción Democrática era el único partido político que contaba con una cobertura a nivel nacional, gracias a la consigna betancourista de “ni un municipio sin una seccional del partido”.¹⁴

Por lo que respecta a las fuerzas armadas, los cuadros medios del ejército que se aliaron a Acción Democrática estaban resentidos contra los “chopos de piedra”, individuos sin instrucción militar quienes poseían los altos cargos en la jerarquía y que estorbaban el ascenso de los profesionales más jóvenes. Entre las justificaciones esgrimidas por los uniformados en favor del golpe de Estado se contaban la necesidad de convocatorias directas para elegir los poderes públicos, ascensos y mejoramientos de sueldos y la exigencia de transformar al ejército venezolano en una institución moderna y eficiente.¹⁵

Los militares jóvenes estaban organizados alrededor de una agrupación denominada Unión Patriótica Militar, UPM, en donde se discutían los problemas nacionales, el mayor Marcos Pérez Jiménez encabezaba este organismo. Este militar era de origen andino, tachirenses de extracción modesta; en Perú (1939) prosiguió su especialización profesional en la Escuela Militar de Chorrillos y regresó en 1944 convirtiéndose en el receptor del descontento de los uniformados contra la gestión medinista.

Por lo que respecta a los parámetros sociales y económicos de Venezuela durante la época de la transición postgomecista, el censo de 1941 señala que la población era de 3 850 771 personas, de las cuales el 76 por ciento vivía en el campo.¹⁶ El 75 por ciento de la población adulta era analfabeta, situación congruente con la realidad rural del país.

Solamente el 35 por ciento de la población en edad escolar tenía acceso a la educación.¹⁷ La densidad demográfica era de las más bajas de Sudamérica, 4.8 habitantes por km², con una tasa de natalidad del 2 por ciento y una expectativa de vida de 45 años.¹⁸

A pesar de que el 76 por ciento de la población se encontraba en el campo, el sector agrario solamente proporcionaba el 23 por ciento del producto nacional. La población económicamente activa ascendía al 32.2 por ciento de la población total.¹⁹

Respecto al negocio petrolero, la supremacía norteamericana era evidente, ya que concentraba el 61 por ciento de las inversiones, correspondiéndole al capital angloholandés el 31 por ciento y el 8 por ciento a capitales europeos de menor cuantía.²⁰

Por medio de la explotación del petróleo, el país recibía el 90 por ciento de las divisas, que representaban para el Estado el 60 por ciento de los ingresos fiscales.²¹

Estos ingresos fueron canalizados en la economía interna por el Estado. A partir de la muerte de Gómez, el Estado intensificó su importancia como generador e impulsor de la economía, ya que el negocio petrolero estaba en manos extranjeras y porque la fracción más importante de la burguesía venezolana, la comercial, no era un sector productivo, puesto que se dedicaba, sobre todo, a la importación de toda clase de productos y a la especulación de terrenos urbanos y rurales.

LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO. 1945-1948

El 18 de octubre de 1945, a raíz del golpe que derrocó al general Medina Angarita, se formó la Junta Revolucionaria de Gobierno con siete miembros: cuatro adeístas, Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Luis B. Prieto Figueroa y el doctor Raúl Leoni; dos miembros militares, el mayor Carlos Delgado Chalbaud y el capitán Mario Vargas, y un independiente, el doctor Edmundo Fernández. La presidencia recayó en Betancourt, controvertido político que es, sin lugar a dudas, uno de los principales —si no el principal— artífice de la democracia venezolana. Sin embargo, llegó al poder por la puerta falsa, a través de un hecho de fuerza cuya preparación era incluso ignorada por el presidente del partido Acción Democrática, el notable novelista Rómulo Gallegos.

La mayoría adeísta dentro de la Junta Revolucionaria desagradó a sus socios militares. Por otra parte, no se hicieron serios esfuerzos, durante el periodo de tres años, para afianzar esta alianza cívico militar, que fue puramente circunstancial. El mismo Betancourt expresó sus dudas acerca del origen de su gobierno cuando escribió que: “El gobierno *de facto* nació de un golpe de Estado típico y no de una bravía insurgencia popular. Lo que tenía de negativo tal circunstancia no necesita ser subrayado.”²²

El 29 de octubre de 1945 los Estados Unidos reconocieron a la Junta Revolucionaria, la cual aseguró que las inversiones norteamericanas no serían tocadas. Durante la postguerra ese país concedió una atención prioritaria a Venezuela, por su condición de segura proveedora de hidrocarburos necesarios para la reconstrucción europea y japonesa. La historiografía venezolana de izquierda destaca que el golpe involucró aún más a Venezuela dentro de la estrategia imperial norteamericana, señalando que Rómulo Betancourt fue el personaje idóneo utilizado para tal fin.

El presidente de la Junta se propuso, desde un principio, diversificar la economía con el objeto de no seguir dependiendo de la exportación de un solo producto, que además tiene carácter de no renovable, y democratizar el sistema político; amplió, igualmente, la intervención del Estado y se formaron nuevas instituciones gubernamentales encargadas de crear y asesorar el establecimiento de diversas actividades productivas; hizo

especial hincapié en la necesidad de elevar el nivel de vida del pueblo venezolano, sobre todo en los renglones educativo y sanitario que se encontraban atrasados. Se rebajaron los alquileres y se percibió, de parte de las compañías petroleras, un impuesto extraordinario de más de cien millones de bolívares que fueron aplicados a subsanar las necesidades sociales.²³

La política adeísta, durante el trienio, está sintetizada en las siguientes palabras de su máximo líder: “sufragio libre, guerra al peculado, política de petróleos de signo nacionalista”;²⁴ Betancourt entendía la fórmula de “sembrar el petróleo” como el “comienzo de desarrollo integral de la producción realmente venezolana; echar los sólidos cimientos de una industria nacional; reforzar el régimen de propiedad agraria; aumentar la población, domiciliarla, educarla y proteger su salud”.²⁵ La primera medida política de la Junta Revolucionaria fue otorgar el derecho al sufragio universal y secreto a toda la población mayor de 18 años, sin diferencia de sexo ni de ninguna otra clase (los analfabetos también podían votar). Se extendió el voto a la elección de miembros del Congreso Nacional y a la de presidente de la República.²⁶ Los mayores de 21 años podían ser elegidos para los puestos públicos.

En 1946 se legalizaron nuevos partidos políticos, entre ellos el Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, al cual se incorporaron los antiguos dirigentes de la Unión Nacional Estudiantil, organización juvenil de derecha. COPEI tuvo como principal fundamento ideológico las enseñanzas evangélicas y la doctrina social de la Iglesia, su líder y fundador fue el doctor Rafael Caldera.

Asimismo surgió el partido Unión Republicana Democrática, URD, de Jóvito Villalba, antiguo dirigente estudiantil, con una ideología no muy bien definida, aunque inscrita en el liberalismo y en cierto izquierdismo moderado; partido que fue formado por los remanentes del Partido Democrático Venezolano, medinista, y del Partido Revolucionario Proletario de filiación comunista. El cuadro político se completó con el Partido Unión Popular Venezolano, promarxista, y el Partido Comunista Venezolano.

Acción Democrática se convirtió durante el trienio en el partido mayoritario de Venezuela, con amplia base campesina, obrera y de las capas medias urbanas; se comprueba su supremacía por el hecho de que en las tres elecciones registradas en este periodo su participación no bajó del 70 por ciento del electorado; en todas las auscultaciones de los estados andinos de Mérida y Táchira fueron derrotados baluartes de COPEI.

Sin embargo, tenemos que señalar que Acción Democrática aprovechó su estancia en el poder para ampliar su influencia y peso sobre las masas, lo que hizo de manera no siempre democrática. Por ejemplo, el partido comunista tenía importantes posiciones dentro del sector obrero y la gestión adeísta se propuso, desde un principio, quitarle sus bases. Esto lo consiguió a través de la represión y de medidas redistributivas del ingreso, lo

mismo que por medio de la prédica sobre la reforma agraria, ya que la gran mayoría de los votos adeptos eran de origen campesino. Además, contribuyó el hecho de que el presidente y el primer vicepresidente de Acción Democrática fueran Rómulo Gallegos y Andrés Bello Blanco, reputados intelectuales que actuaban a manera de imán para la población y cuyo prestigio literario fue utilizado por el avezado político Rómulo Betancourt.

Se creó el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa con el fin de dar la batalla contra el peculado, mal endémico de nuestros países; por medio de este tribunal se reintegró a la nación más de 400 millones de bolívares,²⁸ pertenecientes a lopecistas y medinistas, la mayoría de los cuales habían salido al exilio. Estos personajes, despojados de sus bienes obtenidos de manera lícita o ilícita, serán muy importantes en la gestión del golpe de noviembre de 1948 que derrocó a Rómulo Gallegos, puesto que regresaron y cobraron venganza de los agravios sufridos a costa de las arcas nacionales. El gobierno encabezado por Betancourt tenía un fuerte compromiso de moralidad administrativa por lo que se dictó una “Ley de Enriquecimiento Ilícito”, que obligó a los funcionarios y empleados públicos a efectuar una declaración jurada de sus bienes antes y después de su gestión.

En cuanto a la política petrolera, Acción Democrática asentó firmemente que no se otorgarían más concesiones petroleras. Las compañías sólo debían explorar y explotar las enormes extensiones que ya poseían, puesto que únicamente tenían en explotación el 1.56 por ciento de las áreas que se les habían otorgado.²⁹ Se impuso un nuevo aumento de impuestos, la obligación de las compañías de refinar más petróleo crudo en Venezuela, con el propósito de utilizar los dividendos petroleros para diversificar la economía y la venta, por parte del Estado, del petróleo que le correspondía en “especie”, dentro del mercado libre, que fue canjeado, durante el trienio, por alimentos y materias primas para la industria.

Durante este periodo se incrementó la extracción de petróleo, ya que en 1945 la producción era de 325 millones de barriles, en 1946 fue de 388 millones, en 1947 de 435 y para 1948 ascendió a 475 millones de barriles anuales extraídos del subsuelo venezolano.³⁰ Las inversiones también aumentaron, de 938 millones de dólares en 1945 a 1168 millones en 1948.³¹

En las reformas introducidas para percibir mayores impuestos por la explotación petrolera destacó la fórmula conocida como mitad y mitad o “fifty-fifty”, lo que significaba que las “utilidades netas de las compañías petroleras una vez pagado el impuesto sobre la renta, no pueden exceder el conjunto de las percepciones fiscales originadas en sus actividades en el país”.³²

Salvador de la Plaza, importante investigador marxista de la realidad venezolana, señaló que el “fifty-fifty” fue un mito que de mutuo acuerdo crearon el gobierno y las compañías en 1948, para ocultar los enormes beneficios que éstas percibían y que importaban hasta un 34 por ciento del

capital invertido, “falsa situación del 50-50 que lograban incluyendo el ‘royalty’ en la suma de impuestos que debía servir de base para calcular el impuesto adicional”.³³

Acerca de esta reforma impositiva del régimen las opiniones se dividen. Sus simpatizantes dicen que significó un avance sustancioso en la tajada del pastel petrolero que le correspondía a Venezuela y sus detractores dicen que esto no fue así, sino que existían varios subterfugios legales y contables que permitieron violar las leyes establecidas. Sea lo que fuere, lo cierto es que los ingresos fiscales por la explotación petrolera fueron de 353.5 millones de bolívares en 1945, y el año de 1948 alcanzaron 1158.1 millones,³⁴ lo que da cuenta del aumento en las arcas gubernamentales por las diferentes reformas impositivas, debiéndose tomar en cuenta también las medidas dictadas a este respecto por el gobierno medinista.

En 1947 se otorgaron concesiones de mineral de hierro a la compañía Orinoco Mining of Venezuela, filial de la United States Steel, que adquirió cinco concesiones ubicadas en la zona de reserva de la nación. El discurso oficial convocó a los inversionistas extranjeros para que auxiliaran la explotación de los recursos naturales del país. Se proyectó, asimismo, la explotación de los enormes yacimientos de hierro, como base de una industria siderúrgica nacional.

Durante este periodo se intensificó el intervencionismo estatal y se creó la Corporación Venezolana de Fomento, con el propósito fundamental de propiciar el incremento de nuevas actividades productivas, sobre todo agrícolas y ganaderas, lo mismo que la industria liviana, satisfactora de necesidades populares como las del vestido y el calzado. El Estado se obliga a aportar anualmente a la Corporación del dos al diez por ciento de los presupuestos de los egresos de la nación.³⁵ Se dotó de nuevos fondos al Banco Agrícola y Pecuario, lo mismo que al Banco Industrial de Venezuela, y se formó la Corporación de Economía Básica con capital estatal y del grupo Rockefeller, que constituyeron sociedades mixtas para la formación de empresas de producción agropecuaria, pesquera y de distribución de mercancías. En este proyecto intervinieron también las compañías petroleras.

Respecto a la industria nacional se buscó, como en el medinismo, fortalecer una incipiente burguesía industrial que llevara la pauta en el desarrollo económico del país, lo que se evidenció en los pronunciamientos del partido político dominante sobre la necesidad de esta industria nacional:

La revolución democrática y antimperalista ha de crear una industrialización basada en nuestros propios recursos, capaz de producir aquellos renglones de fácil elaboración dentro de las posibilidades técnicas y disponibilidades materiales (...) Una industria ligera, creada sobre capital y factores de trabajo venezolanos ha de garantizar la estabilidad económica nacional.³⁶

Esta incipiente industria se enfrentó, a partir del término de la segunda guerra, a la competencia de las mercancías que empezaron a llegar procedentes de los países que intervinieron en el conflicto bélico, sobre todo de los Estados Unidos. La conflagración mundial actuó como una especie de barrera proteccionista en muchas de estas industrias. Betancourt puso el dedo en la llaga cuando escribió que:

La casi paridad del bolívar con el dólar americano y la afluencia de divisas en el mercado de cambios, eran estímulo permanente a la importación de mercancías extranjeras. El hábito de consumir productos importados se ha generalizado en la población.³⁷

Acorde con la participación estatal en la economía y en la modernización de la insuficiente infraestructura material, se tenía el proyecto de dragar la barra de Maracaibo para hacerlo un gran puerto de exportación e importación. Igualmente, se planeó una fábrica de abonos químicos que daría impulso a la petroquímica y se hicieron proyectos para la instalación de una gran planta siderúrgica en el río Caroní, activada por electricidad o por el gas asociado al petróleo. Estos proyectos de industrias básicas fueron acogidos más tarde por los militares que tomaron el poder en noviembre de 1948.

Se promulgó una nueva ley de reforma agraria, que pretendía ser integral, con el fin de lograr el “incremento de la productividad agrícola y el mejoramiento del nivel de vida del campesinado”³⁸ y además se auspició la activa sindicalización de los trabajadores del campo y de la ciudad, lo que sirvió de soporte social al régimen. Ejemplo de lo anterior es el hecho de que en 1945 había en Venezuela 252 sindicatos, alcanzándose en 1948 el número de 1014, más de 450 de ellos estaban formados por trabajadores rurales.³⁹ En el cuadro núm. 1 se detalla el aumento numérico de los sindicatos durante el periodo estudiado.

Acción Democrática dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a la labor sindical de tipo proselitista, porque sus cuadros organizaban y dirigían tales sindicatos. En diversas ocasiones el sectarismo de este partido amenazó con la división del movimiento sindical, prohibiéndose o suprimiéndose las huelgas estalladas por sindicatos no adictos al gobierno.

En 1947 se formó la Confederación de Trabajadores de Venezuela, dirigida por un comité ejecutivo formado por siete miembros, todos ellos adeístas; ya en 1944 hubo un primer intento para formar esta organización, pero Betancourt lo frustró con la acusación de que su dirigencia era “comunista”. Para 1948 había unos 58 418 trabajadores petroleros, veinte mil de ellos estaban afiliados a sindicatos oficialistas y el resto pertenecían a sindicatos independientes o no estaban sindicalizados.⁴⁰ Durante el trienio fueron encarcelados y perseguidos dirigentes sindicales y políticos de la oposición.

En los intentos de modernización y democratización de la sociedad venezolana, la Junta encontró la resistencia de algunos sectores: de la Iglesia católica, la cual controlaba casi toda la educación de tipo privado, debido al empeño de la Junta por una educación laica y científica; de los grupos nacionales y extranjeros, que se sentían molestos por la insistente creación de sindicatos y uniones agrícolas que formaban la base social que sustentaba al régimen; del ejército, que veía cómo crecían las discrepancias entre los diferentes partidos políticos debidas, principalmente, al sectarismo y al “uso abusivo del poder” del que acusaban a Acción Democrática.

El 5 de julio de 1947 fue promulgada una nueva constitución de carácter avanzado, en comparación con las anteriores, e inspirada en la mexicana. El 14 de diciembre de 1947 se celebraron las elecciones para presidente de la República; el partido Acción Democrática lanzó como candidato al novelista Rómulo Gallegos, los miembros de la Junta se comprometieron a no postularse como candidatos presidenciales, compromiso auspiciado por Betancourt con el fin de facilitar la llegada a la presidencia del notable escritor. Ganó éste por abrumadora mayoría de 870 mil votos contra 263 mil de Rafael Caldera candidato de COPEI y 37 mil de los comunistas, representados por Gustavo Machado.⁴¹

El 15 de febrero de 1948 Rómulo Gallegos tomó posesión de la presidencia y nombró al coronel Carlos Delgado Chalbaud como su ministro de Defensa y al coronel Marcos Pérez Jiménez como Jefe de Estado Mayor, ellos son las principales figuras del cuartelazo que lo derrocaría el 24 de noviembre de ese mismo año.

Las tensiones entre el gobierno de Gallegos y los militares se hicieron evidentes a mediados de 1948 y las relaciones se deterioraron debido a la legítima negativa de aquél para gobernar en unión con el Alto Mando. Los militares acusaron al Ejecutivo de debilidad y de que Betancourt ejercía el poder tras el trono; a ello se aunaron los errores políticos cometidos por la Junta, que se había enemistado con importantes sectores de las clases dominantes internas, las cuales se sentían incómodas ante el ascendiente popular que tenía el partido en el poder. Respecto a la posición de los norteamericanos, aunque Gallegos salió de Venezuela gritando “Washington me tumbó”, no se ha comprobado tal injerencia; por el contrario, las relaciones con los norteamericanos eran cordiales y satisfactorias. Posiblemente los militares hayan sido alentados a dar el golpe de Estado por los ingleses y holandeses, quienes aportaban el otro capital extranjero de importancia en Venezuela.

Como quiera que fuese, el golpe se inscribió en la tradición castrense de gobierno que se arrastraba en Venezuela desde fines del siglo pasado, sobre todo por el “regionalismo resentido” del que hablaba Rómulo Betancourt, es decir, la hegemonía de la oficialidad de origen andino que databa desde 1899. El político venezolano señaló, también, como motivo del golpe el que los ejércitos latinoamericanos de la época estaban imbuidos de un carácter

mesianico, como salvadores de sus países, y daba como ejemplo de ello al general argentino Juan Domingo Perón.

Con relación a la caracterización de este hecho de fuerza la historiografía venezolana se divide: la marxista señala que los adecos fueron los culpables de haber despertado el apetito de poder de los militares, pues con el golpe de octubre de 1945 cortaron la evolución política normal del país, ya que el sucesor del general Medina iba a decretar el derecho al sufragio directo y secreto para toda la ciudadanía. Por su parte, la historiografía demoliberal señala que fue un golpe a la democracia perpetrado por los espadones de siempre, sin mencionar que Acción Democrática había llegado al poder por la “puerta de atrás”.

Por nuestra parte, señalaremos que la democracia venezolana no estaba ni siquiera en pañales, apenas en gestación y que el golpe sé dio con los argumentos comunes en estos casos.* Los militares acusaron al gobierno legítimamente constituido de propiciar una crisis política generalizada que amenazaba con llevar al país al caos, debido a la injerencia del partido del gobierno en la institución militar y a la creación de milicias armadas, así como al sectarismo y ventajismo electoral, entre los motivos más graves.

EL GOBIERNO MILITAR. 1948-1958

Se instauró una Junta Militar de Gobierno compuesta de tres miembros, Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbaud y el coronel Luis Felipe Llovera Páez. Desde un principio se implantó una estricta censura de prensa y se proscribió al partido Acción Democrática del escenario político.

Los Estados Unidos reconocieron inmediatamente al gobierno militar. Durante el año de 1948 tuvo lugar la consolidación de la guerra fría, periodo histórico marcado por la confrontación Este-Oeste que implicó para América Latina —aunque no era una zona prioritaria para los intereses vitales norteamericanos, como Alemania o el Extremo y Cercano Oriente— la más dura represión contra las organizaciones sindicales y los partidos políticos de tipo nacionalista reformista, con lo que se preparó el terreno para la penetración del capital transnacional. Esta ofensiva fue acompañada por un proyecto ideológico, cultural y militar que magnificó las excelencias del “American way of life”, este clima internacional lo aprovecharon los militares venezolanos en su favor.

En noviembre de 1950 fue asesinado, en condiciones muy sospechosas, el presidente de la Junta Militar, el coronel Carlos Delgado Chalbaud, acusándose al coronel Pérez Jiménez de ser el autor intelectual de su desaparición, pues con ella quedaba el campo libre para su ascenso al

*El golpe fue incruento, no se disparó un solo tiro y los partidos políticos opositores a Acción Democrática ni chistaron.

poder. Ambos representaban dos corrientes contradictorias en la institución castrense: el primero tenía previsto, para el mes de diciembre, anular la Junta Militar y traspasar el poder a un civil, quien se encargaría de presidir la preparación y ejecución de elecciones para una Asamblea Constituyente; mientras que el segundo era el representante de la línea dura, apoyada en la tradición castrense de gobierno y en el ascendiente regional de los andinos en el ejército.

El coronel Pérez Jiménez no tomó el poder inmediatamente, pues todo lo señalaba como el principal beneficiario del crimen. Se formó entonces una Junta de Gobierno que presidió el doctor Germán Suárez Flamerich, ilustre letrado perteneciente a la “Generación del 28”, los otros dos miembros de la Junta fueron los coroneles Pérez Jiménez y Llovera Páez, el mando efectivo lo tuvo el primero de los militares aludidos.

El gobierno militar prosiguió la labor de construcción de infraestructura iniciada por el gobierno anterior, pero con un marcado interés en la creación de una red vial de comunicaciones y la prosecución de los planes de industrias básicas. Se erigieron escuelas, hospitales y viviendas para los trabajadores con el propósito de contar con su apoyo, porque como decía el hombre fuerte, el régimen “aspiró a ser juzgado más por sus obras que por sus palabras y confió más en la evidencia de los hechos que en su divulgación orientada hacia fines exclusivamente políticos”.⁴²

Las órdenes religiosas volvieron por sus fueros, las clases dominantes internas y los intereses extranjeros contaron con un movimiento obrero reprimido y oficializado. Se disolvieron los sindicatos adeístas y comunistas, organizándose de nuevo bajo premisas oficiales.

El gobierno militar continuó con el proyecto de modernización del Estado, de la sociedad y de la economía emprendido por Acción Democrática en 1945, con la salvedad de que dejó de lado la democratización política, lo mismo que los esfuerzos adeístas por elevar el nivel educativo y sanitario de la población.

Durante este periodo, se construyó la infraestructura material que exigía el capital nacional y extranjero para la buena marcha de sus procesos de acumulación. El Estado absorbió aquellos proyectos económicos que, por su envergadura y refinamiento técnico, eran inconvenientes para el capital privado, a éste se le otorgó, en compensación, energía e insumos baratos.

La dictadura perezjimenista 1952-1958

En un intento por legitimar el régimen *de facto* surgido hacía cuatro años, en abril de 1952 se convocó a elecciones, las que se efectuaron el treinta de noviembre del mismo año; dos días más tarde, y ante la evidente derrota del Frente Electoral Independiente, que había lanzado como su candidato al coronel Marcos Pérez Jiménez, éste se declaró presidente provisional para el periodo 1953-1958. Para ello contó con el apoyo de las fuerzas armadas y

con el beneplácito de las clases dominantes internas y de los intereses extranjeros, que vislumbraron cinco años de “paz social” a cargo de un gobierno autoritario que no daría tregua a la oposición y que estaba empeñado en una política económica altamente favorable para los intereses del capital.

Efectivamente, durante el gobierno de Pérez Jiménez se erigió un proyecto de desarrollo que contempló la modernización del país “desde arriba”, desde las instancias oficiales. Fueron derruidos los viejos barrios de la Venezuela colonial y en su lugar se levantaron fastuosos edificios que representaban la modernización deseada por el grupo en el poder. Esta modernización comprendió la construcción de obras faraónicas, para que dieran prestigio a los gobernantes, y el impulso a la creación de las industrias básicas, enmarcados todos estos esfuerzos dentro de un proyecto estatal nacionalista.

Nacionalismo inscrito en el pensamiento del coronel Pérez Jiménez cuando deseaba que Venezuela fuera un país “más grande, próspero y fuerte” como correspondía a su brillante pasado histórico, grandeza que sería posible a través de la realización del “ideal nacional”, que propugnaba el desarrollo racional e integral de los recursos naturales y humanos de Venezuela.

En el reverso de la moneda existió una férrea represión, que derivó en la proscripción de los partidos políticos, el envío de los opositores a campos de concentración, la eliminación física de quien pudiera hacer sombra al hombre fuerte, una estricta censura de prensa y prohibiciones de todo tipo.

La dictadura legitimó su actuación política a través de la vieja noción liberal heredada del siglo XIX, concretamente positivista, de que los hechos eran los que hablaban de la gestión, buena o mala, de un gobernante. Su asesor ideológico fue el hijo de Laureano Vallenilla Lanz, el mismo que a través del libro *Cesarismo Democrático* trató de justificar la dictadura de Juan Vicente Gómez.

El ideólogo del régimen descubrió las intenciones de la “dictadura progresista”, como la llamaba, al escribir: “las necesidades de Venezuela no caben dentro de un programa político. El problema no es político, sino técnico”. Con esta filosofía el grupo gobernante se lanzó a una actividad sin precedentes, apoyado en los crecientes ingresos fiscales que no cesaban de llegar gracias a una mayor exportación petrolera y al buen precio alcanzado por el energético. Esta actividad propició el auge de la industria de la construcción, la iniciación de la industrialización, la penetración de las empresas trasnacionales en la economía, solas o en compañía de capitales criollos. Todo ello realizado con un alto nivel de corrupción e influyentismo que mereció la repulsa del pueblo venezolano y de las mismas fuerzas armadas, que comenzaron a sentirse poco representadas por el régimen a partir de que la dictadura se apoyaba cada vez más en la policía política, la llamada Seguridad Nacional; también les molestaba que el gobierno se

convirtiera en la camarilla de un hombre y que las arcas públicas fueran saqueadas por el equipo gobernante.

La burguesía venezolana se fortaleció durante este periodo, pues gozó de una favorable tasa de acumulación de capital y se enriqueció con las ganancias fáciles, propias de la época. Las clases trabajadoras sufrieron un proceso regresivo del ingreso, debido a su escasa participación en el producto nacional bruto, aunque sí tuvieron acceso a los bienes de consumo, que cada año fueron importados en mayor número. Las capas medias florecieron y aumentaron en número, dividiéndose entre simpatizantes y opositoristas al régimen.

Por lo que respecta a las relaciones con los Estados Unidos, este país mostró, al principio, reservas por la toma del poder de los militares (1948), pero cuando le fueron dadas las garantías de que sus intereses serían salvaguardados, y ante la favorable realidad del crecimiento de la productividad y de la “paz social”, a partir de noviembre de ese año, sus reservas disminuyeron y se convirtieron en un entusiasta apoyo al triunvirato que hacía posible estos avances. Cuando el coronel Pérez Jiménez se erigió presidente de la República, los Estados Unidos se felicitaron porque avizoraron cinco años de tranquilidad laboral y de crecientes ganancias para las compañías petroleras.

En 1954, los Estados Unidos condecoraron a Pérez Jiménez con la mayor distinción que otorga este país a un ciudadano extranjero, en agradecimiento al éxito obtenido por la X Conferencia Interamericana celebrada en Caracas, donde se dio luz verde al derrocamiento del gobierno legítimamente constituido de Jacobo Arbenz, en Guatemala.

La luna de miel de ambos gobiernos terminó cuando el Congreso norteamericano esgrimió la amenaza de restringir las importaciones de petróleo venezolano. El presidente de este país contestó en una forma desusadamente fuerte, aclarando que Venezuela sostenía la estrategia de negociar sus materias primas en bloque, con lo que se actualizó el problema del hierro de Cerro Bolívar, del cual Estados Unidos era el principal comprador.

En resumen, la dictadura perezjimenista aceleró la modernización material del país, la penetración del capital extranjero con la consiguiente inclusión de Venezuela en la estrategia transnacional, el afianzamiento de las clases dominantes internas —sobre todo de la burguesía industrial, financiera y de servicios— se aceleró la intervención estatal en la economía para crear una infraestructura, que daría independencia económica al país y que sería la base de los negocios del capital nacional y extranjero. Proyecto de modernización emprendido a espaldas del pueblo, en un régimen militar policiaco que acallaba la menor disidencia y desaparecía o exiliaba a la oposición.

Durante la década de los cincuenta el Estado venezolano y la misma sociedad civil se diversificaron y adquirieron la complejidad inherente de

un país urbano y modernizado que, sin embargo, acusaba un grave defecto estructural: su principal riqueza tenía un carácter extractivo —aparte de ser un recurso natural no renovable— y estaba controlada enteramente por el capital extranjero.

Con el fin de dar un apretado panorama de la economía del periodo, señalaremos que la característica esencial del mismo fue el crecimiento de todos los índices económicos, dinamismo apoyado en la demanda creciente del energético, cuya extracción fue acrecentada de 1 321 000 b/d en 1949, a 2 779 000 b/d en 1957.⁴³ El petróleo y el mineral de hierro conformaban el 97 por ciento del total de las exportaciones venezolanas. Las arcas fiscales recibieron ingresos sustanciales, lo que permitió que el Estado invirtiera un promedio de 2 550 millones de bolívares anuales. En 1922, antes del auge petrolero, se invertían apenas 72 millones. El 60 por ciento de los ingresos provenían del petróleo.⁴⁴ En el cuadro núm. 2 se detalla la inversión bruta por sectores económicos, de 1950 a 1958.

Se exportó a Estados Unidos y Canadá aproximadamente el 45 por ciento del crudo extraído, a Europa el 29 por ciento y a América del Sur el 12 por ciento.⁴⁵

El producto territorial bruto aumentó, de 1949 a 1959, a una tasa promedio anual del 8 por ciento.⁴⁶ Con la especificación por sectores, el primario creció a una tasa media anual del 7 por ciento; el secundario alcanzó el 9 por ciento y el terciario 6.7 por ciento.⁴⁷ Fue una de las tasas de crecimiento más altas del mundo y la más elevada de América Latina, comparable o superior a las de Alemania Occidental y Japón.⁴⁸

Las inversiones extranjeras brutas también aumentaron considerablemente, en 1945 alcanzaron 938 millones de dólares, en 1956 ascendieron a 3 710 millones, de los cuales el 70 por ciento era de procedencia norteamericana y el resto correspondía al capital angloholandés.⁴⁹ El 93 por ciento del total de las inversiones directas correspondió al petróleo y al hierro, el 7 por ciento restante se distribuyó entre la industria manufacturera, la construcción, los servicios, los bancos, etc.⁵⁰ En esta década comenzó la penetración del capital extranjero en la manufactura y los servicios, solo o en asociaciones con capitales criollos, aunque éstos en pequeña proporción, ya que el mayor interés siguió estando en las actividades extractivas.

La construcción fue el sector más favorecido por el *boom* económico, puesto que obedecía al afán de materializar en obras tangibles la filosofía del gobierno, con la orientación del sector más dinámico de la burguesía venezolana hacia este prometedor renglón; lo cual la hizo entrar en contradicciones, sobre todo en los últimos años de la dictadura, con la camarilla que rodeaba al hombre fuerte y que aprovechaba su cercanía con el poder para hacer pingües negocios. No hay que olvidar que en nuestros países ocupar un puesto público o simplemente tener acceso a los círculos de poder político es una forma muy importante de acumulación de capital, lo que crea contradicciones muy fuertes con los otros sectores burgueses que no

disfrutaron de tal facilidad. Esta fue una de las causas del derrocamiento del régimen perezjimenista.

Respecto al sector manufacturero, el 28 de agosto de 1952 se firmó un tratado comercial con los Estados Unidos que canceló el desarrollo futuro de la producción industrial venezolana, pues este país se comprometió a colocar sus excedentes en el mercado del país sudamericano a cambio de no restringir las importaciones de petróleo. A pesar de lo anterior, el crecimiento de este sector secundario fue muy importante, ya que el aumento de los ingresos petroleros conjuntamente con el gasto público estimularon su crecimiento, aunque con una orientación diferente. Si en el periodo de la segunda guerra mundial se tendía hacia el autoabastecimiento, ahora se surtía de materias primas e insumos importados y se sufría la penetración de capital extranjero.

Por lo que toca a este punto tenemos que tomar en cuenta el hecho de que Venezuela era un país penetrado por el capital extranjero cuando éste había alcanzado su mayoría de edad, en la década de los veinte, con la consiguiente frustración a partir de entonces de todo proyecto industrializador, además de que no se contaba con una burguesía portadora de un proyecto de desarrollo autónomo. Por su parte, el Estado regulaba la economía gracias a sus recursos y establecía políticas desarrollistas, sin contar con el apoyo de una burguesía fuerte que comandara estos proyectos. Por lo anterior, hablar de industrialización en un país estructuralmente ligado a la monoproducción significa tener en cuenta esta deformación y, a su vez, entender el tipo de industrialización que se implanta. Es decir, una industrialización complementaria de los países centrales, maquiladora y canalizada a la satisfacción de las necesidades de un reducido porcentaje de la población, en un modelo de desarrollo que los economistas denominan como “concentrador y excluyente”.

Durante el gobierno perezjimenista, la burguesía comercial importadora se fortaleció aún más, con la diversificación de sus actividades en la industria ligera. La burguesía financiera creció y se consolidó, beneficiándose con la vorágine del lucro fácil que campeaba en Venezuela. Comenzó a surgir una burguesía agraria alrededor de la capitalización que el Estado llevaba a cabo en el campo venezolano, que se dedicó, sobre todo, al cultivo de alimentos básicos y de materias primas requeridos por la industria. La clase de los grandes terratenientes permaneció, aunque subordinada a la burguesía; muchos de ellos modificaron sus explotaciones con un sentido capitalista, pero permanecieron dependientes de la burguesía comercial y usuaria y de los subsidios estatales.

La vocación urbana se consolidó durante estos años. Si en 1950 era rural el 54 por ciento de la población, para 1957, el último año de la dictadura, el 60 por ciento de la población vivía en las ciudades. La emigración del campo a la ciudad se dio en una forma desconocida anteriormente. La población en 1961 alcanzó la cifra de 7 523 999 personas con un

analfabetismo que llegaba al 52 por ciento en 1958,⁵¹ lo que confirma la falta de interés del gobierno militar por la educación.

El sector menos beneficiado con el auge económico auspiciado por el *boom* petrolero fue el trabajo, el cual redujo su participación en el ingreso nacional entre 1950-57 de 59.8 por ciento a 52.4 por ciento, mientras que la del capital aumentó de 40.2 por ciento a 47.65 por ciento.⁵² Los trabajadores venezolanos vieron coartados sus deseos de mejoramiento, porque éstos coincidieron con un periodo de rápido crecimiento económico y con una dictadura militar represiva; por lo que sólo los capitalistas nacionales y extranjeros se beneficiaron con este crecimiento. Como escribió el historiador Federico Brito Figueroa:

en la década de 1950-60 el capital existente en manufactura aumentó en 140%, el producto bruto aumentó en 162%, la inversión bruta el 277% y por contraste, el empleo apenas se incrementó en el 26%; la industria manufacturera, en esa década, satisfizo la demanda de empleo de sesenta mil personas, el 10% de la población que en promedio anual concurrió al mercado de trabajo.⁵³

En cuanto a la proverbial fortaleza del bolívar, las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela y de la banca comercial aumentaron, a lo largo del periodo, de 362 millones de dólares en 1948 a 1 396 millones en 1957, lo que permitió mantener invariable el tipo de cambio de 3.35 bolívars por dólar.⁵⁴

Durante este periodo, se consolidaron una serie de desajustes estructurales que se tradujeron en la desigualdad de la distribución del ingreso, de la estructura de la producción, del empleo y del sistema de financiamiento. Por ejemplo, mientras que el ingreso nacional *per capita* era de cerca de 2 500 bolívars, el de los campesinos se estimaba en 125 bolívars.⁵⁵

La política del régimen en el aspecto económico está suficientemente explicitada en la siguiente cita:

Venezuela es un país en el cual el sistema económico de libre empresa juega un papel preponderante y que, además, contribuye eficazmente al desarrollo del comercio internacional mediante la supresión de barreras a la importación y la exportación, la no discriminación de capitales y la política de puertas abiertas para el inversionista extranjero.⁵⁶

La dictadura, por medio de su actuación en el campo económico, propició el franco dominio del modo de producción capitalista en el país, el desarrollo de las fuerzas productivas y la consolidación de la vocación urbana, de allí su carácter modernizante.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA CON PREDOMINIO ADEÍSTA. RÓMULO BETANCOURT Y RAÚL LEONI. (1959-1969)

El 23 de enero de 1958 una acción concertada por sectores de las fuerzas armadas, de la burguesía —cuyo máximo representante, el señor Eugenio Mendoza se encontraba en Nueva York lidiando con los acreedores norteamericanos a causa de las deudas contraídas por la dictadura—, de amplios sectores marginales de la ciudad de Caracas y del activismo y resistencia de los militantes de los partidos políticos clandestinos, sobre todo del comunista, dio al traste con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, quien en diciembre del año anterior se había hecho reelegir presidente por segunda vez a través de un plebiscito. En su caída también tuvo que ver la falta de apoyo de las compañías petroleras a un régimen que —si bien les había permitido obtener cuantiosas ganancias por el aumento de la productividad del trabajador y por el escaso interés en aplicar los impuestos correspondientes— parecía que ya no convenía a sus intereses, porque Pérez Jiménez se mostró poco sumiso cuando se amenazó con restricciones al petróleo venezolano que importaba Estados Unidos. Además, las nuevas concesiones petroleras otorgadas en 1956-57 no se dieron completamente a las tres grandes compañías: la Royal Dutch Shell, la Standard Oil of New Jersey y la Mene Grande, de la Gulf texana.

A la caída de Pérez Jiménez se instaló una Junta de Gobierno con personeros de la burguesía y de los militares que encabezaron la resistencia al dictador. Así nació un nuevo bloque en el poder, que comprendía la necesidad de una democratización política y de un reformismo que diera legitimidad a la democracia representativa. Por otra parte, durante la década de los cincuenta crecieron y se consolidaron los sectores sociales base de este régimen político.

Unidad era la palabra de moda durante el ejercicio de la Junta de Gobierno, con el fin de robustecer al régimen democrático y hacer frente a las intenciones de derecha, las cuales no faltaron. Igualmente, dentro de este espíritu, se pactaron convenios obrero patronales y se respetaron los contratos colectivos firmados durante el régimen anterior, además de proclamar la congelación de los salarios. Los partidos políticos firmaron el Pacto de Punto Fijo en octubre de 1958, con la exclusión del partido comunista venezolano, a pesar de que la actuación de éste había sido muy importante en la gestación, organización y desenlace de las jornadas del 23 de enero.

Era evidente que los partidos demoburgueses firmantes del Pacto de Punto Fijo (AD, COPEI, URD), no estaban dispuestos —en aras de la democracia— a dejarse arrebatar banderas por la izquierda. Los puntos principales del pacto eran: la necesidad de defender la constitucionalidad, la formación de un gobierno de unidad nacional y la puesta en práctica de un programa mínimo común.⁵⁷

En diciembre de 1958 se celebraron las elecciones para la presidencia de la República y los cuerpos deliberantes. El candidato triunfador fue Rómulo Betancourt, postulado por Acción Democrática, quien obtuvo el 49.18 por ciento de la votación válida. AD logró, igualmente, la mayoría parlamentaria.

Rómulo Betancourt tomó posesión de la presidencia en febrero de 1959, con lo que se inauguró el periodo de la democracia representativa en el país. Durante su mandato enfrentó una aguda crisis económica, debida a la baja en el precio del petróleo y a la saturación del mismo en el mercado mundial; hizo frente también a los defectos estructurales que se arrastraban desde el periodo anterior: baja productividad, desempleo, creciente marginalidad social, sobre todo en Caracas, y desabasto agrícola. Lo anterior se conjuntó con las expectativas sociales despertadas a raíz de la caída del régimen dictatorial. Por otra parte, a nivel mundial tuvo lugar una crisis económica, agotado el enorme impulso de la postguerra en el sistema capitalista.

Junto con las poco propicias condiciones anteriores, Betancourt se enfrentó al radicalismo de izquierda, motivado por la propia actitud intransigente de él mismo y por el impacto que la Revolución cubana causó entre la juventud latinoamericana. El mismo partido de gobierno sufrió la escisión de su Buró Juvenil, que se separó para fundar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

Desde su regreso a Venezuela, en los primeros meses de 1958, Betancourt se preocupó por limpiar la etiqueta de “comunista” que algunos le colgaban. Se dedicó a dar la guerra —sobre todo desde fines de 1959 a fines de 1962— a sus más fuertes opositores, que eran una fracción del PCV y el disidente MIR, a fin de borrarlos del mapa y dejar un escenario limpio de extremismos para sus sucesores. Aprovechó el viaje para orientar a las fuerzas armadas dentro de las nuevas tareas de contrainsurgencia, para lo cual se importaron asesores norteamericanos.

Fue una época de inusitada violencia, con una dura represión en las universidades y en otros centros de enseñanza superior, lo mismo que en las fábricas y barrios obreros, y en el campo. Quizá nunca llegue a conocerse el número exacto de las víctimas que dejaron estas jornadas, que por un lado contaron con la influencia del foquismo y la concepción romántica del asalto al poder por una minoría; y por el otro, con un Estado cada vez más complejo, con un creciente apoyo social auspiciado por el reformismo y la fachada liberal burguesa.

A partir de 1962 la situación política estuvo controlada con la liquidación, a mediados de ese año, de las sublevaciones de Carúpano y Puerto Cabello, esta última con la participación de militares radicalizados. Estas intentonas de tomar el poder por la vía armada no fueron apoyadas por las masas, debiéndose tomar en cuenta el hecho de que Venezuela, en cierto sentido, era un país *sui generis* en América Latina, con enormes recursos fiscales dedicados a limar las asperezas de la lucha de clases.

El partido socialcristiano COPEI apoyó a Betancourt en su gestión gubernamental, en acatamiento al Pacto de Punto Fijo, no así URD, que abandonó la coalición en septiembre de 1960 a partir del debate en San José de Costa Rica sobre la legitimidad de la Revolución cubana. A principios de 1961 este partido se colocó en la oposición directa, e incluso algunos de sus miembros se lanzaron a la guerrilla, con Fabricio Ojeda al frente, el legendario líder de la Junta Patriótica, en la que se concentró, a partir de 1957, la oposición civil al general Pérez Jiménez.

En lo que se refiere al renglón económico, el gobierno elaboró el Plan Cuatrienal, que tendría vigencia de julio de 1960 a junio de 1964, cuyos principales objetivos eran el efectivo desarrollo de la economía nacional, con especial hincapié en la ejecución de la reforma agraria, la cual elevaría la productividad de cultivos de transformación industrial a los que se daba prioridad, como el algodón, ajonjolí, caña de azúcar, tabaco, con la mira de convertir a los campesinos en pequeños propietarios, que contarían con el apoyo estatal para la adquisición de maquinaria e insumos.

Igualmente se daría impulso a la sustitución de importaciones, a través de estímulos fiscales, asistencia técnica y crediticia. En la industria se acentuó la característica que ya se configuraba desde los años anteriores: se instaló, por una parte, una industria “importadora” con tecnología e insumos externos; y por la otra, una de ensamblaje, cuyo caso más patente fue el de la industria automotriz. En la década de los sesenta, el capital extranjero cambió de orientación disminuyendo su inversión en la industria extractiva y volcándose cada vez más hacia los prometedores renglones de la industria de transformación, la banca y los servicios.

El programa de gobierno del partido Acción Democrática, en estas fechas, perdió todo carácter revolucionario. Si en 1945 sus proposiciones eran novedosas, sobre todo en lo concerniente a la democratización política, en 1959 se pretendió seguir sin tropiezos el desarrollo del capitalismo en el país. Se esperaba lograr la autonomía en lo que se refiere a su propio autoabastecimiento a través de la sustitución de importaciones, sin embargo, Venezuela siguió el camino que le correspondía en la férrea división internacional del trabajo implantada por los estadios superiores del sistema: continuar como proveedora de materias primas de carácter estratégico, lo que le permitió a su vez una capacidad importadora que frustró los planes de desarrollo autónomo.

Se estimuló la creación de empresas mixtas entre el Estado, el capital extranjero y el criollo, lo que derivó en la supeditación del capital estatal y el nativo a la superioridad tecnológica del capital externo, dándose el caso de que empresas otrora de capital nacional, como, por ejemplo, la cervecera que permitió capital foráneo en su seno para fines de modernización e innovación tecnológica y al final fue absorbida por aquél. Esto sucedió con otras industrias de larga tradición en el país, como la del aguardiente y papel.

La industria de la construcción, tradicionalmente de carácter local, que tenía su principal fuente de acumulación en la urbanización de los terrenos baldíos de las principales ciudades, fue la que sufrió más por la recesión económica, que obligó, inclusive, a disminuir en un 10 por ciento los sueldos de los burócratas y a la devaluación del bolívar, la primera en muchos años.

Durante el periodo presidencial de Betancourt, el partido en el gobierno sufrió dos escisiones, motivadas por la necesidad que tenía el Ejecutivo de mantenerse en el poder negociando con los sectores reales de poder: Iglesia, ejército, burguesía criolla y extranjera. Betancourt, dentro de su mística de fundador y ejecutor de la viabilidad de la democracia representativa, se enfrentó con los elementos más jóvenes de su partido, que habían dado la batalla a la dictadura y asistían a la transformación socialista de la Revolución cubana con la consiguiente radicalización y demanda de una efectiva revolución social y con los que, más moderados, no querían sino el cumplimiento del carácter popular y democrático que el partido tenía en 1945, cuando se dio el golpe contra Medina.

Durante esta época, la burguesía industrial, financiera y de servicios detentaba la hegemonía de las clases dominantes internas en lugar de la burguesía comercial importadora, como en los años anteriores. Este sector hegemónico se convirtió en socio del capital extranjero, en condiciones de subordinación, y se prosiguió el desarrollo del capitalismo de Estado a través del impulso de las industrias básicas, pero con el abandono de la prohibición perezjimenista de no permitir capital privado en éstas. Si los militares se apoyaron para ello en razones de seguridad nacional, la crisis económica y la diversificación del capital externo en la economía venezolana durante estos años abrieron la posibilidad de intervención de aquél en las industrias básicas.

En relación al petróleo, se reafirmó la tesis adeísta de que no se otorgarían nuevas concesiones. Se creó en 1960 la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), la cual tendría por finalidad la exploración, explotación, procesamiento y comercialización directa de los hidrocarburos pertenecientes al Estado por el derecho de *royalties*, con miras a controlar el mercado interno del energético que estaba en manos del capital extranjero. Aunque esta corporación operó en forma muy modesta, sirvió para que el Estado se interiorizara en el negocio, preparara sus cuadros y ayudara en la formación de una conciencia nacionalista respecto a esta actividad.

Con motivo de la crisis sufrida por los países petroleros, a raíz de la caída de los precios y el estancamiento de la demanda del crudo, el año de 1960 se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, donde Venezuela tuvo un papel destacado a través de su ministro de Fomento, Juan Pablo Pérez Alfonzo. El objetivo principal de esta organización era proteger los precios de una caída brusca y hacer estudios sobre la demanda mundial para que los productores no estuvieran supeditados a las maniobras de las compañías.

El mayor éxito de Betancourt como gobernante fue su permanencia en el poder venciendo a la oposición extremista de ambos signos, ganándose la confianza del capital privado nacional y extranjero, de los cuadros jerárquicos de las fuerzas armadas, de la Iglesia —a lo que ayudó la cancelación de la Ley de Patronato Eclesiástico que databa de 1824— y el apoyo del gobierno norteamericano presidido por John F. Kennedy, que lo “apadrinó” como adalid de la democracia y de las bondades del sistema capitalista, ante la amenazadora presencia de la Revolución cubana. Por medio de la Confederación de Trabajadores Venezolanos, con predominio adeísta, el gobierno de Betancourt tuvo el estricto control del movimiento sindical, obrero y campesino, lo que facilitó también su ejercicio en el poder.

El 11 de marzo de 1964 se dio el relevo presidencial, el doctor Raúl Leoni inició su gobierno asegurando que realizaría un gobierno de concordia, entendimiento y equilibrio y que proseguiría, en lo general, la obra emprendida por su antecesor: continuación de la reforma agraria, ampliación de los seguros sociales, apoyo a la sustitución de importaciones, desarrollo de la CVP y la permanencia activa de Venezuela en la OPEP.

Leoni no gobernó con mayoría parlamentaria como el anterior gobierno, porque Acción Democrática perdió en las elecciones el control de la Cámara de Diputados, aunque conservó la del Senado. COPEI respaldó su gestión, también participaron en el gobierno otros pequeños partidos políticos, surgidos al calor de la lucha electoral, a los que se les denominó de “Amplia Base”. Estos partidos buscaban presentar una alternativa a los dos más grandes (AD y COPEI), pero en lo general su influencia fue menor de lo previsto. Entre sus pilares se encontraban intelectuales de la talla de Arturo Uslar Pietri. En lo que respecta a las fuerzas de izquierda, éstas iniciaron una reconsideración de estrategias y tácticas, lo que motivó fuertes discrepancias en su seno acerca del camino a seguir.

Durante los años del gobierno de Leoni prosiguieron, en general, los problemas estructurales de la economía venezolana, con el decaimiento del impulso estatal a la construcción de industrias básicas, impulso que databa de los tiempos de la dictadura. Como lo señala acertadamente el historiador venezolano Germán Carrera Damas: “La acción del gobierno se limitó a mantener la estabilidad del sistema democrático, sin alterar ni mucho menos innovar, mientras que los males estructurales de la sociedad proseguían su curso crítico.”⁵⁸

Lo más importante de la gestión gubernamental del doctor Leoni fue la presentación de un proyecto de reforma tributaria que buscaba aumentar los ingresos fiscales en un 7 por ciento, gravando los ingresos personales, los de las corporaciones y el consumo de cigarros, licores y autos. Venezuela se contaba entre los países con más bajos impuestos en similar estado de desarrollo, consecuencia de que aproximadamente el 75 por ciento de la participación fiscal recaía sobre el petróleo. El Estado se encontraba en

apuros financieros puesto que en la década de los sesenta tuvo que enfrentar la estrategia de las compañías petroleras, las cuales aplicaron una política lesiva para el país; esto afectó el potencial petrolífero y, por ende, la participación fiscal, precisamente cuando las necesidades presupuestarias eran mayores.

El resultado de este proyecto gubernamental de ampliación y equilibrio de carga tributaria fue la alianza de FEDECAMARAS, poderosa organización de la burguesía venezolana y de las empresas petroleras, fundada en 1944, que orquestó, desde los medios de comunicación, un coro contra el gobierno, como se hace evidente en la declaración del portavoz de un "Comité de la clase media" que manifestaba: "La conclusión es clara: las leyes sometidas al Congreso llevarán a Venezuela directamente al comunismo."⁵⁹

El gobierno tuvo que retroceder en su propuesta de reforma fiscal y aunque apeló, como Betancourt lo había hecho anteriormente, a los Estados Unidos por la necesidad que tenía Venezuela de un trato preferencial hemisférico, las relaciones con este país fueron corteses, pero frías. Se dio marcha atrás en los propósitos de implantar un impuesto especial, "selectivo", sobre los beneficios superiores al 15 por ciento sobre los activos fijos de las compañías petroleras y se efectuaron acuerdos que no lesionaran la autonomía de éstas en cuanto al manejo del petróleo venezolano.⁶⁰

Un año antes de las elecciones presidenciales y congresales, en diciembre de 1967, el partido gobernante sufrió una nueva escisión que le costó el triunfo. Surgió así el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), encabezado por el eminente educador Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien sería su postulante presidencial. La versión oficial de esta tercera división en Acción Democrática señaló que ésta fue consecuencia de ambiciones personales, pero Beltrán Prieto F. se defendió con el argumento de que él y sus partidarios veían crecer el distanciamiento entre partido y pueblo, que AD se había convertido en un escalón para llegar al poder y que ya no cumplía su tarea de promover la efectiva democratización social y económica de Venezuela.

Respecto a los datos cuantitativos, es necesario destacar que durante los dos gobiernos adeístas se dio un incremento de las inversiones brutas norteamericanas del 24 por ciento, las que ascendían, en 1960, a 21 530 millones de bolívares y en 1968 a 26 457 millones.⁶¹

En el mismo año de 1968 los capitales provenientes de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, controlaban el 94 por ciento de las inversiones directas brutas con la supremacía del capital norteamericano, que alcanzaba el 71.4 por ciento.⁶² Estas inversiones se concentraron, sobre todo, en el petróleo y en el mineral de hierro, a los que correspondieron el 57.6 por ciento del total, a pesar de que las inversiones netas en petróleo descendieron de 9 130 millones de bolívares en 1960 a 5 581 millones en 1968.⁶³ El resto de las inversiones se canalizó a la industria manufacturera, comercio y servicios financieros y no financieros.

Venezuela, para estas fechas, siguió concentrando las mayores inversiones norteamericanas en América Latina, alrededor de un 25 por ciento. A nivel mundial representaron el 10 por ciento de estas inversiones en el exterior, pero las utilidades que percibieron no tienen correspondencia con estas cifras, de por sí importantes. Por ejemplo, en 1960-1968 las utilidades netas de los monopolios internacionales ascendieron a 3 628 millones de bolívares, lo que dio lugar a la siguiente opinión de Federico Brito Figueroa: "Al establecer una relación con respecto a 1960, se observan un incremento del 126% en el monto de las utilidades obtenidas y un incremento de la tasa de beneficio del 14 al 34% en el mismo periodo."⁶⁴

En cuanto a las importaciones, Venezuela ha sido tradicionalmente un país con una fuerte capacidad para importar. Se estima que en 1969 alcanzaron la cifra de 1 650 millones de dólares, entre los principales proveedores se encontraban los Estados Unidos con el 50.1 por ciento; Alemania Occidental con el 8.5 por ciento; Inglaterra con el 6.5 por ciento; Japón con el 5.8 por ciento e Italia con el 5.0 por ciento. Entre los artículos importados en mayor proporción estaban vehículos y sus partes, hierro y acero, trigo, equipo para construcción y minería y productos químicos-orgánicos.⁶⁵

Las exportaciones venezolanas alcanzaron en 1969 un total de 2850 millones de dólares, y los principales clientes fueron Estados Unidos con el 32.6 por ciento del total (se excluye de esta cifra el petróleo refinado en las Antillas Holandesas y en Trinidad Tobago, reexportado posteriormente a los E. U.; Antillas Holandesas, 19.5 por ciento; Canadá, 11.5 por ciento; Inglaterra, 6.4 por ciento y Trinidad Tobago, 5.5 por ciento. Las exportaciones estaban compuestas por petróleo y sus derivados en un 93.4 por ciento, mineral de hierro, 4.1 por ciento; otros productos como el café, pescado y sus preparados, hierro, acero y azúcar, componían el resto.⁶⁶

En 1968 se calcularon tres millones de trabajadores dentro de la población económicamente activa, agrupados de la manera siguiente: agricultura, 32 por ciento; servicios y empleos públicos, 29 por ciento; industria, 18 por ciento; comercio y banca, 13 por ciento; otras actividades, 8 por ciento, y un desempleo del 6.5 por ciento.⁶⁷

El PIB creció a una tasa anual del 5 por ciento, el cual ascendió en 1968 a 9.9 mil millones de dólares. La participación por sectores, a precios de 1957, fue la siguiente: petróleo (incluye el refinado), 25.7 por ciento; servicios, 25.0 por ciento; comercio, 16.0 por ciento; construcción, 5.3 por ciento; transporte y comunicaciones, 3.7 por ciento; energía eléctrica e hidroeléctrica, 2.7 por ciento; minería, 1.1 por ciento y el sector manufacturero, 13.3 por ciento.⁶⁸

La agricultura tuvo un rápido crecimiento en los años sesenta, gracias al apoyo estatal y a la realización de la reforma agraria, aun cuando ésta no respondió a las expectativas puestas en ella, desde el punto de vista económico. Los estudiosos venezolanos juzgan esta reforma como una medida de tipo político, que concitó el apoyo campesino en favor del partido Acción Democrática y que sirvió de contención a las demandas de

la población rural, abrumada por una estructura de la propiedad de la tierra de carácter latifundista. Los principales productos cosechados fueron plátano, cacao, azúcar, arroz, maíz, ajonjolí, algodón, carne de res y de puerco, leche y productos avícolas.⁶⁹

El sector manufacturero creció rápidamente durante el periodo, aunque al final del mismo presentaba síntomas de decaimiento. Entre los principales productos que se elaboraban se encuentran los derivados del petróleo, alimentos, productos metálicos y químicos, bebidas, papel y cartón, artículos para las artes gráficas, muebles y ropa; además de una importante producción de acero, 690 mil toneladas, que colocaron a Venezuela en el cuarto lugar entre los productores latinoamericanos.⁷⁰

En cuanto al crédito, se siguió operando con la Corporación Venezolana de Fomento, a través de la cual el Estado financiaba, a mediano y largo plazo, empresas que establecieran industrias dentro de la política de sustitución de importaciones y que emplearan materias primas y mano de obra nacional. La CVF orientó su preferencia a la creación de plantas textiles, de materiales de construcción, celulosa, papel, químicas y maderas.⁷¹ En el sector privado la operación de la Creole Investment Corporation fue muy importante, como también la de CAVENDES (Corporación Financiera Venezolana de Desarrollo), que operaba con capital privado nacional y extranjero, a un plazo de uno a diez años.

La industria automotriz, pilar de la sustitución de importaciones, se rigió desde 1962 por la “Declaración de Política sobre la industria automotriz”, donde se estipularon las normas y procedimiento a seguir. Se prohibió la importación de unidades armadas y se estableció un programa de incorporación de partes nacionales para lograr una verdadera integración. Esta industria produjo un promedio de 60 mil unidades anuales y cuatro empresas monopolizaron más del 50 por ciento de la producción total: Ford Motor de Venezuela, General Motors de Venezuela, Chrysler de Venezuela, y Volkswagen Interamericana.⁷²

En cuanto a las industrias básicas, el proyecto siderúrgico databa de la época de la Junta Revolucionaria de Gobierno y el gobierno militar le había dado gran impulso. Los gobiernos adelfistas mantuvieron la inversión, en 1961 empezó a operar la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), con una capacidad de 750 mil toneladas de acero en lingotes y 600 mil toneladas de productos acabados, utilizándose como materia prima el mineral de hierro de alto tenor del Cerro Bolívar, en la Guayana. Por otra parte, en 1950 había empezado a operar la Siderúrgica Venezolana (SIVENSA) que utilizaba la fundición de chatarra en hornos eléctricos. Esta compañía es una especie de subsidiaria de SIDOR, la cual representa el esfuerzo estatal más acabado para contar con una industria pesada.

La Corporación Venezolana de Guayana se constituyó a fines de 1960 y fue la encargada del desarrollo orgánico de la rica zona guayanesa, donde se instalaron los proyectos de industrias básicas de la dictadura perezjimeñista. Tuvo a su cargo la finalización de la hidroeléctrica del Caroní, que en

1961 se encontraba en funcionamiento con una capacidad instalada de 370 mil kilovatios.⁷³

La petroquímica, inscrita dentro de las industrias básicas con control estatal durante la dictadura, perdió este rasgo durante el régimen de Betancourt. Pionero en este sentido es el complejo Morón, construido entre 1953 y 1963. Su rubro más importante lo constituye la producción de fertilizantes.

“El Tablazo” es un gran complejo petroquímico ubicado en el estado de Zulia, en el cual se invirtió en una primera etapa 407 millones de dólares. El Instituto Venezolano de Petroquímica participó con el 47.6 por ciento del capital, otras empresas del Estado con el 23.7, los monopolios internacionales con el 25.5 por ciento y el capital privado nacional con el 3.2 por ciento.⁷⁴ Se proyectaba terminar el complejo en 1985, con lo cual se pretendía surtir al mercado nacional de estos insumos y exportar el resto. En el periodo de 1963-67 la industria química creció a un ritmo superior al sector manufacturero en su conjunto, elaborando los insumos que utilizaron las industrias del plástico, fertilizantes nitrogenados, fibras sintéticas e insecticidas.

Aluminio del Caroní (ALCASA) entró en funcionamiento en 1967 produciendo aluminio reducido y lingotes. La Corporación Venezolana de Guayana participó con el 50 por ciento de su capital. En 1969 procesó 13.8 miles de toneladas, lo que representó un incremento del 25.5 por ciento con relación al año anterior.⁷⁵

Como corolario al examen de la década de los sesenta es necesario demostrar, con datos, que la población venezolana vio crecer su índice de educación y sanidad, si los comparamos con los que existían en la época dictatorial.

A mediados de 1970 la población ascendía a 10.4 millones de habitantes, con una participación urbana de 70 por ciento.⁷⁶ Véase al respecto el cuadro núm. 3, donde se detalla la población urbana y rural de 1936 a 1971. El 90 por ciento de esta población se encontraba alfabetizada y con el PIB más elevado de América Latina: 940 dólares.⁷⁷

El índice de mortalidad era de más del 18 por ciento en 1938 y bajó al 6.4 por ciento en 1969.⁷⁸ La tuberculosis y la gastroenteritis, enfermedades que cobraban el mayor número de víctimas, fueron desplazadas a lugares secundarios gracias a que el 70 por ciento de la población urbana y el 68 por ciento de la rural disponían de agua potable, aunado a que el 43 por ciento de la población urbana contaba en 1969 con servicios cloacales, que si bien es un porcentaje que dista mucho de ser satisfactorio, representa un avance con respecto a la situación anterior.⁷⁹

Durante estos años, Venezuela siguió instalada en la dependencia de la monoproducción, ocupando el tercer lugar mundial como productora de petróleo, con un volumen anual de 190 millones de toneladas métricas. La exportación de petróleo representó el 70 por ciento de los ingresos fiscales y

más del 90 por ciento del comercio exterior, además de alcanzar su valor el 25.6 por ciento del PNB.⁸⁰

Rafael Caldera. 1969-1974

El 11 de marzo de 1969 el líder histórico del partido social cristiano (COPEI) asumió la presidencia de la República. El doctor Caldera llegó al poder gracias a una inteligente campaña electoral, que hizo ver la necesidad de un cambio y que alertó sobre los peligros del continuismo. Además de que se apoyaba en un elaborado programa de gobierno que reconocía que: “La inmensa mayoría del pueblo venezolano está al margen de los mecanismos, las decisiones, las labores y los beneficios que se realizan en la Nación”.⁸¹ También contribuyó a su triunfo la tercera escisión del partido rival, Acción Democrática.

El punto total de su gobierno fue la política de pacificación: suprimió los movimientos armados que aún quedaban en Venezuela e indultó a antiguos guerrilleros; se legalizó al PCV, el cual entró en un proceso de crisis y de intenso análisis, con motivo de la derrota militar. Como resultado de lo anterior, en 1970 se fundó el Movimiento al Socialismo (MAS) por los antiguos guerrilleros Pompeyo Márquez y Teodoro Petkoff. Este partido se propuso analizar la realidad desde parámetros venezolanos y latinoamericanos.

En política internacional, el gobierno de Caldera restableció relaciones con gobiernos *de facto*, con lo que se liquidó la doctrina betancourista que proclamaba el no reconocimiento diplomático de Venezuela a gobiernos emanados de cuartelazos. Dentro de esta política de “distensión”, a nivel externo e interno, se restablecieron relaciones con la URSS y hubo un acercamiento con Cuba. En cuanto al espinoso asunto del Esequibo, región perteneciente a Guyana que reclama Venezuela desde el siglo pasado, en febrero de 1969 se firmó el “Acuerdo de Ginebra” que delimitó pautas para la solución de este conflicto, y el mismo año se firmó el “Tratado de Puerto España”, que congeló por diez años ese problema fronterizo.

En 1961 se proclamó constitucionalmente la obligación venezolana de propiciar la integración económica latinoamericana, como paso previo a la realización del sueño bolivariano. En agosto de 1966 se firmó la “Declaración de Bogotá”, que dio inicio al proceso de integración subregional andino. Caldera se enfrentó a la fuerte oposición de FEDECAMARAS con relación al ingreso de Venezuela a este pacto, que implicaba la competencia de los productos elaborados en los países vecinos a menor costo. La controversia terminó en 1973, con el ingreso de Venezuela al Pacto Andino.

Dentro de la política calderista de “nacionalismo democrático”, se nacionalizó en agosto de 1971 la industria del gas y se denunció el tratado comercial con Estados Unidos, que daba ventajas arancelarias a los productos norteamericanos. Asimismo, el 30 de julio de 1971 fue promul-

gada la ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, lo que significaba que al término de las concesiones las propiedades y bienes de las compañías petroleras pasarían, sin indemnización, a poder del Estado. Esta ley le concitó la antipatía de los intereses extranjeros. Caldera anunció, igualmente, la necesidad de poner un coto a la desnacionalización cultural promovida desde la televisión, totalmente en poder de consorcios externos y señaló la necesidad de nacionalizar la energía eléctrica de Barquisimeto y Maracaibo.

En cuanto a la nacionalización del gas, los planes que anunció el Ejecutivo a principios de 1970 contemplaban la exportación de gas natural líquido, para lo cual era necesaria la construcción de una costosa planta de licuefacción en el oriente del país, en Puerto La Cruz, donde se encontraban los mayores yacimientos. También se construirían gaseoductos y una flota de tanqueros, con la utilización tanto del gas asociado al petróleo, como el no asociado. En agosto de 1971, con la intervención del Congreso —controlado por la oposición— el proyecto quedó en que el gas natural, tanto el asociado como el no asociado al petróleo, sería propiedad del Estado y se exportaría únicamente el gas asociado, por medio de un monopolio estatal.

Se impulsó la participación del capital nacional en las empresas extranjeras con objeto de conseguir su “venezolanización”, en un intento de dar mayores oportunidades al capital nativo, ante la aplastante superioridad del externo; con el mismo objetivo, en 1970, se creó el Instituto de Comercio Exterior, que apoyaría la exportación de productos manufacturados, y se promulgaron las leyes de Incentivos a las Exportaciones y la del Fondo de Financiamiento de las Exportaciones. Se inició la apertura de Venezuela hacia la región caribeña, con su incorporación al Banco de Desarrollo del Caribe.

Como el Estado venezolano estaba siempre urgido de dinero y las compañías petroleras mantenían estacionarios o decrecientes los precios del petróleo, en octubre de 1970 se presentó, junto con el presupuesto de 1971, una reforma tributaria que aumentaría los ingresos en un 9 por ciento sobre los de 1970, gravando con el 10 por ciento las ganancias petroleras e incrementando los impuestos sobre licores, cigarrillos, gasolina y lotería.⁸² El proyecto fue rechazado por el Congreso, y se sustituyó por uno que proclamaba se aumentarían los impuestos sobre los beneficios de las empresas petroleras y mineras del 52 por ciento en vigor hasta el 60 por ciento; además, el gobierno recibía la facultad de fijar los precios de referencia del petróleo.⁸³ Aunque no fue aprobada la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo, de todos modos hubo un aumento de los ingresos estatales.

Durante la década de los sesenta tuvo lugar un debilitamiento de los precios del petróleo y una producción irregular, lo que se comprueba en el hecho de que en 1970 el promedio de producción en Venezuela era de unos 3.7 millones de b/d, en 1971 el promedio fue de 3.5 millones y en 1972 de

3.2 millones de b/d.⁸⁴ Para 1973 el panorama económico estaba dado por la condición dependiente y subordinada que ejemplifica Brito Figueroa:

Los monopolios norteamericanos controlan el 66% de la producción de bienes, el 40% del PTB, deciden sobre el 71% de las divisas y de los ingresos fiscales y son los amos verdaderos del 96% del comercio de exportación de nuestro país.⁸⁵

No obstante lo anterior, las arcas fiscales se vieron henchidas a partir de este mismo año por los nuevos precios alcanzados por el energético, ya que si en 1969 el barril de petróleo estaba a menos de dos dólares, en 1973 alcanzó los catorce dólares por barril. Es necesario destacar que la famosa "crisis energética" fue en gran parte fruto de una situación artificiosa creada por las mismas compañías petroleras, que necesitaban hacer rentables los yacimientos norteamericanos y las fuentes alternas de energía, a lo que se sumaron los conflictos bélicos del Medio Oriente.

Con el fin de diversificar el mercado de exportación de petróleo, Caldera se esforzó por establecer contacto con los países latinoamericanos importadores del crudo a través de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, creada en 1973. Pero, en general, sus esfuerzos por sustituir al petróleo árabe en el mercado latinoamericano resultaron infructuosos.

En lo concerniente a la explotación de la faja petrolífera del Orinoco, en septiembre de 1972 se iniciaron conversaciones con los Estados Unidos en este sentido, pero se tuvo que dar marcha atrás por las protestas de la oposición.

La tónica general del gobierno calderista fue despertar grandes expectativas, que no cumplió. Promulgó el IV Plan de la Nación, el cual en palabras de Germán Carrera Damas:

prometía una transformación fundamental e integral de la sociedad venezolana que habría de abarcar desde el nivel de la infraestructura y de la ordenación del territorio hasta la esfera de los valores filosóficos.⁸⁶

La construcción de viviendas baratas para familias de modestos ingresos fue punto central de su política económica doméstica, con ello se paliaba el desempleo y se fortalecía a la industria de la construcción, de capital predominantemente nacional. Asimismo, se habló de construir el metro de Caracas.

Caldera se enfrentó, en el otoño de 1970, a una huelga de maestros y obreros del hierro, al malestar que en las fuerzas armadas causaban las distensiones políticas en el Congreso y, en general, en la vida pública venezolana.

Como en los anteriores gobiernos hubo un aumento en la burocracia, con lo que se satisficieron demandas políticas. El gobierno copeyano prosiguió con el desarrollo de la infraestructura, la reforma agraria, la creación de industrias del Estado orientadas a la exportación, aunque

hubo problemas presupuestarios; Venezuela ha sido un país que desde 1958 ha tenido ingresos fiscales crecientes a una tasa promedio del 7 por ciento, lo que ha permitido la expansión estatal y el apoyo de ésta al capital nacional y extranjero.⁸⁷

En términos económicos, el sistema capitalista dependiente siguió su curso, aunque sí hubo un intento de renegociación de la posición de Venezuela en el sistema capitalista mundial, sobre todo en la última parte del mandato calderista, aprovechando la coyuntura crítica que lo afectó a partir de 1971 cuando la campaña electoral estaba en marcha. Los problemas estructurales prosiguieron e inclusive se agravaron, como la crisis agrícola, la baja productividad, el desempleo, la ineficiencia y la corrupción administrativas.

Aunque la sociedad venezolana está acostumbrada a una continua expansión, la distribución del ingreso permaneció similar a la que existía en 1957, en las postrimerías de la dictadura. Ejemplo de ello es que en 1970, el 40 por ciento de las familias recibían un ingreso promedio de 1 035 bolívares mensuales y más del 30 por ciento recibían 1 675 o más.⁸⁸

A fines de su periodo, Caldera, ya instalado en la lucha electoral, propuso la necesidad de adelantar la reversión de la industria petrolera (que tendría lugar en 1983) y anunció la promulgación de un nuevo reglamento de la Ley del Trabajo, mediante el cual quedarían comprendidos los trabajadores rurales, con gran alarma de FEDECAMARAS.

El gobierno de Carlos Andrés Pérez. 1974-1979

En las elecciones celebradas en diciembre de 1973 el candidato del partido Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, fue electo por abrumadora mayoría. En estas elecciones los dos principales partidos políticos venezolanos, AD y COPEI, utilizaron por primera vez los tradicionales métodos electorales de Estados Unidos, para ello recurrieron a la asesoría de expertos norteamericanos que aconsejaban y dictaban la “imagen” que debían presentar los candidatos.

Lorenzo Fernández, candidato del partido perdedor, destacó en su campaña que en caso de resultar electo mantendría una línea de continuidad con el régimen de Caldera e hizo hincapié en que no se negociaría con los consorcios extranjeros el control de la faja petrolífera del Orinoco —la mayor reserva de crudo pesado de Venezuela—. También prometió que se haría la reversión anticipada de las concesiones petroleras que vencían en 1983, y que los trabajadores recibirían capacitación para que pudieran instalar y administrar sus propias empresas. En cuanto al orden internacional, Fernández señaló que se restablecerían relaciones con Cuba y, en lo interno, se promulgaría una ley de amnistía para los perseguidos políticos de la cruenta aventura guerrillera de la izquierda venezolana llevada a cabo en la década anterior.

Las frecuentes fricciones que tuvo el régimen calderista con el sector privado le costó que los principales grupos económicos brindaran su apoyo al candidato del partido Acción Democrática. Por su parte, Carlos Andrés Pérez se lanzó a la campaña con el lema de “democracia con energía” y con la promesa de acabar con la inflación, la corrupción, el peculado, la ineficiencia en los servicios públicos y el abatimiento de la delincuencia. Ofreció, igualmente, mejorar el nivel de vida de la población, lo que se realizaría con el apoyo de los ingentes recursos fiscales que Venezuela recibía por su principal producto de exportación. En el cuadro núm. 4 se resume la situación fiscal a partir del año 1900 hasta 1976. En 1978 los ingresos por este concepto fueron de 110 mil millones de bolívares, los que ascendieron a 303 mil en 1981.⁸⁹

Carlos Andrés Pérez inició su gobierno con halagüeñas perspectivas, debido al incremento de los ingresos fiscales por el alza del precio del crudo, a consecuencia del embargo árabe a raíz de la guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, con el que Venezuela no se solidarizó. Pérez contó con una aplastante mayoría en el Congreso, dándose en términos políticos el fenómeno del bipartidismo, pues en esta contienda electoral AD y COPEI controlaron el 85 por ciento de los votos del electorado, con la consiguiente pérdida de significación de los diversos partidos formados durante la década de los sesenta. El abstencionismo fue casi nulo, 3.07 por ciento, lo que indica que —no obstante que el voto tiene carácter obligatorio— el pueblo venezolano ejerció sus derechos políticos.⁹⁰

Este gobierno generó grandes expectativas, fomentadas por el mismo presidente Pérez en su discurso de toma de posesión, cuando señaló que: “...la era de la democracia económica y social como expresión de las más sentidas aspiraciones del hombre y la mujer venezolanos” habían llegado, agregando que su gobierno administraría “la abundancia con criterios de escasez, quiero decir, con eficiencia, equidad y justicia distributiva”.⁹¹

Un mes después de la toma de posesión solicitó al Congreso poderes discrecionales y logró la aprobación de una ley que le concedía poderes extraordinarios en materia económica y financiera; se promulgaron decretos al por mayor —en los primeros cien días de su mandato se dictaron alrededor de 26 decretos sobre los más variados temas— y se formaron comisiones que se encargarían de asesorarlo en los problemas más urgentes.⁹² Entre dichas comisiones las más importantes fueron la Comisión Presidencial para la Reversión Petrolera, que se formó con miras a adelantar el término de las concesiones; y la dedicada a establecer las pautas de la reforma administrativa en todo el aparato gubernamental, integrada para mejorar la eficiencia del trabajo burocrático.

La reforma administrativa tiene su antecedente inmediato en 1958, cuando se fundó la Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN), el primer intento por racionalizar el desempeño gubernamental.

mental. Durante el periodo analizado, la planificación adquirió un sentido eficientista y productivista que no había tenido anteriormente. Se creó la Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública, presidida por Pedro Tinoco, quien puso de manifiesto las intenciones del régimen cuando declaró:

Nuestra actual estructura del Estado, heredada del antiguo régimen liberal, no sirve para controlar empresas y manejarlas eficientemente. La experiencia ha sido clara al respecto y los tristes resultados, en múltiples casos, que recogen año tras año los informes de la Contraloría al Congreso, no son más que una elocuente prueba de esa realidad.⁹³

Con esta declaración se dio reconocimiento oficial al hecho de que el sector estatal en la economía no había dado los resultados esperados, por lo que se planeó una reorganización global de éste, con la creación de un sistema de empresas descentralizadas cuyos parámetros de operación serían similares a los de la iniciativa privada.

Otro influyente ministro, Gumersindo Rodríguez, miembro del clan de los “Doce apóstoles” —así se apodaba a los principales representantes de este nuevo tipo de funcionario público, que más parecía surgido de los cuadros directivos de una empresa transnacional que del sector público—, señalaba las directrices a las que se tendría que orientar el nuevo Estado:

La reducción del gasto público corriente —y su consecuente orientación hacia actividades productivas— sólo puede ser posible en la medida en que parte de la sociedad venezolana asuma la responsabilidad de compartir con el Estado el financiamiento de los gastos por servicios básicos indispensables, a fin de mejorar la capacidad del Estado para consagrarse al financiamiento de los grandes programas de naturaleza industrial.⁹⁴

La gestión gubernamental se guiaba por los señalamientos del V Plan de la Nación, que delimitó los campos de participación del sector estatal, privado y transnacional. Según el plan, el Estado incrementaría su participación en la actividad productiva, lo que se manifestó en el hecho de que durante 1970-1974, la inversión bruta fija en manufacturas, petróleo y minería, que, antes había sido del 26.6 por ciento, ascendió al 66.1 por ciento.⁹⁵ Se buscó que el gasto público se derivara hacia las industrias básicas de exportación, como la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) y Aluminio del Caroní (ALCASA) y se disminuyera el peso de los servicios sociales en el presupuesto. Según los proyectos del V Plan, a las industrias básicas se les dedicaría el 57 por ciento de la inversión pública total, estimada en 118.777 millones de bolívares.⁹⁶ Estas industrias metálicas básicas reforzarían la participación en el total de las exportaciones, del 1.3 por ciento registrado en 1975 al 29 por ciento en 1980,⁹⁷ con el objetivo de aminorar la dependencia petrolera a este respecto.

El Estado propuso el impulso a las industrias básicas como alternativa ante la pérdida de dinamismo que se observó en la sustitución de importaciones en los años anteriores, propuesta que fue apoyada oficialmente con toda clase de estímulos, aunque finalmente se mostró incapaz de propiciar una industrialización autónoma, generadora de divisas e independiente de los insumos externos.

El Estado seguirá con sus actividades tradicionales, necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo; aunque su objetivo principal será el fortalecimiento del capitalismo de Estado, dirigido a lograr una mejor posición en la división internacional del trabajo, con el propósito de ganar mercados en Centroamérica, el Caribe y los países del Pacto Andino.

La orientación estatal dirigida a la ampliación y consolidación de su papel en la economía, no dejó de generar preocupaciones en la burguesía más tradicional, agrupada en FEDECAMARAS —el principal organismo privado venezolano—, la cual se quejó de un exagerado intervencionismo estatal, considerando que:

Este intervencionismo está causando perturbaciones en la acción de la libre iniciativa y en la operatividad de la empresa privada. Está dando lugar a una limitación en la eficiencia de la empresa privada; elimina las condiciones necesarias para el juego de la libre competencia, crea una situación de dependencia de la economía privada en relación con el Estado, que es a todas luces perjudicial; limita la capacidad gerencial de la iniciativa privada. Podríamos afirmar que la tendencia estatizadora está frenando la capacidad de libre iniciativa en lo que pareciera ser un empeño en convertirla en ineficaz, esto es, para despojarla del más precioso de sus activos.⁹⁸

El capital privado podría orientarse, según el V Plan, hacia las actividades turísticas, agrícolas, de la pequeña y mediana industria, comercio, y hacia las etapas secundarias y terciarias de la industria petroquímica. El capital privado nacional y extranjero podía participar con el 49 por ciento en las industrias básicas y le correspondía, concretamente, al capital extranjero proporcionar la tecnología y garantizar la colocación de los productos en el exterior. Para invertir en las industrias no básicas no se establecieron límites al capital privado.⁹⁹

Este proyecto desarrollista y tecnocrático no dejó de tener críticas aun dentro del propio aparato estatal, como la expresada por Ramón J. Velásquez, historiador y político del sistema:

Y ahora los tecnócratas, y no desde la oposición sino usufructuando posiciones dentro de los regímenes democráticos, los califican (a los gobiernos democráticos) de ineficaces, anticuados, folkloristas. Indudablemente, el modelo con que sueñan es el de Brasil, de Castelo Branco, Costa Silva, Garrastazu y Geisel.¹⁰⁰

Lo que se proponía en definitiva el V Plan era la diversificación industrial y agrícola, con la redefinición del papel tradicional del Estado y la

delimitación de los campos de operación del capital privado, nacional y extranjero. La incapacidad para llevarlo a cabo plenamente puso de relieve las deficiencias estructurales en materia administrativa, aunado lo anterior al agudizamiento de los problemas generados por el auge económico.

Se acometieron gigantescos proyectos de industrias básicas, como la ampliación de SIDOR y la represa del Guri en la Guayana, y se impulsó la producción de aluminio para exportar (ALCASA y VENALUM). No se conjuró la tentación de los países que obtienen riquezas fácilmente, porque se crearon y formularon enormes elefantes blancos que a la postre se revelaron socialmente improductivos, pero que sirvieron para una acumulación “salvaje” de capital para los contratistas y los funcionarios públicos encargados de otorgar los contratos.

La nacionalización del hierro y del petróleo

Dos de los hechos más importantes de la gestión gubernamental de Carlos Andrés Pérez fueron la nacionalización del hierro y del petróleo. El 1º de enero de 1975 se nacionalizó el hierro, que se encontraba casi enteramente en manos de compañías norteamericanas que poseían cerca de 20 000 has. del mineral. Con el control estatal de la industria se pretendía aumentar el valor agregado nacional en el mineral exportado.

Las concesiones norteamericanas, en poder de la Orinoco Mining Co., filial de la United States Steel Corpo. y la Iron Mines Co. of Venezuela, subsidiaria de la Bethlehem Corpo., vencían a fines del presente siglo y en el primer tercio del siguiente. La industria quedó a cargo de la Corporación Venezolana de Guayana, que controla la industria siderúrgica y de aluminio. El Ejecutivo señaló en su discurso, con ocasión de la nacionalización, los motivos por los cuales era necesaria, expresando que las compañías habían operado durante veinticuatro años en el país y en este lapso

... el 97.5% de nuestro hierro no ha sido procesado en Venezuela. Con la inversión de las empresas multinacionales de 1.484 millones de bolívares lograron utilidades de 3.392 millones de bolívares, lo que quiere decir que han recuperado dos veces y medio su capital invertido.¹⁰¹

Esta acción nacionalizadora no dio ocasión a controversias con las compañías extranjeras. Se les indemnizó ampliamente y Venezuela se comprometió a seguir proporcionando a los altos hornos norteamericanos el mineral de hierro.

El 1º de enero de 1976 se nacionalizó la industria petrolera, con un arreglo negociado sin fricciones por ambas partes, debido a que al capital transnacional le interesaba más su dominio sobre la esfera de la circulación y transformación que tener el control de las áreas productivas propiamente dichas, amén de que la participación fiscal de los Esta-

dos productores alcanzaba cifras elevadas. El traspaso al Estado se hizo a través de Petróleos de Venezuela, PDVSA, entidad gubernamental que se haría cargo del negocio bajo indemnización y con la firma de contratos de servicio que aseguraban el control tecnológico, de comercialización y transporte del petróleo nacionalizado.

Desde el 29 de agosto de 1975 se había dictado la “Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos” y se creó un día después PDVSA, cuyo decreto de fundación, el 1123, señalaba que era “una empresa estatal, bajo la forma de sociedad anónima, que cumplirá y ejecutará la política que dicte en materia de hidrocarburos el Ejecutivo Nacional.”¹⁰²

En cuanto a la fundamentación constitucional de la nacionalización, se establecía en la ley anteriormente citada que:

... se reserva al Estado, por razones de conveniencia nacional, todo lo relativo a la exploración del territorio nacional en búsqueda de petróleo, asfalto y demás hidrocarburos; a la exploración de yacimientos de los mismos; a la manufactura o refinación; transporte por vías especiales y almacenamiento; al comercio exterior e interior de las sustancias explotadas y refinadas y a las obras que su manejo requiera, en los términos señalados por esta Ley.¹⁰³

La comisión presidencial para la Reversión Petrolera, compuesta por los sectores más representativos del país, concluyó que la nacionalización debía ser integral, reservándose el Estado el manejo directo y el control absoluto de todas las operaciones de la industria. El Ejecutivo modificó el proyecto, presionado por la burguesía nativa y la transnacional, con la autorización para celebrar convenios de asociación con empresas privadas, ya sean foráneas o locales, con lo que se allanó el camino legal para la formación de empresas mixtas.

Con la nacionalización se conservaron las mismas grandes empresas, con idéntica estructura y personal, únicamente se les cambió el nombre. Además por medio de contratos de servicios, las antiguas compañías detentaban el control de la organización, de la tecnología y de la comercialización del petróleo al exterior.

El desinterés de las compañías petroleras por mantener sus niveles de inversión en Venezuela se patentiza en el hecho de que entre 1966 y 1974 se registró un descenso del 72 por ciento al 37 por ciento en el total de la inversión norteamericana, respecto al rubro petrolero.¹⁰⁴ Hay que agregar a lo anterior la relativa pérdida de importancia de Venezuela entre los grandes productores de crudo, pues a mediados de los setenta era el quinto productor mundial y el cuarto entre los exportadores.

La indemnización otorgada a las compañías petroleras rebasó, incluso, las expectativas de éstas, pagándoseles unos 1.220 millones de dólares,¹⁰⁵ medida que fue rechazada por el Movimiento al Socialismo y el Movimiento Electoral del Pueblo, estas organizaciones políticas aducían

que no debería de pagárseles por las excesivas ganancias logradas durante su permanencia en el país.

La industria nacionalizada se ha tenido que enfrentar a los crecientes costos de producción, lo mismo que al agotamiento de los crudos ligeros que se explotaron durante sesenta años, por lo que las inversiones para mantener el ritmo de extracción tuvieron que ser cada vez mayores, tanto para cumplir las cuotas de exportación como para hacer rentables los yacimientos de petróleo pesado de la faja petrolífera del Orinoco, lo que únicamente es posible con una refinada tecnología, de la cual se carecía. Estas preocupaciones las expresó el general (r) Alfonso Ravard, presidente de PDVSA, cuando señaló:

Aunque a largo plazo nuestro futuro petrolero se presenta estable, la ubicación y desarrollo de los nuevos recursos de hidrocarburos requeridos por el país para mantener un ritmo de producción de acuerdo a los lineamientos recibidos, será el resultado del mayor esfuerzo programado y sistemático de la historia petrolera del país, ya que las inversiones necesarias en los próximos diez a doce años serán del orden de los 80 000 millones de bolívares, alcanzando los costos de operación, durante el mismo lapso, unos 70 000 millones de bolívares.¹⁰⁶

La explotación petrolera registró un promedio de 2 200 000 b/d durante el periodo y se siguieron los lineamientos de la OPEP respecto a rebajar los volúmenes exportados para conservar los precios, con el establecimiento, a partir de 1973, de ajustes automáticos de éstos en función de las fluctuaciones del dólar.

Con la nacionalización del hierro y del petróleo se consolidó el capitalismo de Estado y se prosiguió la asociación de capital estatal con el privado y extranjero para la formación de empresas mixtas. El objetivo estatal fue expresado por Carlos Andrés Pérez en la Guayana, con motivo de la nacionalización del hierro: “Los grandes proyectos siderúrgicos y petroquímicos darán solidez y nacionalizarán realmente el desarrollo de la industria nacional, dependiente y de ensamblaje”.¹⁰⁷

Respecto a la bonanza fiscal, ésta se expresó en una balanza superavitaria con un saldo de 2 511 millones de dólares en 1975, con lo que se situaron las reservas internacionales en 8 953 millones de dólares.¹⁰⁸ Para 1977 esta situación había cambiado, pues la euforia de la nacionalización de las dos industrias propició el incremento de las importaciones y el gigantismo estatal en proyectos de desarrollo, como el escenificado en la Guayana,

... que han conducido al fenómeno insólito de que —señala el estudioso y político venezolano Francisco Mieres— por primera vez en la Venezuela petrolera, se registra en 1977 y 1978 un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos del orden de los 10 mil millones de dólares en los dos ejercicios.¹⁰⁹

En 1976 fue anunciado al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria, pero ante las presiones de FEDECAMARAS el conflicto se resolvió con la constitución de una Comisión Tripartita para estudiar el asunto, integrada por representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de la organización empresarial y del gobierno.

Los enormes recursos percibidos a partir de 1973 no fueron debidamente canalizados hacia proyectos económicos viables, lo que originó presiones inflacionarias sobre los precios y un incremento de las importaciones que agudizaron la debilidad estructural de la economía venezolana, causada por la exagerada importancia que se daba a los sectores terciarios, sin la respectiva correspondencia con los sectores realmente productivos. Por ejemplo, en la participación por sectores en el PTB correspondieron, en promedio, al primario el 15 por ciento, al secundario el 26 por ciento y al terciario el 59 por ciento, este último renglón absorbió el 55 por ciento de la población económicamente activa con enormes contingentes en el desempleo disfrazado,¹¹⁰ con el agravante de que el sector exportador, por su elevada densidad de capital y su aplicación de innovaciones tecnológicas, empleó poca mano de obra.

A lo anterior se sumó el que un importante sector de la burguesía, relacionado con la sustitución de importaciones, orientó sus capitales hacia las actividades terciarias, las que le proporcionaban una segura rentabilidad.

Con objeto de poner un freno a la llegada de divisas, en junio de 1974 se creó el Fondo de Inversiones de Venezuela, adscrito a la Presidencia de la República, con las siguientes finalidades:

- 1) La complementación del financiamiento de la expansión y diversificación de la estructura económica del país.
- 2) La realización de colocaciones e inversiones rentables en el extranjero.
- 3) El desarrollo de programas de cooperación financiera internacional.¹¹¹

Con esta medida se trató de impedir que la totalidad de los ingresos fiscales provenientes del petróleo se distribuyeran en la economía, lo que provocaría una inflación que, sin embargo, era una constante desde mediados de la década de los sesenta. Véase al respecto el cuadro núm. 5, donde se detalla el movimiento inflacionario a partir de 1974.

El Fondo de Inversión Industrial y el Fondo de Inversión Agrícola tuvieron la misión de canalizar los créditos hacia estas actividades productivas, los cuales fueron otorgados, sobre todo, a medianas y grandes empresas. Muchos de estos créditos no fueron orientados hacia las actividades productivas a las que estaban destinados, sino que fueron

invertidos en otros rubros como la especulación, con el resultado de que muchos de estos préstamos no pudieron ser pagados, si confiamos en la opinión de un empresario que manifestó que de los 80 000 millones de bolívares que en créditos habían otorgado los dos últimos gobiernos, sólo se consideraban rescatables 20 mil millones.¹¹²

No hubo correspondencia entre la cantidad monetaria existente y la producción. Se incrementó la importación de artículos suntuarios, además de los absolutamente necesarios, como los alimenticios y los insumos para la industria, que portaban en sus precios la inflación del mundo industrializado. Los bienes intermedios totalizaban casi el 60 por ciento de las importaciones, lo que da cuenta de la dependencia del aparato productivo respecto al exterior. Esto se evidencia en los cuadros estadísticos núms. 6 y 7 que se anexan a este trabajo.

A pesar de lo ventajosa que fue la política económica gubernamental hacia el sector privado, FEDECAMARAS no dejó de alarmarse con el Anteproyecto de Ley de Despidos Injustificados, por la advertencia del Ejecutivo que les planteó “la peligrosa irracionalidad de la posición inmovilista del empresariado venezolano en un país multimillonario donde el 1% de los venezolanos disfrutan el 51% del ingreso nacional y al 99% restante sólo llega el 49%”.¹¹³

El movimiento obrero se mantuvo bajo el control de los dos principales partidos políticos (AD y COPEI), con líderes oficialistas que negociaron los contratos colectivos de trabajo. En el campo, la presencia principal siguió siendo la de Acción Democrática, pese a que la tan decantada reforma agraria se mostró como un fracaso y un barril sin fondo para los recursos oficiales. Los esfuerzos estatales se orientaron hacia el aumento de la productividad por medio de la mecanización de las labores agrícolas, con la persistencia en general de los bajos niveles de subsistencia de los campesinos.

El control de los trabajadores fue ejercido a través de varias leyes y decretos expedidos para tal fin, como la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, que restringió la capacidad de maniobra de los empleados en las industrias básicas y los servicios públicos. Los sindicatos más combativos, que no pudieron ser controlados, fueron agredidos físicamente en los locales donde realizaban sus sesiones y se decretaron medidas que debilitaron la autonomía e independencia de sus representaciones. Por ejemplo, los burócratas tenían un plazo de noventa días para discutir sus contratos colectivos, si en este lapso no llegaban a un acuerdo con las autoridades, el asunto pasaba a manos de una comisión de alto nivel que decidía en forma inapelable las condiciones del contrato.

Pese a la política de aumentos salariales, el ingreso real de la población disminuyó. La política habitacional se dirigió hacia los sectores de más altos ingresos, con lo que desapareció la posibilidad de que adquirieran vivienda amplios sectores de las capas medias.

Al término del mandato de Carlos Andrés Pérez, el sector o fracción de clase dominante más importante era la burguesía financiera, estructuralmente ligada al capital extranjero y a los renglones industriales de servicios y comerciales; la cual a su vez contaba con gran poder de decisión en las esferas gubernamentales. Se buscó fortalecer el sector más dinámico de la burguesía venezolana, cuya principal fuente de acumulación eran los proyectos estatales. Este sector buscaba, apoyado en los ingresos crecientes del fisco, la redefinición de los términos de dependencia, con un discurso nacionalista y tercermundista que culminó en el *slogan* VENEZUELA CUENTA CONTIGO, dirigido a allegarse el apoyo de los trabajadores y de las capas medias urbanas, que se vieron incrementadas por un importante flujo migratorio procedente de los países europeos.

Este sector burgués “estatista” fue el que sufrió más drásticamente la recesión económica de los últimos años, debido, principalmente, a su dependencia de las arcas oficiales y a su ineficacia, imprevisión y desconocimiento de los negocios, ya que como surgió en condiciones harto favorables le era muy difícil adecuarse a la crítica situación actual.

Las ganancias que provenían de la industria petrolera no solucionaron los problemas de fondo que se arrastran por lo menos desde la segunda mitad de los cuarenta; por ejemplo, la carencia de una autosuficiencia agrícola, que da por resultado que Venezuela importe el 60 por ciento de los productos alimenticios que consume; la crisis urbana, que presenta caracteres graves en Caracas; la creciente marginalidad social, que implica a su vez inseguridad y delincuencia; el mal funcionamiento de los servicios públicos; la ineptitud y corrupción administrativas; la acentuación de la injusta distribución del ingreso, ligado con la excesiva dependencia de la renta petrolera en un país monoproducción que todavía está esperando que se “siembre el petróleo”, sin descuidar el hecho psicológico que consigna Arturo Uslar Pietri: “El gran problema de Venezuela consiste en que sus riquezas no han sido ganadas y, son una constante incitación al despilfarro”.¹¹⁴

El régimen de Carlos Andrés Pérez frustró todas las expectativas depositadas en el “hombre que camina”, como lo caracterizó la propaganda. El lema de su campaña electoral “democracia con energía” que contenía como programa acabar con la corrupción y la inflación — a partir de 1974 la cuadruplicación del gasto público, aunado a la absoluta carencia de un control real de precios, permitieron que el costo de la vida en las principales ciudades se elevara a una tasa media anual de 10 por ciento entre 1974 y 1978—,¹¹⁵ la eficiencia en los servicios públicos, el mejoramiento de la calidad de la vida, el abatimiento de la delincuencia y el desempleo, se resolvió en una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Según Carrera Damas el 20 por ciento de la población recibía el 65 por ciento del ingreso,¹¹⁶ en un deterioro creciente de los servicios públicos; el incremento de la corrupción a niveles desusados, que no se había visto ni en las épocas dictatoriales, el creciente endeudamiento para hacer frente

a los grandes proyectos y la crisis educativa, que se manifestó en conflictos permanentes. En el cuadro núm. 8 se detallan los indicadores de la dependencia de la economía respecto al petróleo.

Como consecuencia de la coyuntura internacional, que dejó atrás los tiempos del petróleo barato y desaprovechado, el Estado venezolano percibió a partir de 1973 enormes recursos que volcó en la economía para la realización de ambiciosos proyectos, en pos de la “Gran Venezuela” del porvenir. El resultado fue que:

... el gasto público rápidamente se tornó excesivo, el dinero corrió por las vertientes del enriquecimiento corrompido, y las contradicciones de clase se reactivaron porque la ‘cruzada contra la pobreza’, anunciada antes por el propio Presidente, se había limitado a un pequeño aumento salarial que luego resultó erosionado por la violencia inflacionaria de los precios.¹¹⁷

El gobierno de Luis Herrera Campíns (1979-1984)

Luis Herrera Campíns, candidato de COPEI, ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1978 a Luis Piñerúa, del partido Acción Democrática, quien pagó con su derrota el precio del descontento y la frustración que la gestión gubernamental de Carlos Andrés Pérez despertó en la población. El candidato copeyano impactó durante su campaña electoral por el empeño que puso en resaltar la “otra” Venezuela, no la de la opulencia ostentosa y los grandes proyectos del régimen anterior, sino la que cobija en los ranchos de los alrededores de Caracas y las principales ciudades venezolanas; aquella que padece desnutrición y las secuelas del desempleo y se debate entre la delincuencia y la sobrevivencia. En el cuadro número 9 se consignan las estadísticas de estas elecciones, que volvieron a confirmar el fenómeno del bipartidismo.

Apoyándose en la doctrina demócrata cristiana de su partido, Herrera Campíns prometió gobernar para los pobres, para el 40 por ciento de la población considerada marginada, la cual vería superada su situación a partir del acceso a mayores posibilidades educativas, habitacionales y sanitarias que serían proporcionadas durante el periodo de su mandato.

El régimen presidencial de Luis Herrera Campíns comprendió los años de 1979-1984, y le correspondió sortear los efectos de la crisis económica desatada a partir de 1982, crisis que no implicó únicamente disminución de las divisas por la baja en el precio del petróleo o el pago perentorio de los intereses de la deuda externa, sino que fue acompañada por problemas sociales y económicos de toda índole, que mostraron los límites del modelo de desarrollo proseguido en el país desde mediados del siglo, cuando se apostó a la industrialización y a la consiguiente modernización, que no llevó a la cabal realización de ninguna de estas premisas e hizo a Venezuela

más dependiente del exterior, amén de que los beneficios del crecimiento económico no fueron repartidos equitativamente.

Desde su discurso de toma de posesión, el 11 de marzo de 1979, el nuevo presidente señaló que recibía un país hipotecado a pesar de los altos precios que había alcanzado el energético en los años anteriores. No le faltaba razón, pues la deuda externa aumentó de 6 mil millones de bolívares en 1975 a 31 mil millones en 1978,¹¹⁸ cuando se acometieron los ambiciosos proyectos de la “Gran Venezuela” del periodo de Carlos Andrés Pérez, el cual coincidió con una situación de amplia liquidez en el mercado financiero internacional que motivó el fácil acceso de Venezuela a estos recursos, dada su situación de país petrolero.

Herrera Campíns procedió de inmediato a “sincerar” la economía, con el propósito de sanearla de la avalancha monetaria anterior que la había sobrecalentado y había desbordado sus parámetros peligrosamente. Para tal fin, y durante los primeros tres años, se liberaron los precios, se suprimieron subsidios, se contrajo la masa monetaria en poder público, se dejó de apoyar la sustitución de importaciones por considerarla agotada, se quitaron barreras arancelarias y se aplicó una política crediticia restrictiva, además de que se detuvieron proyectos de desarrollo económico, aunque se dio prioridad a los que estaban más adelantados, como la industria de aluminio para exportación. En 1980, Venezuela ocupó el primer puesto como productor de aluminio primario en América Latina y el octavo en el mundo,¹¹⁹ de allí la importancia concedida a esta industria como diversificadora de las exportaciones, ante la aplastante superioridad del petróleo a este respecto, que alcanzó el 94.7 por ciento del total de éstas en el mismo año.¹²⁰

El resultado de esta desaceleración de corte ortodoxo fue que el crecimiento anual del PTB no alcanzó el 1 por ciento en promedio durante 1979-1980.¹²¹ Los sectores más afectados fueron la industria de la construcción, la manufacturera y algunos servicios, principalmente el comercio.¹²² La inversión privada se contrajo, tanto por la incertidumbre natural, consecuencia del cambio de gobierno, como por la escasez crediticia. El desempleo aumentó a niveles nunca vistos anteriormente debido al cierre de empresas y a que los capitales emigraron en lugar de invertirse en actividades productivas. Se calcula que para fines de 1982, y durante el primer semestre de 1983, salieron 5 mil millones de dólares debido a la desconfianza en el bolívar y para ponerse a cubierto de la crisis. El diario caraqueño *El Nacional* señaló en noviembre de 1983 que el desempleo alcanzaría ese año el 24 por ciento y que el poder de compra de los trabajadores había descendido un 40 por ciento.¹²³

Aunado a lo anterior, tenemos el gigantismo e ineficiencia del Estado venezolano, señalado por propios y extraños, monopolizado por los dos grandes partidos políticos que se han traspasado puntualmente el poder en los últimos 25 años, colmando las expectativas de sus votantes —aunque no todas, por supuesto— a través de la ampliación del aparato estatal y de

canonjías y subsidios de todo tipo, lo que será más difícil de llevar a cabo en la actual coyuntura crítica.

Ejemplo de este gigantismo es el crecimiento de la burocracia. Durante el periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez se pasó de 300 000 a 800 000 empleados públicos, y al finalizar el de Luis Herrera se calculó que había un millón y fracción de burócratas, reclutados, preferentemente, por asuntos políticos.¹²⁴ El reputado intelectual Arturo Uslar Pietri señaló que a este crecimiento de la burocracia había que sumar las empresas descentralizadas que eran alrededor de 390, las cuales poseían un capital aproximado de 185 000 millones de bolívares y consumían las tres cuartas partes de los recursos del país.¹²⁵

Las críticas a la gestión estatal no dejaron de escucharse por boca de los personeros de la iniciativa privada, quienes reprocharon la ineficiencia y el despilfarro de recursos; ejemplo de esto es la declaración del presidente de la Federación Latinoamericana de Contadores Públicos, quien señaló que las empresas estatales presentaban pérdidas anuales por 8 mil millones de bolívares.¹²⁶

Si bien es cierto que a principios de la gestión copeyana los precios del petróleo se dispararon hasta alcanzar los 40 dólares por barril, a causa de la crisis que provocó el ayatola Jomeini al tomar como rehenes a varios ciudadanos norteamericanos, los crecientes aumentos de los intereses en los mercados financieros internacionales y las presiones inflacionarias dieron al traste con la prometida recuperación. Esto implicó una brusca disminución en los ingresos fiscales, aproximadamente de 20 000 millones de bolívares (4 651 millones de dólares)¹²⁷ de abril a diciembre de 1982, debido a que la contraofensiva de las compañías petroleras y de los países industrializados trasladó el costo de la recuperación a los países subdesarrollados, imponiendo la OPEP cuotas de exportación a sus miembros ante la contradicción del mercado petrolero mundial.

Los precios de los hidrocarburos se situaron alrededor de 25 dólares por barril, aunado a esto la industria petrolera nacionalizada tuvo que enfrentarse a la poca productividad de los yacimientos, tendencia creciente desde 1970 y que estimuló a las compañías petroleras extranjeras a dejar la extracción del crudo en manos del Estado en 1976. Los costos también subieron, pues si en 1977 el barril costaba a la industria alrededor de 2.68 dólares, para 1981 el costo global por barril extraído era de 5.74 dólares, un aumento del 114 por ciento.¹²⁸ A lo anterior se agregó la necesidad de hacer frente a los pagos de los contratos de servicio por tecnología y comercialización firmados con las ex-concesionarias, que aumentaron progresivamente, al igual que la pérdida relativa de la posición venezolana como exportadora de petróleo que se acentuó durante el periodo, ya que México pasó a ocupar el lugar que antes tenía Venezuela de principal proveedor de crudo a los Estados Unidos.

Deuda externa

Venezuela era un país tradicionalmente solvente en lo que respecta a sus reservas internacionales, a su balanza de pagos y a la fortaleza de su moneda. Esta situación empezó a cambiar a partir de 1976, cuando se recurrió al crédito externo para hacer frente a los proyectos gubernamentales. Para diciembre de 1983 se calculaba que la deuda externa, pública y privada, sería del orden de los 36 mil millones de dólares, lo que ubicaba a Venezuela en el cuarto lugar de los países más endeudados de América Latina, después de Brasil, México y Argentina. El gobierno de Herrera Campíns manejó este problema en forma errática e incoherente, principalmente porque tenía en puerta las elecciones presidenciales.

Agravó el problema la carencia de una política reglamentada de endeudamiento. Cada instituto autónomo podía pedir prestado en el exterior, sin autorización del gobierno central y con la sola aprobación de sus directivos, lo que generó una abultada deuda con muchos progenitores, que se presupone sea mayor a lo manifestado. Sumemos a lo anterior el hecho de que los mismos estudiosos venezolanos desconfían de las estadísticas proporcionadas por los organismos oficiales. En el transcurso de 1983 se solicitaron cuatro moratorias para el pago de los intereses de la deuda, buscándose refinanciar 18 400 millones de dólares que vencían ese año y en el siguiente.¹²⁹

Es necesario señalar con cifras la merma de la privilegiada posición venezolana que, a pesar de todo, es mejor que la del resto de nuestros países, como se comprueba en su negativa a tratar con el FMI este problema y en su insistencia en negociar directamente con los bancos acreedores, apoyada en unas reservas internacionales del orden de los 11 648 millones de dólares.¹³⁰

Durante un lapso de 14 años, de 1968 a 1982, el monto de la deuda creció en un 27.5 por ciento, pasando de 1 880 millones de bolívars a 52 034 millones.¹³¹ Se registró también un cambio en su composición, ya que actualmente está concentrada en entes financieros privados, un 35 por ciento está en manos de los tres principales bancos norteamericanos.¹³² En 1971 este mismo porcentaje estaba contraído con organismos oficiales, mientras que en 1980 se había reducido al 4 por ciento,¹³³ pesando en este hecho la participación de Venezuela en la OPEP, que le vedaba la posibilidad de acceder a préstamos de carácter gubernamental.

Aparte de esta concentración en organismos financieros privados —que implica términos más onerosos que los oficiales— una parte importante de la deuda, el 43 por ciento, se encuentra contraída a corto plazo y se calcula que en 1982 la deuda total, pública y privada, era 285 por ciento más grande que el monto de las reservas internacionales, frente a un 48 por ciento en 1975. Otro indicador del menoscabo de la posición venezolana fue el hecho de que en 1975 la deuda era el 16 por ciento del PNB, mientras que para 1982 ascendió al 51 por ciento.¹³⁴

A manera de resumen sobre este problema, cito a continuación el diagnóstico que hicieron profesionales venezolanos respecto a esta situación del país:

En 1983 vence el 49% (13 005 millones de dólares) de la deuda total del sector público, del cual 41% (10 825 millones de dólares) corresponde a deuda de corto plazo y 8% (2 180 millones de dólares) a deuda de mediano y largo plazo. A esto hay que agregar que entre 1984 y 1985 vencen 5 596 millones de dólares de deuda de mediano y corto plazo. Esto implica que en tan sólo tres años hay que cubrir el 70% de la deuda total del sector público.¹³⁵

A pesar de la voluntad política que existía para encarar la crisis con el menor costo posible, en vista de las elecciones de diciembre de 1983, el gobierno tuvo que devaluar el bolívar en febrero de 1982 con la imposición de tres paridades: preferencial, controlada y libre, conservándose la primera en 4.30 bolívares por dólar para importaciones, consideradas esenciales, y el pago de la deuda contraída por el sector privado que era de unos diez mil millones de dólares. Una semana después fue eliminada esta preferencia por las agudas críticas que mereció y porque los capitalistas nacionales, como sostenía Leopoldo Díaz Bruzual, director del Banco Central de Venezuela, ya habían sacado divisas suficientes como para liquidar sus adeudos con el exterior. Efectivamente, el Banco de Pagos Internacionales con sede en Basilea, Suiza, indicó a los medios periodísticos que los empresarios de este país habían depositado en el exterior unos 17 mil millones de dólares, lo que contrastaba con las reservas internacionales de Venezuela, que ascendían a 10 000 millones.¹³⁶

A pesar de lo anterior, y ante la presión de FEDECAMARAS, en septiembre de 1983 por virtud del decreto 2245 se autorizaron dólares preferenciales a 4.30 para pagar la deuda privada, pero esta medida sólo tenía efecto hasta el 31 de diciembre. Arturo Sosa, titular del Ministerio Hacienda, asumió lo coyuntural de la disposición cuando declaró que:

La aprobación del decreto tal como ha sido redactado nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de negociación con el Comité Asesor de Bancos, ganarle terreno al FMI, paliar los problemas internos, y lo que es más importante, remitirle el problema a la nueva administración.¹³⁷

La devaluación tuvo repercusiones importantes tanto en el bolsillo como en la moral de los venezolanos, lo cual sintetizó el funcionario anteriormente citado al declarar: “Los venezolanos estamos mal acostumbrados como país, debido a que, en los últimos cincuenta años se han tenido sólo dos paridades del bolívar frente al dólar: 3.35 hasta 1963 y 4.30 entre 1963 y el presente”,¹³⁸ además de reconocer que Venezuela se debatía en “una economía de guerra”.

En julio de 1983, en plena celebración del Bicentenario del Libertador, una misión del FMI visitó Caracas por segunda ocasión en lo que iba del año para tratar lo relativo al pago de la deuda. Se encontró con la abierta discrepancia entre las autoridades en materia monetaria, representadas en este caso por el mencionado titular del Ministerio de Hacienda, que sostenía las diversas paridades del bolívar frente al dólar y por Leopoldo Díaz Bruzual, que pugnaba por la devaluación lineal y la unificación cambiaria, lo que lo hacía partidario del Fondo.

La misión dictaminó que se deberían aumentar los impuestos fiscales, los precios de los combustibles, congelar los salarios, liberar los precios, reducir o eliminar los subsidios y proceder a una contracción severa del gasto público, con la consiguiente alarma de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) que la acusó de querer descargar en las espaldas del pueblo el peso de la crisis. La respuesta del gobierno fue que estas medidas debían aplicarse en un lapso de tres años, para evitar un mayor costo social.¹³⁹

Los escarceos con el FMI estuvieron a la orden del día durante todo el año de 1983, si en un principio se había reconocido la necesidad de entrar en tratos con el organismo internacional, se dio marcha atrás ante la proximidad de las elecciones, prefiriendo proseguir las conversaciones para el refinanciamiento de la deuda con el comité asesor de bancos encabezado por el Chase Manhattan Bank, que representaba a 200 entidades acreedoras. Las declaraciones del presidente Herrera Campíns respecto a acatar las medidas del Fondo eran contundentes: no se negociaría con éste porque sus condiciones son “políticamente inconvenientes, socialmente gravosas para el pueblo y económicamente inaceptables”,¹⁴⁰ alegando que su gobierno había diseñado medidas que encaraban la crisis sin el alto costo que pretendía aquél.

Ante la necesidad de presentar un frente sólido en las conversaciones con los bancos acreedores, en septiembre de 1982 se centralizaron las divisas del sector oficial por medio de un convenio cambiario, entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Hacienda, que se propuso, según rezaba el comunicado oficial:

...cumplir expresas disposiciones legales que hasta ahora no se habían llevado a la práctica y dar, también, real y cabal imagen de la solidez monetaria del país, y permitir la armonización y centralización de la política de administración y colocación de reservas por parte del agente financiero del gobierno (BCV) en los mercados financieros internacionales.¹⁴¹

La empresa petrolera nacional, Petróleos de Venezuela (PDVSA), fue despojada del Fondo de Inversiones que manejaba desde 1976, con la centralización, de esta forma, de cinco mil millones de dólares que tenía depositados en el exterior. La medida fue acompañada de fuertes críticas por parte de los expertos quienes señalaban que se le había arrebataado “su

poder de negociación internacional” a la empresa estatal, la que se enfrentó al peligro de una descapitalización.¹⁴² Igualmente fue revalorizado el oro en poder del BCV, la onza troy que estaba contabilizada en 42.22 dólares ascendió a \$ 300.00, como costaba en el mercado internacional.

A pesar del desastre económico, calificado por los opositores políticos adeístas como el “quinquenio negro” en la historia del país, se tiene que reconocer en el haber de la administración copeyana su colaboración con México en el “Acuerdo de San José” firmado en Costa Rica en agosto de 1980, por medio del cual ambos países se comprometían a poner en marcha el “Programa de Cooperación Energética” para los países centroamericanos y del Caribe, ofreciendo en forma conjunta 100 000 b/d de petróleo para cubrir las necesidades energéticas de la región. Si bien la política exterior venezolana no se caracterizó, en el periodo, por su progresismo y apoyo a las causas populares, por motivos electorales se dio un cambio de rumbo y a las amenazas de suspender el envío del crudo a Centroamérica se pasó a colaborar y apoyar ampliamente al Grupo Contadora.

La inflación no se disparó como se esperaba y Venezuela fue el país latinoamericano que sorteó con mayor éxito este problema.

Para terminar con el análisis económico de este periodo de la historia venezolana contemporánea, quisiera traer como colofón el diagnóstico que un grupo de universitarios venezolanos hizo sobre las causas de la situación actual de su país. Según éstos, la crisis sería resultado de:

Una política financiera exageradamente expansionista, un deterioro progresivo en la relación de intercambio, distorsiones crecientes en los precios internos, conjuntamente con el mantenimiento de un tipo de cambio que mantuvo por muchos años una importante sobrevaluación del bolívar con respecto al dólar, no podían conducir a otra situación. Se ha edificado un aparato industrial no sólo costoso e ineficiente, amparado por un proteccionismo arancelario y un subsidio que alcanzó niveles impresionantes, sino altamente dependiente de las importaciones, tanto de insumos como de endeudamientos externos, cuya transformación en generador de divisas es sumamente difícil, dada su orientación sectorial y su onerosa estructura de costos, así como su profundo nexo al comportamiento del sector público.¹⁴³

Elecciones de 1983

El breve análisis efectuado del periodo herrerista estaría incompleto si no se tocara, aún más sucintamente, el desenlace de las elecciones presidenciales efectuadas el 4 de diciembre de 1983 y la política económica propuesta por el vencedor, el médico pediatra Jaime Lusinchi, perteneciente al partido Acción Democrática, confirmándose en esta ocasión el fenómeno político del bipartidismo, característico de la democracia venezolana.

El candidato socialdemócrata ganó la presidencia a Rafael Caldera, líder histórico del otro gran partido venezolano, COPEI, eminente personalidad que tiene el defecto de considerar a éste como su coto privado. Presidente en el periodo 1964-1969, la campaña copeyana hizo hincapié en la fortaleza física del caudillo —quien fue candidato presidencial en 1947— y lo hizo emprender largas caminatas en compañía de jóvenes. Dio rienda suelta a lo largo de su campaña a la “promisología”, ya que según un estudio elaborado por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela efectuó un total de 2 456 promesas electorales.¹⁴⁴

Jaime Lusinchi fue más sobrio en todos sentidos, y aunque ambos importaron consejeros norteamericanos expertos en mercadotecnia y relaciones públicas, la campaña no dejó de ser en momentos grosera y de poca altura política.

El programa del candidato adeísta proponía acelerar la producción de alimentos, propiciar la repatriación de capitales en un clima de confianza y reglas del juego claras, sincerar el sistema cambiario, vender al sector privado las empresas estatales deficitarias que no fueran básicas, quitarse complejos chovinistas frente a la inversión extranjera y en última instancia, según sus palabras:

Cambiar el sistema, humanizando al capitalismo venezolano y dándole una nueva dimensión. Yo no estoy planteando utopías ni abstracciones revolucionarias. Planteo, dentro del esquema en el cual hemos vivido, transformaciones de fondo que le den dimensión distinta a esta sociedad. O esta sociedad, que nos permite discrepar, cambia, o la van a cambiar otros, quitándonos el derecho a discrepar.¹⁴⁵

La reactivación económica tendrá como base la principal industria del país, la petrolera, el eficiente uso de los recursos y el control de la inflación —que se pretende combinar con crecimiento económico—, apoyado en el Pacto Social, el cual se traduce en la necesidad de aglutinamiento de todos los sectores sociales en torno a la estrategia gubernamental a fin de superar la crisis por la que se atraviesa, la más severa del siglo.

Este Pacto Social deviene en un pacto político “ante el cual todos los sectores entiendan que tendrán que atenuar sus demandas sobre un producto que va a crecer muy lentamente dentro de unas condiciones económicas poco favorables que se van a mantener durante cierto tiempo”, como señaló Luis Raúl Matos Azócar, Coordinador del Programa de Gobierno de Lusinchi,¹⁴⁶ esto no significa que el costo de la recuperación recaiga sobre los trabajadores, sino que se pretende que los que más tienen cooperen en mayor proporción, según el citado asesor, quien agrega que se piensan generar 200 000 empleos por año, lo que se logrará con la creación de un “sistema económico de cooperación, un sistema económico que plantee unas nuevas relaciones entre el capital, el trabajo y la tecnología (...). Ha llegado el momento que en vez de subsidiar el capital —precisa-

mente el recurso más escaso— lleguemos a la subvención del trabajo”.¹⁴⁷
Para llevar a cabo lo anterior se planeó:

... estimular la demanda en aquellos sectores como la agricultura, la agroindustria y la construcción, los cuales tienen una capacidad de respuesta inmediata, que generan empleo, son ahorradores de divisas y permiten que no haya desabastecimiento y escasez en el país.¹⁴⁸

Hasta aquí las buenas intenciones. El gobierno encabezado por Lusinchi tuvo que tomar medidas drásticas, como una nueva devaluación del bolívar, liberación de precios, alzas en los combustibles e impuestos, que descansaron en amplia proporción sobre los indirectos que en 1983 participaban con un porcentaje del 46.6 por ciento frente a un 40.8 por ciento correspondiente a 1978, lo que señala los pocos deseos de gravar al capital¹⁴⁹ y entablar una renegociación de la deuda externa.

En resumen, al político copeyano le tocó gobernar en una época difícil y aunque esta situación la heredó a su sucesor, los problemas continuaron agravándose por la cerrazón del capital financiero transnacional para aliviar la carga de la deuda y por la falta de solidaridad de nuestros países, que se han negado a presentar un bloque unido de deudores y asumen el papel de “chicos buenos” en un mundo regido por reglas de juego piratescas, en un fin de siglo que da paso a la tercera revolución industrial que amenaza dejarnos —otra vez— en una posición aún más subordinada y dependiente en la división internacional del trabajo y con complejos problemas sociales, agudizados por la explosión demográfica, la miseria creciente de las mayorías, un aparato productivo orientado a la satisfacción de una minoría y una deuda externa que se revela cada vez más como impagable.

25 AÑOS DE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

En 1983 se conmemoraron en Venezuela dos hechos trascendentales: el Bicentenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar y el primer cuarto de siglo del sistema democrático representativo. Este régimen, que se inauguró con la presidencia de Rómulo Betancourt, continuó con el mismo desarrollo económico que se venía arrastrando desde la entronización del rey petróleo en la economía, modelo de desarrollo que se caracterizó por ser dispensador de privilegios para las minorías, dependiente de capital, tecnología e insumos externos y moderador de los conflictos sociales a través de un Estado burocratizado y aquejado de gigantismo e ineficiencia, monopolizado por los dos grandes partidos de orientación democrático burguesa, AD y COPEI.

Arturo Uslar Pietri califica a esta incapacidad del sistema como el “contramilagro venezolano”, señalando que Venezuela es un país que ha recibido cantidades inmensas de dinero a través de una actividad no

productiva, como son los ingresos fiscales derivados de la explotación petrolera, lo que ha provocado que el venezolano espere todo sin trabajar y dilapide cuantiosos recursos. En una entrevista declaró el ameritado intelectual: “No nos hemos ingeniado para crear de la miseria y de la ruina riqueza y alcanzar un nivel alto de situación económica. Sino que nos hemos ingeniado para de la riqueza crear miseria.”¹⁵⁰

A partir de la crisis económica desatada en 1982 se revelaron con toda su crudeza los límites históricos de este modelo de desarrollo, con el resultado de que empezaran a cuestionarse diversos sectores sociales los logros de la democracia, no en el sentido de ignorar sus innegables legados de libertad y derecho a la discrepancia, sino en la consideración de que se ha quedado, en estos 25 años, en el puro ejercicio político del voto, sin haber alcanzado la democracia social y económica.

Respecto a la izquierda, ésta ha orientado sus críticas hacia el desgaste que los dos partidos principales han sufrido con el ejercicio del poder, condición que, sin embargo, no han sabido aprovechar para elevar sus porcentajes de votación. Teodoro Petkoff, líder del MAS, expresaba el sentir de este sector ante esta situación:

Cómo hacer evidente que este país no puede seguir penduleando de COPEI a AD y de AD a COPEI cada cinco años, prisionero de ese cepo diabólico que es el mecanismo bipartidista y esa pragmatización del votante, que lo lleva a votar no a *favor* de una determinada opción ideológica o determinada concepción del mundo o del país, sino en *contra* de lo que entiende es el mal mayor en un momento dado.¹⁵¹

Por su parte, las fuerzas armadas, debidamente institucionalizadas y encuadradas dentro de la doctrina de la contrainsurgencia y la defensa del orden establecido, han sido un sector altamente favorecido por los regímenes democráticos, de los que han recibido una situación de privilegio. A pesar de lo anterior, también se han visto sacudidas por la crisis y los resultados concretos de un modelo de desarrollo que no llevó independencia y autonomía al país, sino todo lo contrario.

A pesar de ello, y aunque se escuche rumor de sables, mientras el sistema político pueda ser capaz de contener dentro de sus límites las contradicciones sociales es difícil que los militares venezolanos intervengan tomando el poder, ya que tienen el ejemplo de los países hermanos, donde se agravaron los problemas a partir de la instauración de gobiernos militares con el consiguiente costo social y político.

Ejemplo de la preocupación e inquietud que cunde entre los militares son las declaraciones emitidas por diferentes oficiales en retiro, los que se encuentran organizados en diversas agrupaciones —que planean convertir en partidos políticos— tales como ASOGENAL (Asociación de Generales y Almirantes) y CONFIN (Concentración Nacional de Fuerzas Independientes), donde participan conjuntamente uniformados y civiles “que no

creen en el merengón de la izquierda y están cansados del ping pong AD-COPEI”, como declaró uno de sus dirigentes.¹⁵²

En una entrevista efectuada por Jorge Olavarría, director de la revista *Resumen*, al general Arnaldo Castro Hurtado, ex-comandante general del ejército, éste declaró lo siguiente, que es una muestra del pensamiento de las altas jerarquías:

Si el país no obliga a los dirigentes de los dos grandes partidos nacionales a rectificar, a mirar hacia atrás y dentro de su organización, es probable que esta experiencia de este sistema democrático, que aún no ha podido ser implantado para disfrute de la totalidad de los venezolanos, se desmorone. Porque no se puede pensar que el país pueda seguir soportando que se le dirija desde grupos, grupos que no utilizan a la mayoría de los venezolanos, (...) y que están dilapidando también los recursos materiales que la naturaleza le ha dado a Venezuela.¹⁵³

Por su parte el ex-ministro de defensa, general (r) Martín García Villasmil, fue más lejos:

Las Fuerzas Armadas no podrán mantenerse durante mucho tiempo al margen del caos que vive el país (...). El problema que está planteado en este momento es de desconfianza, pero desconfianza en los dirigentes políticos, fundamentalmente. Luego, también sería necesario sancionar, y usar los elementos jurídicos, contra quienes son responsables por esta situación, desde el punto de vista moral.¹⁵⁴

Otra de las críticas esgrimidas contra la práctica de la democracia representativa es el sistema de “planchas”, que consiste en listas de diputados y concejales municipales por cada partido, el votante elige su sufragio por organización política, sin reconocer en muchas ocasiones a las personalidades que lo representarán. Como señala el anteriormente mencionado Olavarría:

El país parece estar prisionero de un sistema representativo que no lo representa. De un sistema representativo que carece de la vinculación entre elegidos y electores. Que carece de un mandato claro entre quienes tienen cargos, en los cuerpos deliberantes de la República y quienes teóricamente ellos representan.¹⁵⁵

Pompeyo Márquez, el legendario guerrillero de los sesenta, no deja de expresar su opinión ante esta falta de representatividad e inclusive de legitimidad de un sistema político restringido a las cúpulas de los partidos, que se traspan el poder cada cinco años y que gobiernan con mayor o menor fortuna al país.

Las democracias representativas son democracias que se remiten a un juego electoral (...). Cada cinco años las grandes masas populares escogen un determinado tipo de gobierno y luego hay que esperar cinco años más para que

las masas vuelvan a participar en el proceso político. Las grandes decisiones que tienen que ver con los destinos del país y del pueblo son adoptadas por pequeñas cúpulas dirigentes, de políticos, de tecnócratas, en convivencia y al servicio de estos grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.¹⁵⁶

Sin embargo, no se crea que el grupo gobernante ignora esta problemática; se da perfecta cuenta de que la democracia representativa si bien hay que abonarle el derecho a disentir, el respeto a las garantías individuales y colectivas consagradas constitucionalmente (no siempre efectivas, sobre todo en la década de los sesenta, cuando se enfrentó el gobierno al desafío guerrillero) presenta, por otro lado, en su ejercicio del poder serias fallas.

Prueba de esta lucidez y de las dificultades con que se tropiezan, desde las esferas gubernamentales, para romper la inercia de lo establecido son las siguientes palabras del ex-presidente de la República Luis Herrera Campíns, en ocasión del discurso conmemorativo de la Independencia y del Día del Ejército, el 5 de julio de 1983, cuando advirtió la necesidad de encontrar caminos adecuados para acceder a una sociedad más justa e igualitaria, con un llamado a deponer en favor de ésta las querellas políticas que entorpecían alcanzar este logro y que podían precipitar al país a serias convulsiones que pondrían en entredicho su destino de nación soberana.

Todavía no hemos logrado diseñar a cabalidad un modelo de desarrollo ajustado a nuestras peculiaridades nacionales. Todo proyecto nacional tropieza con dos formidables obstáculos que tocará despejar a quienes tengan la responsabilidad de conducir hacia la conquista del porvenir. El primero consiste en que, por mejor diseñado que esté, si no se encuentra y elabora una fórmula que permita su implementación por quien resulte vencedor en los comicios, la gente dudará de la efectividad del sistema y podría caer en la frustración, si las combinaciones de las tendencias derrotadas impiden darle cumplimiento cabal a los programas. El segundo, está relacionado y condicionado por la coyuntura, a tal punto que las urgencias de las situaciones de emergencias nacionales o internacionales, tienden en numerosas ocasiones a caer en el inmediateísmo, casi como en una política de supervivencia, en la que los hechos privan sobre los programas, las intenciones y los propósitos.¹⁵⁷

NOTAS

- ¹ Domingo F. Maza Zavala, "Historia de medio siglo en Venezuela: 1926-1975", en : *América Latina: historia de medio siglo*, México, Siglo XXI, UNAM, 1977, vol. 1. p. 473.
- ² Federico Brito Figueroa, *Venezuela siglo XX*, La Habana, Casa de las Américas, 1967, p. 116.
- ³ *Ibid.*, p. 120.
- ⁴ Harvey O'Connor, *La crisis mundial del petróleo*, Buenos Aires, Platina, 1963, p. 145.
- ⁵ Domingo F. Maza Zavala, *op. cit.*, p. 473.
- ⁶ *Ibid.*, p. 480-481.
- ⁷ *Ibid.*, p. 474.
- ⁸ Harvey O'Connor, *op. cit.*, p. 148.
- ⁹ *Ibid.*, p. 108.
- ¹⁰ Domingo F. Maza Zavala, *op. cit.*, p. 483.
- ¹¹ Gumersindo Martínez Amengual, *Venezuela*, La Habana, Casa de las Américas, 1967, p. 7.
- ¹² Domingo F. Maza Zavala, *op. cit.*, p. 497-498.
- ¹³ Salvador de la Plaza, *La explotación extranjera del petróleo y el desarrollo nacional*, Caracas, Imprenta Universitaria (separata de la revista *Cultura Universitaria*, núm. 91), 1966, p. 36.
- ¹⁴ Ramón V. Velásquez, *et. al.*, *Betancourt en la historia de Venezuela del siglo XX*, Caracas, Ediciones Centauro, 1980, p. 35.
- ¹⁵ Luis Cordero Velázquez, *Betancourt y la conjura militar del 45*, Caracas, Lumevec, 1978, p. 195 (Col. Historia Contemporánea de Venezuela).
- ¹⁶ Domingo F. Maza Zavala, *op. cit.*, p. 506.
- ¹⁷ Rómulo Betancourt, *Venezuela: política y petróleo*, México, FCE, 1956, p. 234 (Sec. Obras de Política).
- ¹⁸ *Ibid.*, p. 234.
- ¹⁹ *Loc. cit.*
- ²⁰ Federico Brito Figueroa, *op. cit.*, p. 122.
- ²¹ Gumersindo Martínez Amengual, *op. cit.*, p. 21.
- ²² Rómulo Betancourt, *op. cit.*, p. 198.
- ²³ Antonio Arellano Moreno, *Breve historia de Venezuela (1492-1958)*, Caracas, Italgáfica, 1974, p. 468.
- ²⁴ Rómulo Betancourt, *op. cit.*, p. 265.
- ²⁵ *Ibid.*, p. 298.
- ²⁶ Domingo F. Maza Zavala, *op. cit.*, p. 509.
- ²⁷ Rómulo Betancourt, *op. cit.*, p. 222.
- ²⁸ *Ibid.*, p. 226.
- ²⁹ *Ibid.*, p. 262.
- ³⁰ *Ibid.*, p. 243.
- ³¹ Federico Brito Figueroa, *op. cit.*, p. 131.
- ³² Domingo F. Maza Zavala, *Los mecanismos de la dependencia*, Caracas, Fondo Editorial Salvador de la Plaza Rocinante, 1973, p. 83.
- ³³ Salvador de la Plaza, *op. cit.*, p. 26.

³⁴ Manuel A. Suzzarini Baloa, *Proyectos de modernización en América Latina: Víctor Raúl Haya de la Torre, Jorge Eliecer Gaytán y Rómulo Betancourt*, México, UNAM, p. 154 (tesis de maestría en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras).

³⁵ Rómulo Betancourt, *op. cit.*, p. 314.

³⁶ José Agustín Catalá (ed.), *Venezuela bajo el signo de terror. Libro Negro 1952*, Caracas, José Agustín Catalá (ed.), 1974, p. 15.

³⁷ Rómulo Betancourt, *op. cit.*, p. 381.

³⁸ *Ibid.*, p. 375.

³⁹ Robert J. Alexander, *La revolución democrática de Venezuela*, Medellín, Ediciones Albon-Interprint, 1967, p. 49.

⁴⁰ Rodolfo Quintero, *Sindicalismo y cambio social en Venezuela*, Caracas, UCV, 1966, p. 66 (edición especial del *Boletín bibliográfico* de la Facultad de Economía).

⁴¹ Citado en: Ladislao Tárnai, *El nuevo ideal nacional de Venezuela. Vida y obra de Marcos Pérez Jiménez*, Madrid, Ediciones Verdad, 1954, p. 132.

⁴² Rómulo Betancourt, *op. cit.*, p. 220.

⁴³ Pedro Esteban Mejía Alarcón, *La industria del petróleo en Venezuela*, Caracas, UCV, 1972, p. 119.

⁴⁴ Marcos Pérez Jiménez: *diez años de desarrollo*, Caracas, Italgráfica, 1973, p. 147 (estudio a cargo de Equipos juveniles perezjimenistas y desarrollistas).

⁴⁵ Domingo Alberto Rangel, *Venezuela, país ocupado*, La Paz, Juventud, 1955, p. 38.

⁴⁶ Banco Central de Venezuela, *Síntesis de la economía venezolana, 1961-67*, Caracas, 1968, p. 11.

⁴⁷ Domingo F. Maza Zavala, "Historia de medio siglo...", p. 517.

⁴⁸ Marcos Pérez Jiménez: *diez años de...*, p. 106-107.

⁴⁹ Domingo F. Maza Zavala, "Historia de medio...", p. 515.

⁵⁰ Federico Brito Figueroa, *op. cit.*, p. 255.

⁵¹ José Agustín Silva Michelena, *Crisis de la democracia*, Caracas, UCV. Centro de Estudios del Desarrollo, 1970, p. 110; Arturo Sosa, *Democracia y dictadura en la Venezuela del siglo XX*, Caracas, Centro Gumilla, 1979, p. 20 (Curso de información socio-política, núm. 5).

⁵² Domingo F. Maza Zavala, "Historia de medio...", p. 522.

⁵³ Federico Brito Figueroa, *op. cit.*, p. 225.

⁵⁴ Iván Pulido Mora y Rafael Durán, "Finanzas públicas de Venezuela en el siglo XX", en: *Resumen*, vol. xxv, núm. 312, Caracas, 28 octubre 1979, p. 38.

⁵⁵ José Agustín Silva Michelena, *op. cit.*, p. 109.

⁵⁶ Ministerio de Relaciones Exteriores, *Venezuela*, Caracas, 1956, p. 270.

⁵⁷ Vicente Manuel Magallanes, *Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana*, Caracas, Monte Avila, 1977, p. 376.

⁵⁸ Germán Carrera Damas, *Historia contemporánea de Venezuela. Bases metodológicas*, Caracas, UCV, 1979, p. 203 (Ediciones de la Biblioteca).

⁵⁹ Franklin Tugwell, *La política del petróleo en Venezuela*, Caracas, Monte Avila, 1977, p. 125 (Col. Letra Viva).

⁶⁰ *Ibid.*, p. 123.

⁶¹ Federico Brito Figueroa, *Historia económica y social de Venezuela*, Caracas, UCV, 1978, p. 730 (Ediciones de la Biblioteca).

⁶² *Ibid.*, p. 730.

⁶³ *Ibid.*, p. 732.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 740.

⁶⁵ *Información básica de México y Venezuela*, México, Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Integración Latinoamericana, 1970, p. 14.

⁶⁶ *Loc. cit.*

⁶⁷ *Ibid.*, p. 7.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 10.

⁶⁹ *Loc. cit.*

⁷⁰ *Ibid.*, p. 11.

- ⁷¹ *Ibid.*, p. 21.
- ⁷² *Ibid.*, p. 51.
- ⁷³ *Venezuela, síntesis económica y financiera*, núm. 2, Buenos Aires, Oficina de Estudios para la Colaboración Económica Internacional, 1970, p. 132.
- ⁷⁴ *Ibid.*, p. 101.
- ⁷⁵ *Ibid.*, p. 107.
- ⁷⁶ *Información básica...*, p. 7.
- ⁷⁷ *Ibid.*, p. 8.
- ⁷⁸ *Venezuela, síntesis económica...*, p. 23.
- ⁷⁹ *Ibid.*, p. 24-25.
- ⁸⁰ *Información básica de México y...*, p. 8.
- ⁸¹ *Programa electoral de COPEI, 1969-1974*, p. 5.
- ⁸² Franklin Tugwell, *op. cit.*, p. 150.
- ⁸³ *Ibid.*, p. 153.
- ⁸⁴ *Ibid.*, p. 167.
- ⁸⁵ Federico Brito Figueroa, *Historia económica y...*, p. 788.
- ⁸⁶ Germán Carrera Damas, *op. cit.*, p. 204-205.
- ⁸⁷ Franklin Tugwell, *op. cit.*, p. 220.
- ⁸⁸ *Ibid.*, p. 225.
- ⁸⁹ *Resumen*, vol. XLI, núm. 518, Caracas, 9 octubre 1983, p. 27.
- ⁹⁰ Ramón J. Velásquez, "Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo", en: *Venezuela moderna. Medio siglo de historia. 1926-1976*, Barcelona, Fundación Eugenio Mendoza-Ariel, 1979, p. 405.
- ⁹¹ *Ibid.*, p. 414.
- ⁹² *Ibid.*, p. 417.
- ⁹³ Equipo Proceso Político, *Carlos Andrés Pérez. 5 años. Un juicio crítico*, prólogo de Luis Lander, Caracas, Ateneo de Caracas, 1978, p. 53.
- ⁹⁴ *Ibid.*, p. 50.
- ⁹⁵ *Ibid.*, p. 43.
- ⁹⁶ *Ibid.*, p. 45.
- ⁹⁷ *Loc. cit.*
- ⁹⁸ *Informe de la XXXII Asamblea Anual de FEDECAMARAS*, Puerto La Cruz, 16-22 de mayo de 1976, cit. en p. 58.
- ⁹⁹ *Ibid.*, p. 47.
- ¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 80.
- ¹⁰¹ *Nacionalización del hierro en Venezuela*, prólogo Argenis Gamboa, Caracas, Ediciones Centauro, 1975, p. 18.
- ¹⁰² Citado en Allean R. Brewer Carías, "Aspectos administrativos de la industria petrolera nacionalizada en Venezuela", en: Marcos Kaplan (coord.), *Petróleo y desarrollo en México y Venezuela*, México, UNAM-Nueva Imagen, 1981, p. 335.
- ¹⁰³ *Ibid.*, p. 345.
- ¹⁰⁴ James F. Petras y Morris H. Morley, "El 'modelo' venezolano de desarrollo y la política norteamericana", en: *Problemas del Desarrollo*, Revista Latinoamericana de Economía, México, UNAM, 1976, p. 85.
- ¹⁰⁵ Eduardo Novoa Monreal, "Características jurídicas y antecedentes políticos de la nacionalización venezolana del petróleo", en: Marcos Kaplan (coord.), *op. cit.*, p. 331.
- ¹⁰⁶ Citado en: Equipo Proceso Político, *op. cit.*, p. 21.
- ¹⁰⁷ *Nacionalización del hierro en...*, p. 134.
- ¹⁰⁸ Domingo F. Maza Zavala y Héctor Malavé Mata, "Aspectos económicos y políticos de la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela", en: *Petróleo y desarrollo...*, p. 157.
- ¹⁰⁹ Francisco Mieres, "El papel del petróleo venezolano en la perspectiva de la crisis energética", en: *Ibid.*, p. 242.
- ¹¹⁰ Héctor Malavé Mata, "Venezuela: la economía en el periodo 1974-1980", en: *Comercio Exterior*, vol. 32, núm. 1, México, enero 1982, p. 101.

- ¹¹¹Luis Vallenilla, *Petróleo venezolano. Auge, declinación y porvenir*, Caracas, Monte Avila, 1975, p. 339.
- ¹¹²*Resumen*, vol. XLI, núm. 518, Caracas, 9 de octubre de 1983, p. 27.
- ¹¹³Citado en: Ramón J. Velásquez, *Venezuela moderna...*, p. 423.
- ¹¹⁴*Ibid.*, p. 770.
- ¹¹⁵Francisco Mieres, "El papel del petróleo...", p. 243.
- ¹¹⁶Germán Carrera Damas, *op. cit.*, p. 213.
- ¹¹⁷Domingo F. Maza Zavala y Héctor Malavé Mata, *Venezuela: dominación y disidencia*, México, Nuestro Tiempo, 1980, p. 45.
- ¹¹⁸*Resumen*, vol. XL, núm. 508, Caracas, 31 de julio de 1983, p. 20.
- ¹¹⁹*Resumen*, vol. XXXIX, núm. 503, Caracas, 26 de junio de 1983, p. 41.
- ¹²⁰*Unomásuno*, México, 2 de marzo de 1983.
- ¹²¹Héctor Malavé Mata, "Venezuela: la economía en el periodo...", p. 99.
- ¹²²*Resumen*, vol. XXXVI, núm. 458, Caracas, 15 de agosto de 1982, p. 28.
- ¹²³*El Nacional*, A-4, Caracas, 26 de noviembre de 1983.
- ¹²⁴*Resumen*, vol. XXXII, núm. 403, Caracas, 26 de julio de 1981, p. 37.
- ¹²⁵*Resumen*, núm. 458, Caracas, 15 de agosto de 1982, p. 25.
- ¹²⁶*Resumen*, vol. XLI, núm. 518, Caracas, 9 de octubre de 1983, p. 27.
- ¹²⁷Héctor Malavé Mata, "La crisis petrolera internacional y su incidencia en América Latina", en: *Comercio Exterior*, vol. XXXII, núm. 8, México, agosto de 1982, p. 872.
- ¹²⁸Entrevista a Domingo Alberto Rangel, "Se derrumba el bolívar petrolero", en: *Bohemia*, núm. 1052, Caracas, 25 al 31 de julio de 1983, p. 20.
- ¹²⁹*Unomásuno*, México, 17 de agosto de 1983.
- ¹³⁰*Unomásuno*, México, 1º de junio de 1984.
- ¹³¹*Resumen*, núm. 508, Caracas, 31 de julio de 1983, p. 20.
- ¹³²*Ibid.*, p. 21.
- ¹³³*Loc. cit.*
- ¹³⁴*Resumen*, núm. 508, Caracas, 31 de julio de 1983, p. 23.
- ¹³⁵*Ibid.*, p. 28.
- ¹³⁶*Unomásuno*, México, 10 de octubre de 1983.
- ¹³⁷*Resumen*, núm. 518, Caracas, 9 de octubre de 1983, p. 15.
- ¹³⁸*Resumen*, núm. 508, Caracas, 31 de julio de 1983, p. 7.
- ¹³⁹*Ibid.*, p. 3.
- ¹⁴⁰*Unomásuno*, México, 1º de diciembre de 1983.
- ¹⁴¹*Resumen*, núm. 466, Caracas, p. 32.
- ¹⁴²*El Nacional*, Caracas, 26 de noviembre de 1983, p. 9.
- ¹⁴³*Resumen*, núm. 508, Caracas, 31 de julio de 1983, p. 41.
- ¹⁴⁴*El Nacional*, A-3, Caracas, 23 de noviembre de 1983.
- ¹⁴⁵*Zeta*, año VIII, núm. 481, Caracas, 24 de julio de 1983, p. 23.
- ¹⁴⁶*Bohemia*, núm. 1039, Caracas, 25 de abril-1º de mayo de 1983, p. 32.
- ¹⁴⁷*Ibid.*, p. 33-34.
- ¹⁴⁸*Ibid.*, p. 32.
- ¹⁴⁹Iván Pulido Mora, "Desenmascarando la economía de 1983", en: *Resumen*, vol. XXXVII, núm. 468, Caracas, 24 de octubre de 1982, p. 29.
- ¹⁵⁰*Resumen*, núm. 458, Caracas, 15 de agosto de 1982, p. 36.
- ¹⁵¹*Resumen*, vol. XXXII, núm. 402, Caracas, 19 de julio de 1981, p. 7.
- ¹⁵²*Ibid.*, p. 42.
- ¹⁵³*Ibid.*, p. 34-35.
- ¹⁵⁴*Resumen*, vol. XXXIX, núm. 492, Caracas, 10 de abril de 1983, p. 12.
- ¹⁵⁵*Resumen*, núm. 458, Caracas, 15 de agosto de 1982, p. 37.
- ¹⁵⁶*Cuadernos del Tercer Mundo*, núm. 36, México, feb-mar. de 1980, p. 50.
- ¹⁵⁷*Resumen*, núm. 508, Caracas, 31 de julio de 1983, p. 3.

CUADRO 1
AGRUPACIONES SINDICALES

Años	Sindicatos legalizados	Sindicatos cancelados	Sindicatos existentes	Índice de crecimiento 1936-100
1936	113	---	113	100
1944	94	102	175	151.33
1945	103	22	252	223.01
1946	531	10	773	684.07
1947	184	7	950	840.71
1948	64	---	1014	897.35

FUENTE: Rómulo Betancourt, *Venezuela, Política y Petróleo*, México, FCE, 1956, p. 300 (sec. obras de Política)

CUADRO 2

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES ECONÓMICOS. PROMEDIO 1950-1958
(MILLONES DE BOLÍVARES A PRECIOS DE 1957)

Sectores económicos	Total	Inversión del gobierno	% del total
Agricultura	491	295	54
Minería y petróleo	1 210	1	-
Industria	427	204	48
Electricidad	135	50	37
Transporte y comunicaciones	650	610	94
Gobierno, comercio, servicio y vivienda	1 993	1 114	56
T o t a l	4 906	2 274	46%

FUENTE: BIRF, *El desarrollo económico de Venezuela*, Caracas, Imprenta Nacional de Venezuela, p. 587.

CUADRO 3
POBLACIÓN URBANA Y RURAL
(miles de habitantes y porcentajes)

Años	Total	Urbana	%	Rural	%
1936	3 364	1 168	34.7	2 196	65.3
1941	3 850	1 516	39.4	2 334	60.6
1950	5 034	2 709	53.8	2 325	46.2
1961	7 523	5 073	67.4	2 450	32.6
1971	10 721	8 276	77.2	2 445	22.8

FUENTE: Carlos Rafael Silva, "Bosquejo histórico del desenvolvimiento de la economía venezolana en el siglo XX", en: *Venezuela moderna. Medio siglo de historia 1926-1976*, Barcelona, Ariel, 1979, p. 798.

CUADRO 4
RESUMEN DE LA SITUACIÓN FISCAL
(millones de bolívares)

Años	Ingresos fiscales	Egresos fiscales	Superávit o (-) déficit efectivo
1900	44	37	7
1910	69	61	8
1920	81	102	-21
1930	210	260	-50
1940	329	369	-40
1950	1 917	2 074	-157
1960	6 147	6 147	-
1970	10 252	10 295	-43
1975	41 000	40 370	630
1976	43 100	39 468	3 672

FUENTE: Las cifras correspondientes al periodo 1900-1930 se refieren a los años fiscales 1900-1901, 1920-1921 y 1930-31. Banco Central de Venezuela, *La economía venezolana en los últimos treinta años*, Caracas, Italgráfica, 1971 (col. xxv aniversario) e *Informes económicos*.

CUADRO 5

MOVIMIENTO INFLACIONARIO EN VENEZUELA

Años	Producto territorial bruto (variación relativa) %	Liquidez monetaria (variación relativa) %
1974	-	-
1975	5.9	47.6
1976	8.4	23.6
1977	6.8	24.1
1978	3.2	15.2
1979	0.8	14.8
1980	-1.2	23.4

ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR

Años	Índice general	Productos nacionales	Productos importados	Índice del costo de la vida en Caracas (1968-100)
1974	137.5	133.9	142.8	125.7
1975	156.3	153.0	161.1	138.5
1976	167.5	165.3	170.9	149.1
1977	184.9	185.8	183.5	160.7
1978	198.5	199.8	196.5	172.2
1979	216.8	220.6	211.4	193.4
1980	260.3	271.2	244.3	235.1

FUENTE: Banco Central de Venezuela, *Informe económico 1979 e Informe Económico 1980*, citado por Héctor Malavé Mata, "Venezuela: la economía en el periodo 1974-1980", en: *Comercio Exterior*, vol. xxxii, núm. 7, México, enero de 1982, p. 103.

CUADRO 6
LAS IMPORTACIONES SEGÚN DESTINO
(porcentajes)

	<i>Crecimiento medio anual</i>			
	1974-1977	1977-1980		
Total	37.1	4.3		
Bienes de capital	50.5	- 6.2		
Bienes intermedios	29.9	7.2		
Bienes de consumo	48.5	16.1		

	<i>Composición</i>			
	1974	1977	1979	1980
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Bienes de capital	24.1	32.4	27.0	23.6
Bienes intermedios	66.9	56.8	59.1	61.1
Bienes de consumo	8.5	10.8	13.9	14.8

A precios corrientes

FUENTE: Banco Central de Venezuela, *Informes económicos* de 1977, 1978 1979 y 1980, citado por Sergio Bitar y Eduardo Troncoso, "Petróleo e industrialización. La experiencia venezolana, 1973-1980", en: *Comercio Exterior*, vol. XXXII, núm. 11, México, noviembre de 1982, p. 1214.

CUADRO 7
BALANZA COMERCIAL DE MANUFACTURAS
(millones de bolívares corrientes)

	1968	1973	1977	1978	1979
Importación	5 813	9 654	38 527	10 923	37 918
Exportación	266	454	904	945	1 966
Déficit comercial	5 547	9 200	37 623	39 978	35 952

FUENTE: Estimaciones de Cordiplan, Dirección de Planificación Industrial, *Documentos internos*, citado en: *Ibid*, p. 121.

CUADRO 8

INDICADORES DE LA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO*
(porcentajes)

	1970-73	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Exportación de hidrocarburos respecto de la exportación Total	91.8	95.3	94.6	94.2	95.4	95.1	96.3	94.7
Producto de hidrocarburos respecto del PTB	21.7	39.7	29.1	27.0	24.7	20.6	26.8	28.5
Aporte del sector petrolero								
a) al ingreso fiscal ordinario	66.9	86.1	78.1	74.2	73.5	63.7	69.9	73.1
b) al ingreso fiscal total	64.3	85.6	77.9	65.5	58.1	50.5	69.8	64.1

* Incluye petróleo crudo, gas natural y refinación de petróleo

FUENTE: Banco Central de Venezuela, *Informe económico 1979 en Informe económico 1980*, cuadros A-IV-2, A-IV-21 y A-V-13, citado en Sergio Bitar y Eduardo Troncoso, "Petróleo e industrialización. La experiencia venezolana, 1973-1980", en: *Comercio Exterior*, vol. XXXII, núm. 11, México, noviembre de 1982, p. 1220.

CUADRO 9

ELECCIONES PRESIDENCIALES. DICIEMBRE 1978

	Votos	Porcentaje
Luis Herrera Campíns (COPEI)	2 469 042	46.63
Luis Pinerúa (AD)	2 295 052	43.34
José Vicente Rangel (MAS)	272 595	5.14
Diego Arria (Causa Común)	90 379	1.70
Luis Beltrán Prieto (MEP)	58 723	1.10
América Martín (MIR)	51 972	1.10
Héctor Mújica (PC)	28 835	0.54

CONGRESO

	Senadores	Diputados
AD	21	86
COPEI	21	86
MAS	0	7
MIR	0	1
MIN	0	1
MEP	0	1
Causa Común	0	1

VOTOS PARA EL CONGRESO

	Votos válidos	Porcentaje
COPEI	2 086 579	39.72
AD	2 085 409	39.70
MAS	319 730	6.08

FUENTE: Agustín Castagno, "La derrota de AD", en: *Cuadernos del Tercer Mundo*, año III, núm. 26, México, enero 1979, p. 61-62.

BIBLIOGRAFÍA

- ALEXANDER, J. Robert, *La revolución democrática de Venezuela*, Medellín, Albón-Interprint, 1967.
- ARAUJO, Orlando, *Venezuela Violenta*, Caracas, Ediciones Espérides, 1968.
- ARELLANO MORENO, Antonio, *Breve historia de Venezuela (1492-1958)*, Caracas, Italgráfica, 1974.
- Así progresa un pueblo: diez años en la vida de Venezuela*, Caracas, Mendoza y Mendoza, 1956.
- BANCO CENTRAL de VENEZUELA, *La economía venezolana en los últimos treinta años*, Caracas, Italgráfica, 1971 (Col. XXV Aniversario).
- , *Síntesis de la economía venezolana 1961-67*, Caracas, 1968.
- BETANCOURT, Rómulo, *Venezuela: política y petróleo*, México, FCE, 1956 (Sec. Obras de Política).
- , *Tres años de gobierno democrático*, 2 tomos, Caracas, Imprenta Nacional, 1962.
- BIRF, *El desarrollo económico de Venezuela*, Caracas, Imprenta Nacional de Venezuela.
- BITAR, Sergio y Eduardo TRONCOSO, "Petróleo e industrialización. La experiencia venezolana 1973-1980", en: *Comercio Exterior*, vol. XXXII, núm. 11, México, noviembre de 1982, p. 1214.
- BRITO FIGUEROA, Federico, *Historia económica y social de Venezuela*, Caracas, UCV, 1978 (Ediciones de la Biblioteca).
- , *Venezuela siglo XX*, La Habana, Casa de las Américas, 1967.
- CALDERA, Rafael, *Habla el presidente*, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1970.
- CARRERA DAMAS, Germán, *Historia contemporánea de Venezuela. Bases metodológicas*, Caracas, UCV, 1979 (Ediciones de la Biblioteca).
- CATALÁ, José Agustín (ed.), *Venezuela bajo el signo del terror. Libro negro*, 1952, Caracas, Avilarte, 1974 (facsimilar).
- CÓRDOVA, Armando, *Inversiones extranjeras y subdesarrollo*, Caracas, UCV, 1973.
- Documentos oficiales relativos al movimiento militar del 24 de noviembre de 1948*, Caracas, Oficina Nacional de Información y Publicaciones, 1949.
- Equipo Procesos Políticos, *Carlos Andrés Pérez, 5 años. Un juicio crítico*, prólogo de Luis Lander, Caracas, Ateneo de Caracas, 1978.
- ESCOVAR SALOM, Ramón, *Evolución política de Venezuela*, Caracas, Monte Avila, 1972.
- FALCÓN URBANO, Miguel, *Desarrollo e industrialización de Venezuela. Un enfoque metodológico*, Caracas, UCV, 1969.
- FUENMAYOR, Juan BAUTISTA, *Historia de la Venezuela política contemporánea. 1899-1969*, 2 tomos, Caracas, s/e, 1975.

- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo (coord.), *América Latina: Historia de medio siglo*, México, siglo XXI-UNAM, 1977.
- IRAZÁBAL, Carlos, *Hacia la democracia*, Caracas, Pensamiento Vivo, 1961.
- Información básica de México y Venezuela*, México, Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Integración Latinoamericana, 1970.
- KAPLAN, Marcos (coord.), *Petróleo y desarrollo en México y Venezuela*, UNAM-Nueva Imagen, 1981.
- LEONI, Raúl, *Documentos presidenciales*, 2 tomos, Caracas, Oficina Central de Información.
- LIEWEN, Edwin, *Petroleum in Venezuela: a history*, Berkeley, University of California Press, 1954.
- LOSADA ALDANA, Ramón, *Dialéctica del subdesarrollo*, Caracas, UCV, 1967.
- LUZARDO, Rodolfo, *Notas histórico-económicas 1928-1963*, Caracas, Sucre, 1963.
- MAGALLANES, Vicente Manuel, *Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana*, Caracas, Monte Avila, 1977.
- MALAVÉ MATA, Héctor, "La crisis petrolera internacional y su incidencia en América Latina", en: *Comercio Exterior*, vol. XXXII, núm. 8, México, agosto de 1982.
- , *Formación histórica del antidesarrollo de Venezuela*, La Habana, Casa de las Américas, 1974.
- , *Petróleo y desarrollo económico de Venezuela*, Caracas, UCV, 1962.
- , "Venezuela: la economía en el periodo 1974-1980", en: *Comercio Exterior*, vol. XXXII núm. 7, México, enero de 1982.
- Marcos Pérez Jiménez: diez años de desarrollo, Caracas, Italgráfica, 1973 (estudio a cargo de Equipos juveniles perezjimenistas y desarrollistas).
- MARTÍNEZ AMENGUAL, Gumersindo, *Venezuela*, La Habana, Casa de las Américas, 1967.
- MAZA ZAVALA, Domingo F., *Los mecanismos de la dependencia*, Caracas, Fondo Editorial Salvador de la Plaza-Rocinante, 1973.
- , *Venezuela: Una economía dependiente*, Caracas, UCV, 1964.
- , et. al., *Venezuela, crecimiento sin desarrollo*, México, Nuestro Tiempo, 1974
- , y Héctor Malavé Mata, *Venezuela. Dominación y disidencia*, México, Nuestro Tiempo, 1980.
- MEDINA ANGARITA, Isaías, *Cuatro años de democracia*, Caracas, Pensamiento Vivo, 1963.
- MEJÍA ALARCÓN, Pedro, *La industria del petróleo en Venezuela*, Caracas, UCV, 1972.
- MIERES, Francisco, *El petróleo y la problemática estructural venezolana*, Caracas, UCV.
- Ministerio de Relaciones Exteriores, *Venezuela*, Caracas, 1956.
- MORÓN Guillermo, *A history of Venezuela*, New York, Roy, 1963.
- Nacionalización del Hierro en Venezuela*. 1975, prólogo de Argenis Gamboa, Caracas, Centauro, 1975.
- O'CONNOR, Harvey, *La crisis mundial del petróleo*, Buenos Aires, Platina, 1963.
- , *El imperio del petróleo*, La Habana, Imprenta Nacional de Cuba, 1961.
- PÉREZ, Carlos Andrés, *Manos a la obra*, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1975.
- PÉREZ ALFONSO, Juan Pablo, *La dinámica del petróleo en el progreso de Venezuela*, Caracas, UCV, 1965.

- , *El pentágono petrolero*, Caracas, Revista Política, 1967.
- , *Petróleo jugo de la tierra*, Caracas, Ediciones del Arte, 1961.
- , *Petróleo y dependencia*, Caracas, Síntesis Dos Mil, 1971.
- , *Política petrolera*, Caracas, Imprenta Nacional, 1962.
- , *Venezuela y su petróleo*, Caracas, Imprenta Nacional, 1962.
- PETRAS, James F. y MORRIS H. Morley, “El ‘modelo’ venezolano de desarrollo y la política norteamericana”, en: *Problemas del Desarrollo*, Revista Latinoamericana de Economía, México, UNAM, 1976.
- PLAZA, Helena, *El 23 de enero de 1958 y el proceso de consolidación de la democracia representativa en Venezuela*, Caracas, Garbizu & Todt Mann editores, 1978.
- PLAZA, Salvador de la, *Desarrollo económico e industrias básicas*, Caracas, UCV, 1962 (Ediciones de la Biblioteca).
- , *La explotación extranjera del petróleo y el desarrollo nacional*, Caracas, Imprenta Universitaria (separata de la revista *Cultura Universitaria*, núm. 91), 1966.
- , *La formación de las clases sociales en Venezuela*, Caracas, Rocinante, s/f.
- , *El petróleo en la vida venezolana*, Caracas, UCV, 1974.
- POCATERRA, José Rafael, *Memorias de un venezolano de la decadencia*, 4 vols., Madrid, EDIME, 1966.
- PULIDO MORA, Iván, “Desenmascarando la economía de 1983”, en: *Resumen*, vol. XXXVII, núm. 468, Caracas, 24 de octubre de 1982.
- , y Rafael Durán, “Finanzas públicas de Venezuela en el siglo XX”, en *Resumen*, vol. XXV, núm. 312, Caracas, 28 de octubre de 1979.
- QUINTERO, Rodolfo, *Antropología del petróleo*, México, Siglo XXI, 1972.
- , *Sindicalismo y cambio social en Venezuela*, Caracas, UCV, 1966 (edición especial del *Boletín Bibliográfico* de la Facultad de Economía).
- RANGEL, Domingo Alberto, *Los andinos en el poder. Balance de la historia contemporánea. 1899-1945*, Caracas, Vadel Hermanos, 1974.
- , *Capital y desarrollo*, vol I y II, Caracas, UCV, 1969-70; vol. III, Caracas, Fuentes, 1972.
- , *El proceso del capitalismo contemporáneo en Venezuela*, Caracas, UCV, 1968.
- , *Venezuela, país ocupado*, La Paz, Juventud, 1955.
- RIVAS RIVAS, José, *Historia gráfica de Venezuela* (varios volúmenes), Caracas, Centro Editor, 1977.
- SALCEDO BASTARDO, José Luis, *Historia fundamental de Venezuela*, Caracas, UCV, 1975.
- , *et. al.*, 1958, *Tránsito de la dictadura a la democracia en Venezuela*, Caracas, Ariel, 1978.

LA ECONOMÍA ANTILLANA DE POSGUERRA (1945-1983): UNA INTERPRETACIÓN

JUAN MANUEL de la SERNA H.
CCYDEL-UNAM

Introducción

Este breve ensayo trata de ofrecer una visión panorámica de lo sucedido en la subregión antillana¹ en los últimos treinta y ocho años. La empresa presenta varios retos difíciles de salvar, aunque no infranqueables. El primero de ellos se debe a la diversidad de procedencias hegemónicas de las que se deriva cada una de las islas de la sub-región, además de que cada una de ellas tiene peculiaridades que la diferencian, muchas veces, de su vecina más cercana. El otro problema es más bien de carácter histórico, pues se trata de periodizar, con base en el desarrollo económico, las diferentes fases por las que atraviesa la sub-región y, a la vez, cada una de las economías locales. Las páginas que siguen son un intento de resolver estas dificultades.

Además de los problemas metodológicos que se derivan del análisis de estas economías, estudiar su muy peculiar formación económica seminal es interesante y aleccionador pues, a diferencia de lo que acontece en el resto de América Latina, su temprana vinculación con el sistema mercantilista-capitalista les dio características estructurales que aún perduran.

Las potencias colonialistas hegemónicas que estuvieron presentes en la sub-región desde principios del siglo XVI además de la española, que aquí no tocaremos, fueron Inglaterra, Francia y Holanda entre quienes se dio un intercambio en el control de sus colonias varias veces. En otras ocasiones, estos países coparticiparon en el control de una isla pero, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, la distribución se definió para permanecer intacta hasta el término de la segunda Guerra Mundial, etapa en que el proceso de descolonización se encargó de fragmentar la vieja unidad colonial creando los nuevos estados nacionales en unos casos y en otros, el fenómeno del neocolonialismo.

Teniendo en cuenta que lo que aquí interesa destacar es el periodo de posguerra, el camino seguido para lograr una visión de conjunto es como sigue: I) Periodización y antecedentes históricos; II) Periodo posbélico, la Federación y la descolonización; III) Composición económica y análisis de

casos. Esta sección se subdivide en a) Antillas Mayores británicas, b) Antillas menores británicas, c) Antillas francesas, d) Antillas holandesas, y IV) Modelos de desarrollo e integración regional, con un breve apartado que analiza el carácter de la intervención norteamericana contemporánea en la zona.

I. Periodización y antecedentes históricos

El descubrimiento, colonización y conquista del Caribe colocó a la región en una senda original basada en la plantación azucarera. Apoyándose en este complejo económico-social, se organizó una sociedad estructurada alrededor del sistema esclavista que actuaba como motor de una economía que, por sus características de vinculación con el mercado internacional de la época, se estancó en la monoproducción, acentuando el retraso técnico y social típico de esta clase de formaciones económico-sociales.

A partir de este momento y hasta mediados del siglo XIX, las características mencionadas son el marco de referencia general que corresponde a casi todas las Antillas, exceptuando sólo a aquellas que, bajo el dominio holandés, limitaban su actividad económica al comercio, y las de origen hispánico, que enfrascadas en la labor hacendaria y ganadera se vinculaban, sólo en forma subsidiaria, al gran mercado capitalista de la época promovido por Inglaterra, Francia y Holanda.

La política librecambista británica de principios del siglo XIX destruyó una de las fuentes que habían servido de motor para la acumulación de capital para la metrópoli. Al dictar la emancipación de los esclavos en 1838 e igualar los aranceles azucareros, ocho años más tarde, la Gran Bretaña condenó a sus colonias de las Indias Occidentales a un periodo de *autorreproducción y dependencia* creando una masa de campesinos libres sin trabajo. Los efectos colaterales de estas medidas afectaron a toda la región antillana permitiendo, por ejemplo, el surgimiento de Cuba como potencia azucarera y provocando una serie de movimietos sociales de protesta que buscaban, más que nada, la reactivación económica. En este sentido, las Antillas francesas fueron tal vez las menos afectadas, ya que su ordenamiento constitucional había permitido el surgimiento de una pequeña burguesía propietaria de color, que mantenía fuertes lazos comerciales con su metrópoli.

De cualquier manera, el abandono metropolitano de las colonias hundió a éstas en una especie de sopor económico debido a la falta de capitales que se interesaran en promover el resurgimiento de la industria azucarera y, por otro lado, el casi inexistente capital local fue incapaz de promover acción alguna en este sentido. Así, al decaer la producción azucarera en cada uno de los países de la región, éstos se limitaron a sobrevivir siguiendo las bajas del mercado internacional, es decir, ocupando, siempre bajo la misma característica de monoproducción agrícola, el

escaso mercado de productos tropicales como el coco, el plátano, o el más reducido resquicio que dejaba el café.

No fue sino hasta la década de 1930-1940 cuando, motivados por cuestiones económicas, los campesinos de la región promovieron una serie de sublevaciones que se extendieron a otros sectores, para culminar con serios disturbios que abarcaron casi la totalidad de la región. Estas manifestaciones fueron más allá de la mera protesta social animada por las carencias económicas; también fueron suscitadas por la falta de reglamentos para las condiciones de trabajo, por los impedimentos políticos para la organización de los mismos trabajadores y, en general, por una indefinición frente a las autoridades locales y, a través de ellas, las coloniales, factores todos que avivaron los reclamos de la población local.

En los últimos años de esta década (1930-1940), la metrópoli comienza a mostrar un cierto interés por aliviar las tensiones de la subregión promoviendo, sobre todo, la visita de comisiones que se encargaran de valorar cada uno de los problemas locales; sin embargo, la creciente participación de las metrópolis europeas en los conflictos planteados por el fascismo en el viejo continente hizo que la vista metropolitana enfocara su atención hacia su ámbito más cercano. Y no fue entonces, sino hasta finalizada la segunda guerra mundial, cuando el tema de las colonias antillanas volvió a ponerse sobre las mesas de discusión.

II. *Periodo posbélico, Federación y Descolonización*

Una vez finalizada la guerra mundial y toda vez que las metrópolis europeas pudieron retomar los casos de sus colonias situadas en el mar Caribe, surgieron dos fenómenos que vale la pena destacar. Primero, la reactivación que la Gran Bretaña hiciera de una vieja idea de federación para sus colonias antillanas, proyecto que ya venía acariciando desde mediados del siglo XIX y, segundo, el proceso de descolonización que ocuparía a las viejas metrópolis colonialistas y al nuevo imperialismo norteamericano en sus posesiones en la región.

La Federación antillana 1958-1962

Aunque el proceso de integración de la Federación es cronológicamente posterior al de la descolonización, nos ocuparemos primero de aquél; puesto que, en el caso de las Antillas británicas, es un antecedente de la descolonización.

Como es bien sabido, la historia de la Federación de las Indias Occidentales es sólo una, de 1958, año de su establecimiento, a 1962, año de su terminación; y va en un solo sentido, su inmediato decaimiento y absoluto fracaso en el último año mencionado. Sin embargo, es importante señalar las causas de su infortunio. Además de los argumentos políticos, el razonamiento más difundido para explicarlo es el de la falta de un espíritu y

una *voluntad antillana* que lo dirigiera. Esto es verdad, aunque sólo en parte; la ausencia de este sentimiento debe explicarse así, pues:

No existía el temor de una anexión por una fuerza extranjera, como le sucedió a Canadá después de 1812, de ver crecer tan cerca y cuando miraban al otro lado de la frontera, al creciente espíritu expansionista del Destino Manifiesto norteamericano. El problema antillano, en un sentido, era descubrir los equivalentes morales de la guerra colonialista, las fuerzas unificadoras que serían tan poderosas psicológicamente en la paz, como esas otras que lo habían sido durante la guerra.²

Pero es inútil lamentarse por la falta de unidad, como si ésta fuera la condición indispensable para construir una nación basada en un sistema federativo. Al argumento apuntado, hay que añadir el hecho de que la Federación era, sobre todo, una imposición británica; por otra parte, casi no se presentó ninguno de los factores formativos decisivos, necesarios para la empresa federal.

Lo que sucedió, viéndolo desde otro ángulo, fue que el esquema federativo, concebido en 1945 y puesto en práctica en 1958, tenía que afinar y superar las tensiones inherentes al federalismo una vez establecida la maquinaria de gobierno. La historia de la Federación, desde este punto de vista, se convierte entonces en la historia de una lucha interna entre el naciente gobierno federal y los bien atrincherados intereses económicos de varios de sus participantes, entre ellos Barbados, Trinidad y, especialmente, Jamaica.

El proceso de descolonización

Durante los últimos años de la segunda guerra mundial se inició el fenómeno conocido como la descolonización. La Conferencia de Brazaaville, celebrada en 1944, constituyó, para muchos, un proceso de “conscientización” que llevaría necesariamente al replanteamiento de la situación colonial. Así, “en el contexto mundial, asistimos al desmembramiento de los grandes imperios de antaño y a la formación de nuevas naciones que, en su conjunto, darán origen a lo que suele denominarse como el Tercer Mundo”.³ De esta forma, cada imperio buscaba librarse de la mejor manera posible de su embarazosa situación colonial.

Las soluciones para llegar a esta descolonización varían de acuerdo a los intereses y posibilidades de cada metrópoli. Los Estados Unidos, como nación neoimperialista, lo solucionan otorgando el *status sui generis* de “estado libre-asociado” a su colonia caribeña, Puerto Rico. Animadas por su metrópoli, las Antillas francesas recurrieron al sistema de asimilación. En marzo de 1946, los Consejos Generales de Martinica, Guadalupe y la Guyana francesa votaron unánimemente por convertirse en departamentos franceses de ultramar. El gobernador, símbolo del sistema colonial, cedió su lugar a una autoridad altamente centralizada: el prefecto, que tenía poderes

equivalentes a los de los jefes de los departamentos franceses y, además, ejercía el control de las fuerzas armadas locales. Por su parte, las autoridades de la República asentadas en París, crearon el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico y Social de los territorios de ultramar (FIDES) y todo un plan de actividades económicas, que intentaba, según sus creadores, reducir el abismo existente entre los departamentos metropolitanos y los de ultramar, mediante el saneamiento de su economía y el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes.

Las decisiones tomadas por varias colonias antillanas de la Gran Bretaña en busca de su autonomía, variaron de acuerdo a las condiciones políticas, económicas, sociales y aun geográficas. Después de la disolución de la Federación, Jamaica y Trinidad se encaminaron hacia la independencia. La primera, se convirtió en un estado soberano el 6 de agosto de 1962; Trinidad y Tobago, en el último día del mismo mes; Barbados obtuvo su independencia en 1966. La otra gran colonia, ubicada en territorio continental, Guyana, después de un turbulento periodo,⁴ accedió a la independencia en 1966. Los restantes miembros de la difunta federación: Antigua, Barbada, Redonda, San Kitts, Navis, Anguilla, Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente se sumaron, para, dentro de una libre asociación, unirse a Gran Bretaña como Estado asociado. Aunque, posteriormente, algunas de ellas se separarían de este grupo para organizarse como estados independientes, proceso que aún continúa.

Cada isla-estado iba a gobernarse a sí misma casi en todos sus asuntos internos. Se les concedió un régimen de gobierno con autonomía casi ilimitada, pero Inglaterra se reservó la responsabilidad de la defensa y de los asuntos exteriores. Honduras Británica (Belice) contó con un gobierno propio para asuntos internos desde el primero de enero de 1964 hasta acceder a su total independencia, bajo un sistema republicano, en 1981. Sólo una cosa sigue uniendo en lo político, y lo económico a estas entidades: su vinculación y participación efectiva como miembros de la *commonwealth*, a través de la cual lograron, al momento de su independencia, un cierto apoyo económico traducido en capitales y un trato arancelario preferencial.

De las Antillas neerlandesas, Surinam logró su absoluta independencia en 1975, pero Aruba, Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y la parte sur de San Martín, mantienen una relación tripartita con el reino de Holanda, en la cual las secciones de ultramar deben ser consultadas para todo asunto relacionado con su defensa y asuntos internacionales, pero siempre reteniendo su autonomía en los asuntos internos.

Este proceso generalizado de independencias se muestra como una redefinición de un *status* legal de la sociedad y no implica una metamorfosis social. En esencia, es verdad que la realidad central de la independencia es la necesidad de cambiar de sendas marcadas por sistemas sociales seminales, iniciados con el mismo descubrimiento, que impusieron a la sociedad una base de monocultivo azucarero cimentada en la esclavitud

que producía ganancias masivas para los propietarios ausentistas. El otro momento crucial, el de la emancipación de los esclavos, fincó los cimientos de una cambiante sociedad criolla, de un limitado capitalismo comercial y de un campesinado individualista. El primer periodo, debido al empleo indiscriminado de mano de obra esclava importada, dejó un legado de exceso de población. El segundo, debido al uso y abuso del trabajo contratado⁵ dejó tras de sí una herencia económica de salarios y niveles de vida bajos, mantenidos en tal condición artificialmente y mediante la preservación de una reserva de sub-empleados y desempleados, que serán parte del perfil caribeño contemporáneo.

III. *Composición económica y problemas. Exposición de casos*

3.1 Las Antillas Mayores británicas

Al finalizar la segunda guerra mundial, en la subregión de las Antillas británicas predominaban las plantaciones de exportación organizadas en estructuras de enclave. Virtualmente, subsistía el síndrome de la monoproducción que sólo había sido modificado por otros enclaves: el de la bauxita en Guyana, Surinam y un poco más tarde en Jamaica; y el del petróleo, en Trinidad. En algunos casos, más de la mitad de la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura; el desempleo y los bajos salarios hacían que el rendimiento *per-cápita* de la producción fuera bajo.

Esta forma de actividad económica plantea dos condiciones asociadas con:

- 1) el lugar y la función de las colonias en la división internacional del trabajo.
- 2) la disponibilidad de grandes cantidades de fuerza de trabajo barata, esto es, el producto de la carencia de industrialización y, a la vez, el agente que refuerza la tendencia a eludir la industrialización en las colonias.⁶

En otras palabras, la presencia de grandes cantidades de fuerza de trabajo barata, descalifica a las máquinas que incorporan un cierto grado de tecnología y convierten a la subregión en una vasta zona de reserva de mano de obra.

En la década de los cincuenta se puso en práctica una estrategia para las Indias Occidentales, en la que se contemplaba la industrialización del campo con financiamiento de capital foráneo y exhortando al gobierno colonial a brindar un apoyo administrativo que no habían podido dar a los capitalistas locales. La respuesta del capital extranjero fue modesta, y la competencia regional por atraer a estos capitales terminó con las aspiraciones del proyecto. Así, la economía continuó orientada hacia el exterior, dado que el contexto de la industrialización lo preveían los ajustes del capital comercial y financiero. Comienza entonces un proceso de capitalización en las actividades primarias con una consecuente

contracción en el empleo agrícola que, tradicionalmente, es el que ofrece más oportunidades de trabajo.

El capital proporcionado por el estado colonial también se abocó a ampliar las estructuras burocráticas, marcando con ello una brecha que más tarde terminaría por hipertrofiar a este mismo sector.

Al entrar las Antillas angloparlantes en su etapa independiente no se registró ningún reacomodo que permitiera asegurar un desarrollo autónomo del Estado emergente; por el contrario, se mantuvo la secular estructura económica de la plantación, que en esta época se fortaleció por la demanda internacional de productos tropicales, lo que conservó su estructura de dependencia respecto al mercado mundial.

De esta forma, la política económica del desarrollismo se presenta como la función y el patrocinio del estado neocolonial en su intento por aliviar las tensiones sociales, mediante la elaboración de:

Programas de desarrollo, proporcionando infraestructura y toda clase de incentivos al sector privado, principalmente al extranjero. Se vale de instituciones tales como las “corporaciones para el desarrollo industrial” y “bancos de desarrollo”, así como fondos y las líneas directrices de los organismos externos de crédito (BID, BIRF, AID) para promover planes de desarrollo y mejoramiento social.⁷

Así, el financiamiento externo ha alcanzado niveles excesivos que han servido únicamente para fomentar el desempleo, especializando a la subregión en la exportación de mano de obra. Esta ha sido, de por sí, una actividad histórica, y mientras que las oportunidades de empleo son desiguales, la exportación de trabajo constituye una angustiosa realidad. Por tanto, necesariamente habrá de verse la migración internacional como un problema relacionado por fuerza con la internacionalización de la producción y la centralización hegemónica de la acumulación.

El resultado social interno de esta política se reflejó claramente en la estructura de clases, propiciando la expansión de la clase media en el comercio y en el sector burocrático, pero, al mismo tiempo, vinculándola en una relación de sometimiento al capital internacional. Por un lado, se incrementó el número de capitales expatriados, y por el otro, los grupos de negociantes locales se han visto reducidos al papel de socios subordinados en el marco de inversiones capitalistas internacionales y operaciones financieras tales, que los convierten para todo propósito en empresarios dependientes.

El escaso desarrollo industrial se dirigió, en esencia, hacia la agroindustria y a algunos sectores manufactureros locales que contribuyen a equilibrar la balanza de pagos, mediante la promoción de una amplia gama de artículos destinados “al mercado norteamericano; como plásticos, textiles, electrónicos, etcétera. Esta última categoría de manufactura se ve beneficiada con exenciones, tratamiento arancelario preferencial”⁸ pero, sobre todo, por los

salarios —comparativamente muy inferiores— pagados en los países antillanos.

Dentro del sector industrial podemos ubicar a las compañías dedicadas a la extracción de la bauxita; sin embargo, las transnacionales que explotan dicho recurso en la región (las estadounidenses: ALOOA, Reynolds Metal, Kaiser Aluminium, Alpert, Anaconda, Revere and Brass y la canadiense: Aluminium of Canadá) son grandes monopolios verticalmente integrados: sólo se dedican a la extracción de bauxita y, en menor medida, al beneficio de la misma. Los procesos de refinación y semifabricación que proporcionan más del 80 por ciento del valor agregado al mineral se realizan en los Estados Unidos y en, menor proporción, en Canadá. Contrastando con las enormes ganancias que reciben estas corporaciones, los países anfitriones obtienen a cambio reducidos beneficios: la existencia de un escaso mercado de empleo y la captación de un pequeño volumen de impuestos. Por otra parte, al no existir vínculos intersectoriales de la industria dentro de la región, todos los bienes de capital y la tecnología altamente desarrollada provienen de los Estados Unidos.

Por último, hay que señalar, en este breve resumen, que la estrechez del ya de por sí exiguo mercado interno se ve agravada, no solamente por las causas apuntadas, sino también por ciertas condiciones adicionales como la geografía, dado que la mayoría de las entidades del Caribe anglófono son territorialmente pequeñas, pero, sobre todo, por la distribución desigual del ingreso, que lo polariza a favor de una mínima parte de la población, hecho que ejerce un efecto depresivo sobre la demanda de una amplia gama de productos de uso corriente.

3.1.1. Jamaica

La década iniciada en 1950 marca la génesis de una transformación radical en la estructura productiva jamaicana, que de la actividad agrícola, secular y tradicional, pasa a la minero-industrial de la explotación de la bauxita y, posteriormente, al procesamiento de dicho mineral en alúmina. Algunos autores se han referido a este crecimiento explosivo como al “nuevo colonialismo de la bauxita-aluminio”. Sin embargo, por sus características, este nuevo enclave minero no ha tenido el impacto positivo deseado sobre la estructura económica del país.⁹

En economías estructuralmente subdesarrolladas, como es el caso de la de Jamaica, la inversión de capital es una variable determinante, ya que la unión entre la inversión y las tendencias del ingreso son más débiles que en los países industrializados. Uno de los motivos que propician esta débil relación es que, en la mayoría de los casos, sus beneficios son determinados por el mercado externo. Otra razón que aducir es el efecto “multiplicador” secundario de la inversión que, también, en ausencia de una industria desarrollada de bienes de capital local, opera desde el exterior. En Jamaica, la proporción de inversión de capital externo es tan

alta que se aproxima al 50 por ciento y, en tales circunstancias, las variables, como el nivel y composición de las exportaciones y los términos del comercio, asumen vital importancia.

Durante el periodo 1958-1968 sólo aproximadamente el 13% de la formación de capital neto fijo ocurrió dentro del sector público. Esto es consecuencia de la política de gobiernos sucesivos de dejar casi toda la actividad productiva al sector privado, mientras que el Estado se comprometía en la construcción infraestructural.¹⁰

La política antes señalada se ha llevado a extremos tales que aun sectores de la infraestructura, como la electricidad, teléfonos y transporte público (exceptuando los medios menos redituables como el ferrocarril), se encuentran en manos del sector privado del capital.

Siguiendo este esquema planteado para la década de 1950 a 1960, el PIB real creció a una tasa promedio anual variable entre un 5 y 6 por ciento y el PIB por habitante a una de 3 ó 4 por ciento. El partido laborista, en el poder en ese momento, atrajo capitales foráneos brindándoles condiciones excepcionalmente ventajosas, sobre todo en la comercialización y explotación de la bauxita, el turismo, la construcción y la industria ligera. La agricultura, que había caído en un relativo estancamiento, recibió el apoyo de capitales externos, particularmente en el renglón de los productos tradicionales y por lo tanto, en las seguras industrias azucarera y del ron. Sin embargo, y pese al crecimiento señalado, en esos años se agravaron los desequilibrios económicos y sociales; el desempleo, el subempleo, la prostitución y el alcoholismo se incrementaron en forma alarmante.

Durante el periodo 1962-1972 la tasa de desempleo nacional pasó de un 13 por ciento a más de un 24 por ciento, afectando principalmente a los jóvenes y a las mujeres; asimismo, la distribución del ingreso, ya de por sí mala, empeoró. Se estimaba que entre 1958 y 1968 el ingreso del 40 por ciento más pobre de la población declinó en alrededor de un 7 por ciento. Asimismo, en la periferia de Kingston, la capital, se formaron vastos cinturones de miseria compuestos por cientos de familias que abandonaron las actividades agrícolas en busca de oportunidades de trabajo en la ciudad.

La otra cara de la sociedad también muestra claramente los efectos de esta política, pues la concentración de la riqueza se acentuó. En efecto, en un informe público del Ministerio del Interior se afirma que:

... una élite de 21 familias —con raíces inglesas, judías, sirias y chinas— tiene la hegemonía económica, intelectual y cultural del país. Dicho grupo controla 104 empresas con activos por varios cientos de millones de dólares, incluyendo los estratégicos sectores eléctrico y telefónico, las principales materias primas, la banca, gran parte del comercio exterior y la explotación de los recursos naturales. En la agricultura, sus inversiones comprenden la producción del azúcar, ron y plátano.¹¹

De acuerdo con las cifras publicadas, de las 11 335 empresas que existían en Jamaica a mediados de la década de los sesenta, sólo 41 de ellas controlaban el 70 por ciento del ahorro interno, y muchas están interrelacionadas por medio de sus consejos de administración o de sus directivos y ejecutivos.

A mediados de la década de los setenta, la economía isleña entró en una fase de recesión de la que no ha podido recuperarse. Desde entonces, el PIB no se ha restablecido y se han acumulado problemas que colocan al país en una difícil situación. Los factores que determinaron esta crisis radican en el descenso de la producción-exportación de bauxita, producto que genera el 34 por ciento de los ingresos de la exportación. Entre 1975 y 1976 se registraron disminuciones drásticas en la producción minera debidas al efecto combinado de la recesión mundial, los disturbios laborales y, sobre todo, a la decisión del gobierno, en 1974, de aumentar en un 500 por ciento el impuesto sobre la bauxita extraída.¹² Además, las exportaciones azucareras disminuyeron y el turismo, que tradicionalmente ha representado una importante fuente de divisas y empleo, disminuyó su afluencia entre 1976 y 1977. Así, los ingresos generados por el turismo pasaron de 118 millones en 1975 a sólo 65 millones en 1977. La crisis de este sector obligó al gobierno a nacionalizar, en el último año mencionado, una parte de los hoteles: 1541 habitaciones que, sumadas a las adquisiciones y construcciones anteriores suman 4 000 habitaciones, es decir, 70 por ciento del total. Cabe señalar que la rama turística ocupa el tercer lugar en el renglón de ingresos y divisas al país.

Como resultado de esta desfavorable tendencia económica, la desocupación pasó de un 21 por ciento en 1975 a un 28 por ciento en 1978 y las tensiones sociales se hicieron cada vez más patentes, la violencia urbana se propagó a partir de 1979, asolando los barrios de las zonas urbanas.¹³

El camino seguido para intentar subsanar los problemas económicos, de acuerdo a los lineamientos políticos señalados, fue el de los préstamos de instituciones mundiales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, que, huelga decirlo, condicionan dichos préstamos. Evidentemente, la influencia de estas instituciones sobre la política interna de un país causa problemas que, como en el caso jamaiquino, llegan a inclinar las balanzas electorales hacia uno u otro lado.

Se ha estimado que, a principios de los años cincuenta, por lo menos un 75 por ciento de las actividades básicas de Jamaica estaban relacionadas con la agricultura; cerca del 90 por ciento del valor total de las exportaciones visibles y 67 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios eran materias primas o productos agrícolas procesados. Finalmente, más del 40 por ciento de la fuerza de trabajo era empleada en el sector agrícola. Después de la producción azucarera era la bananera la que ocupaba el lugar inmediato en importancia, pero debido al estancamiento de los precios en el mercado mundial, y a que el valor nominal de las exportaciones de bauxita creció rápidamente, los plátanos sólo sumaban el 7.7 por

ciento de las exportaciones en 1968 y su caída como fuente de ingresos continuó a lo largo de los años. De la participación del azúcar y de los plátanos en el valor de las exportaciones se desprende la importancia de su papel en la agricultura, pero hay que señalar que su cultivo, al igual que lo que sucede con otros productos de la economía jamaicana, se hace con el sistema de extensas plantaciones, y que los pequeños productores son, en consecuencia, los que menos tierras poseen frente a las grandes agroindustrias, que, siendo un grupo muy reducido, controla cerca del 40 por ciento de la tierra cultivable.

La producción alimentaria ha sido siempre uno de los problemas capitales de los territorios caribeños, ya que éstos, por su deformada economía, restringen su producción, incrementando con semejante práctica la necesidad de importaciones. En este sentido, la industria ganadera ha sido uno de los pocos rubros a los que se les ha dado impulso; la producción de carne, de leche y de aves ha sido de las más favorecidas, aunque hasta el día de hoy, sólo se alcanza a cubrir la demanda del mercado interno.

Vale la pena mencionar un último problema de la economía local: el de la migración internacional. Considerado el panorama económico-social descrito y sus dificultades inherentes, a la migración urbana, y sobre todo a la rural, habrá que atribuirles el declive en el número de trabajadores agrícolas en particular y el de la población del campo en general. Entre 1954 y 1961 emigraron más de 150 000 personas de Jamaica; según los resultados de una investigación realizada fuera del país, aproximadamente el 34 por ciento de los migrantes masculinos de Jamaica habían sido recontratados en otros países en el sector agrícola, lo que indica, en buena medida su ámbito de procedencia.

3.1.2 Trinidad y Tobago

La tradicional dependencia de la cosecha de plantaciones y haciendas no ha sido lo característico de Trinidad y Tobago, en donde, más de medio siglo después de la segunda guerra mundial, el petróleo y el asfalto, conjuntamente con el azúcar y el cacao, convirtieron al país en un territorio relativamente próspero. No obstante este desarrollo de la industria, la agricultura y el turismo se requirió inversión extranjera, lo que obviamente condujo hacia una perpetuación de la vieja economía colonial.

Frente al sector industrial, y primordialmente al petrolero, la agricultura ha mostrado una falta de dinamismo provocada por un complejo conjunto de factores, entre los que se cuentan los problemas laborales, los insuficientes servicios de crédito, los poco eficaces sistemas de comercialización y, durante algunos años, hasta las malas condiciones climáticas. Pese a la existencia de programas destinados a la promoción de las actividades agrícolas, tanto en el renglón de exportaciones como en el del consumo

interno, esta actividad permanece estancada, y contrasta con la industria, que ha mostrado mayor movilidad.

De los ingresos por conceptos fiscales y de exportación, se desprende que la extracción petrolera ha sido la actividad primordial; sin embargo, por el empleo intensivo de capital, predominantemente extranjero, sólo ocupa alrededor del 3 por ciento de la fuerza de trabajo local. Trinidad no refina la mayor parte del petróleo crudo que produce, sino que lo exporta; ello se debe a lo precario de la infraestructura para procesar el petróleo liviano proveniente de los yacimientos nacionales. En general, se refinan variedades de crudo pesado que vienen del Medio Oriente e Indonesia, para ser vendidos posteriormente en el mercado mundial y, principalmente, en los Estados Unidos, cuyas empresas transnacionales dominan el sector en este país caribeño. Otra razón por la que se procede de esta manera es que:

Trinidad pasó a cumplir una doble función en cuanto a las necesidades de la economía petrolera mundial y a la máxima racionalización empresarial de los monopolios petroleros.¹⁴

La lógica del razonamiento de las empresas resulta evidente al advertir que el petróleo procesado proviene de sucursales y subsidiarias de dichas empresas en otros países, ya sea del mismo continente, como es el caso de Venezuela o de otros centros productores del Cercano Oriente, también controlados por las multinacionales.

En el sector manufacturero, que desde la posguerra fue el más estimulado después del petróleo, la expansión ha sido limitada por el costo creciente de los insumos importados; sin embargo, esto no ha detenido su ensanchamiento, aunque sí su profundización. Además, los recursos de capital de este renglón provienen más bien del sector privado (nacional y transnacional); si la inversión estatal no se aplicó tanto en este rubro, es porque se abocó principalmente a la construcción de una planta de fertilizantes, al estímulo del turismo, al establecimiento de una compañía de cemento y, a partir de 1977, al desarrollo de una empresa destinada a la distribución de gas natural que vino a “fortalecer... [los]... planes de industrialización, así como el ingreso de Trinidad en una etapa de incorporación moderna a la esfera de dominación de los Estados Unidos”.¹⁵

Hemos de hacer notar que la pregonada prosperidad económica, principal estandarte del Movimiento Nacionalista del Pueblo (PNM) del fallecido doctor Eric Williams, no evita la existencia de una tasa real de desocupación del 17 por ciento, difícilmente reducible. Ciertamente el desempleo es perjudicial, pero se relaciona con los lineamientos de una política económica orientada hacia el logro de una mayor independencia, política cuyo promotor principal es un fuerte movimiento sindical, tradicionalmente bien organizado bajo los lineamientos de una ideología claramente nacionalista y antiimperialista.

Cabe por último considerar, en relación a este país, que durante casi un siglo fue importador de mano de obra y que los efectos de este fenómeno se presentaron, en este siglo, en forma inversa, a la del resto de la región, es decir, como emigración de mano de obra que tradicionalmente se dirige hacia los Estados Unidos y Canadá. En estos dos países, entre 1962 y 1976, el contingente de trabajadores caribeños sumó un cuarto de millón de personas, proveniente de los cuatro principales países de las Antillas, y de este grupo, uno de cada cuatro era originario de Trinidad. El otro polo metropolitano que capta la mayoría de la emigración del Caribe es la Gran Bretaña, que entre 1946 y 1977 ha atraído un poco menos de un millón y medio (1.5 millones) de migrantes.

3.1.3 Guyana

Guyana, la ex-Guyana británica, fue, hasta los años cuarenta de este siglo, en que se descubrió en ella la bauxita y comenzó a explotarse industrialmente, un tradicional monoprodutor de azúcar y, en menor medida, a partir de principios de este siglo, el almacén arrocero que provee al mercado nacional y regional.

La metamorfosis sufrida por la economía guyanesa, que funciona como enclave desde el descubrimiento de la bauxita, alteró el porcentaje de la cooperación de los sectores en la siguiente proporción hacia 1973: bauxita (48 por ciento); azúcar (31 por ciento); alúmina (9 por ciento) y arroz (9 por ciento). Tradicionalmente, los mercados de Guyana han sido la Gran Bretaña, Estados Unidos y, dentro de la subregión, Trinidad y Tobago. Sin embargo, también en este campo se ha ido ampliando gradualmente su margen de independencia mediante una política de diversificación que ha reorientado sustancialmente sus exportaciones hacia los países socialistas y los del grupo de los no alineados. En particular, Guyana ha incrementado su comercio exterior con la República Democrática Alemana, la Unión Soviética, la República Popular China, Cuba y con los miembros de la Comunidad del Caribe, de la cual forma parte.

Esta política de diversificación sirvió de punto de partida para que el líder, F. Burnham, como primer ministro —a partir de 1966— diera un fuerte impulso a una política desarrollista con un matiz muy específico. En la segunda mitad de la década de los sesenta, se reafirma el proceso de “industrialización por invitación” que se afianza sólo mediante una política abiertamente orientada hacia el exterior, que asegura la entrada de capitales extranjeros. A ello hay que sumarle una variante política de nacionalismo de Estado, que le asegura a éste una mayor participación y control de los recursos naturales, lo que no impide que el país siga atado a los préstamos foráneos y a las fluctuaciones de los precios internacionales.

Dada su importancia, vale la pena detenerse y hacer una breve evaluación del comportamiento de la industria de la bauxita y su

vinculación con el Estado, a fin de comprender mejor la economía política de este territorio caribeño. El eje del desarrollismo local lo constituyó, indudablemente, la bauxita que era controlada en un 90 por ciento por las empresas transnacionales Demerara y Reynolds. En 1971, después de un periodo razonable de conversaciones y debido a la intransigencia de la ALCAN, el gobierno guyanés decidió nacionalizarla y otorgar a la propietaria transnacional una compensación de 53 millones de dólares norteamericanos, pagaderos en 20 años. Cuatro años más tarde, en enero de 1975, la Reynolds pasó por el mismo proceso de nacionalización, tras asegurar una compensación de 10 millones de dólares.

El ímpetu nacionalista no terminó con los procesos contra el enclave de la bauxita, sino que fue más allá, al nacionalizar el consorcio británico Booker Mc Connell, vasto conjunto de empresas industriales, comerciales y pesqueras, cuyo monto global de operaciones representaba el 40 por ciento de las exportaciones y 25 por ciento del PIB nacional.¹⁶ Con este proceso culminó el programa emprendido en 1971 para reducir la dependencia del extranjero, labor que, al cabo de 5 años, puso en manos del Estado un 80 por ciento de la actividad económica del país.

En el terreno de la agricultura, la industria arrocera —a partir de principios de siglo como ya se ha señalado— fue cobrando importancia. Desde el periodo que medió entre ambas guerras mundiales, las dimensiones de las áreas cultivables para este producto fueron en aumento hasta sufrir un estancamiento en la década de los sesenta, cuando se intentó una reactivación promovida por capitales privados; sin embargo, fue solo el gobierno, mediante préstamos internacionales, el que emprendió la tarea de mejorar los sistemas de riego para elevar la producción y aumentar su participación en el valor de las exportaciones y el consumo interno y, mediante ello, mejorar el nivel de vida de la población.

3.2 Las Antillas Menores británicas

El grupo de las Antillas Menores está formado, fundamentalmente, por siete países: Antigua, Barbados, Dominica, Grenada, St. Kitts-Nevis, Sta. Lucía y San Vicente, que conforman lo que ha dado en llamarse el Caribe Oriental. Con una población conjunta (1976) de 772 000 habitantes, el grupo insular compone una unidad económico-social estructurada, prácticamente desde su poblamiento original, de plantaciones de azúcar. De entre estas islas, las que lograron un mayor desarrollo económico y algunas inversiones de capital destinado a la promoción agrícola, industrial y de servicios, son Barbados y Dominica. Grenada, al lograr su independencia *absoluta* y no sólo formal en 1979, se orientó durante los cuatro años de su revolución a una reestructuración económica que vale la pena mencionar. Del resto de las islas sólo haremos referencia a tres: St. Kitts-Nevis-Anguilla, Sta. Lucía y San Vicente.

Cabe aún señalar que este grupo insular no escapa al marco de desarrollo mencionado en el inicio del análisis de esta subregión de las Antillas.

3.2.1 Barbados

La economía barbadiense depende, fundamentalmente, de la agricultura y su principal producto es la caña de azúcar (con sus derivados), a cuyo cultivo se destina una superficie aproximada de 20 000 hectáreas y da empleo a unas 15 000 personas. En el rubro industrial también existe un sector dedicado al procesamiento de alimentos como frutas enlatadas, leche y algunas emparadoras de pescado. Hay una pequeña refinería de petróleo y suficientes yacimientos de gas natural para cubrir su demanda interna actual. El turismo es la segunda fuente de empleo en la isla, pero éste, como sucede en todo el mundo, está sujeto a las fluctuaciones del mercado que constantemente se ven influidas por las crisis del sistema capitalista, ya que los turistas en su mayoría proceden de los Estados Unidos y Canadá.

Evidentemente la infraestructura de esta isla está orientada a satisfacer los requerimientos de sus principales rubros de ingreso y, hasta 1981, algunos sectores de ella se encontraban en manos extranjeras. Tal es el caso de la compañía de luz, The Barbados Light and Power Co. que, a partir de esta fecha, pasó a ser propiedad de empresarios locales privados, quedándose el gobierno con sólo el 7 por ciento de las acciones. Haciendo un análisis de la década de los setenta, el ministro de Comercio e Industria declaraba que había visto a la economía isleña “moverse hacia la industrialización y que para el fin de la década, el sector manufacturero había contribuido con un 11.3 por ciento al PNB”.¹⁷ Estos resultados son producto de un plan promocional iniciado en 1973 con base en inversiones extranjeras que, además de los renglones señalados, fomentaron el armado —en fábricas subsidiarias o filiales de transnaciones— de partes de computadoras, de algunos aparatos electrónicos y de equipos deportivos. En esta organización participaron capitales norteamericanos, británicos y canadienses.

Sin embargo, el halagador panorama presentado para la década pasada no tuvo cabal cumplimiento pues, al iniciar la década de los ochenta, la recesión en los Estados Unidos hizo que el desempleo volviera a su tasa anterior de cerca del 15 por ciento, al salir de la isla parte de la industria ensambladora que, además, tuvo que enfrentar las presiones de los sindicatos locales que demandaban aumentos salariales; hasta el momento, esta situación se ha mantenido.

3.2.2 Grenada

Hasta marzo de 1979 la actividad económica de Grenada se limitaba a la agricultura. Sus principales productos eran el cacao y los plátanos que

también eran sus principales productos de exportación. Otro producto privilegiado era la nuez moscada, cuyo valor de exportación llegó a los 12.4 millones de dólares. En cuanto a su actividad industrial, su desarrollo era muy limitado, pues se reducía a pequeñas destilerías de ron, fábricas de jabón, cigarros, papel higiénico y otros artículos de higiene que comerciaba con sus vecinos antillanos.

Hasta el triunfo de la revolución, la isla había sufrido la dictadura de Eric Garay, quien controlaba todas las actividades políticas de la isla imponiendo el terror por medio de bandas parapoliciales conocidas localmente, como *mongoose gangs*. En lo económico, las inversiones extranjeras habían sido orientadas hacia la promoción de las exportaciones que favorecían fundamentalmente a los grandes productores en detrimento de los más pequeños.

Al llegar Maurice Bishop al poder, mediante una sublevación incruenta, se encontró con que las arcas nacionales tenían un fondo de apenas 47.00 dólares y que para echar a andar de nuevo la economía se requería abundante capital que tendría que ser obtenido de alguna manera:

El capital necesario para estas acciones tiene que ser formado de alguna parte. No creemos que el Estado por sí solo sea capaz de generarlo. De modo que el capital que se pueda obtener del sector privado constituye una ayuda imprescindible en la tarea de construir el aparato productivo de la economía. Creemos que en este proceso es posible garantizar controles suficientes y que no obstante la continuación del funcionamiento del capital privado, una porción suficiente de sus ganancias reestructurará al pueblo. Lo vemos de esta manera: mientras que en el plano político se requiere de firmeza y vigor, al plano económico permite un cierto grado de flexibilidad. Este es el significado de un desarrollo revolucionario...¹⁸

El control de la economía recaería, entonces, sobre los hombres del Partido de la Nueva Joya (*New Jewel Movement*) que a través de sus comités buscaría una optimización de recursos y una efectividad en la derrama de la inversión en aquellos sectores de la economía que más lo requiriesen.

La composición sectorial de las áreas económicas fue distribuida en tres partes: la privada, la cooperativa y la pública, de entre las cuales predominaba la última. Entre 1979 y 1981, las inversiones aumentaron de 34 a 78 millones de dólares, mientras que en el sector estatal pasaron de 15 a 74 millones. En el sector público fueron creadas instituciones financieras reguladoras como el Banco Comercial Nacional y el de Comercio e Importaciones Nacionales que era el encargado de adquirir determinados artículos, primordialmente alimenticios, así como de la promoción de productos nacionales. Otra institución, también surgida de este movimiento, fue la Corporación Granadina de Turismo que representaba al gobierno en este sector.

La actitud del nuevo Estado frente a los servicios de la infraestructura (teléfonos, electricidad y distribución de agua) fue la de la intervención, abocada a promoverlos. Además, se confiscaron propiedades pertenecientes al depuesto primer ministro y a algunos miembros de su gabinete. Dichas propiedades quedaron bajo el control gubernamental y se abrieron al público.

Los recursos de capital que la revolución logró allegarse durante sus cuatro años de vida se obtuvieron en forma de préstamos a largo plazo y con bajos intereses facilitados por países de Europa Oriental y de Escandinavia, ya que pese a todos los esfuerzos por conseguir créditos de instituciones como el FMI, el veto de los Estados Unidos impidió que llegaran al país recursos financieros por otra vía. Estos préstamos se invirtieron básicamente en la diversificación de los mercados agrícolas, en la expansión de la industria pesquera, en el establecimiento de agroindustrias, en el desarrollo de la infraestructura local y en el mejoramiento de la capacidad de servicios turísticos, que incluyó, como es bien sabido, la construcción de un nuevo aeropuerto, para el que, incluso, se vendieron localmente bonos de construcción.

Todas estas aspiraciones, que además entrañaban el empeño en mejorar la distribución de la riqueza y proporcionar una debida justicia social, fueron trágicamente interrumpidas el 25 de octubre de 1983 por la acción de las armas imperialistas que impusieron la fuerza sobre la razón.

3.2.3 Dominica

El 3 de noviembre de 1978 Dominica se independizó del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Dominica se localiza entre las islas francesas de Guadalupe y Martinica, tiene una superficie de 751 km² y su economía depende de las exportaciones de plátano (60 por ciento de sus divisas) coco y cítricos, de los que se deriva su incipiente industria.

El comercio exterior insular se canaliza principalmente con los Estados Unidos, Canadá y la Gran Bretaña, país, este último, del que recibió como compensación, al momento de su independencia, la suma de 10 millones de libras esterlinas para ser destinadas a la solución de su déficit comercial, para aliviar la alta tasa de desempleo y para reducir el nivel de inflación.

3.2.4 Saint Kitts-Nevis-Anguilla; San Vicente; Montserrat

Las islas de Saint Kitts-Nevis-Anguilla, que se cuentan entre las más pequeñas del oriente del Caribe, nacieron a la vida moderna federadas, primero, en el seno del grupo que fracasó en 1962, aunque ellas continuaron unidas hasta 1969, año en que Anguilla abandonó la federación, sólo para ser sometida por una fuerza expedicionaria británica. La actividad económica

de estas islas oscila entre la agricultura y la industria dependiente de los productos agrícolas. El 80 por ciento del área cultivable de Anguilla está sembrada con caña de azúcar y también el 67 por ciento de tierra arable en Saint Kitts. El 33 por ciento de la población de ambas islas se emplea en las actividades azucareras. El producto que ocupa el segundo lugar es el cacahuete. Estas cosechas se destinan principalmente a los mercados internacionales, de los que se recoge la mayor contribución para la balanza de pagos.

San Vicente, con una población de 112 000 habitantes (1976), es un Estado asociado al Reino Unido de Gran Bretaña y, al igual que la mayoría de las restantes islas, su economía se apoya en la agricultura azucarera y en el cultivo del plátano. Estas actividades están controladas, desde 1935, por unas treinta plantaciones que poseen más de la mitad de la tierra cultivable.

En cuanto a Montserrat, además de la producción agrícola que incluye algodón, cítricos, y hortalizas, destaca en la actividad pesquera. Aunque se intentó promover el turismo con la aplicación de las ideas norteamericanas de hotelería, la empresa no tuvo el éxito deseado y dejó de fomentarse.

Un factor común en estas islas es el carácter de su campesinado que, aunque numéricamente pequeño, ha sido tradicionalmente muy combativo. En 1937, fue este sector el que encendió la llama nacionalista que vino a alterar el orden establecido durante todo el periodo colonial y que, más tarde, desembocaría en los movimientos sociales que a su vez generaron las modernas organizaciones políticas de las Indias Occidentales.

3.3 Las Antillas francesas

Al salir de la guerra mundial como uno de los países triunfadores, Francia se vio en la necesidad de reestructurar su política de acuerdo a nuevos preceptos políticos y económicos que la obligaron a modificar sus relaciones con sus colonias. "El estado convertido en importante agente económico se encargó de crear por medios monetarios y presupuestales, así como mediante la planificación de actividades del sector público, el complemento de la demanda efectiva necesaria para el buen funcionamiento de las empresas oligopólicas."¹⁹ Esta política, en realidad, venía a redefinir las relaciones políticas entre centro y periferia pero, además, y tal vez lo más importante, replanteaba las relaciones económicas con las cuales los nuevos departamentos de ultramar se ligaban al mercado mundial a través de su metrópoli. Esta nueva relación, como veremos, dejó pocos beneficios a la neocolonia y, en cambio, sí sirvió como punto de reciclaje del capital central.²⁰

3.3.1 La Guyana francesa

El territorio de la Guyana francesa, el menor de los tres territorios históricamente caribeños, aunque enclavados en el continente americano es, sin

embargo, el mayor de los territorios franceses en América. También, contradictoriamente, es el que tiene una menor población ya que por largo tiempo fue utilizado como una colonia penal en la que, hasta 1946, habían purgado sentencia unos 80 000 presidiarios franceses.

El auge aurífero que durante cierto tiempo promovió la colonización del territorio se extinguió en 1974, cuando el monto total de la extracción no sobrepasó los 35 kg. del metal. Sus otros recursos minerales y agrícolas tampoco han sido explotados. Este territorio “parece haberse detenido en el siglo XIX, en un relativo inmovilismo” en el que sólo una tibia actividad política entremueve su follaje tropical.

3.3.2 Martinica y Guadalupe

A diferencia de su hermana mayor (territorialmente hablando), estas islas han tenido, secularmente, una mayor y más importante actividad socio-económica. En efecto, a partir de la puesta en marcha del proceso de departamentalización, el flujo de capitales destinados a los gastos administrativos, además de los fondos recibidos para las promociones agroindustriales, reactivó la producción de azúcar, principal producto de exportación, y el de otros cultivos como la piña y los plátanos. En Martinica la producción bananera logró registrar un crecimiento tan notable que en 1976 constituyó el 56 por ciento del total de las exportaciones. En Guadalupe el área destinada a este cultivo también se incrementó en forma considerable. Sin embargo, el dinamismo de esta área no alcanzó a crear el excedente necesario para equilibrar la producción del sector. El desequilibrio no sólo se debe al tipo de producto sino que, es más bien derivado de la mala distribución de la tierra, excesivamente centralizada.

Martinica.	Explotación agrícola				
	-3 ha.	3 a 10 ha.	10 a 100 ha.	+ 100 ha.	Total
número de explotaciones	21-196	2.975	635	127	24.936
porcentaje	(85)	(11.9)	(2.6)	(0.5)	(100)
superficie	13.428	13.327	17.202	13.904	75.860
porcentaje	(17.7)	(17.6)	(22.7)	(18.33)	(100)

FUENTE: *Caribbean Monthly Bulletin*, I.C.S.-UPR, vol. 10, núms. 5, 6, 7, mayo-junio-julio 1976, p. 45

Algo similar a lo representado en el cuadro anterior ocurría en Guadalupe, donde el 0.5 por ciento de las propiedades rurales abarcaba el 55 por ciento de las tierras, mientras que un 96 por ciento de los propietarios debía contentarse con aproximadamente un 30 por ciento del suelo cultivable.

En los primeros años de la década de los sesenta, las exportaciones agrícolas de ambas islas tuvieron un notable crecimiento, pero la diversificación de las siembras sufrió un estancamiento debido a que el tipo de cultivo es determinado, más que nada, por el sistema de plantación, pues, en este caso, entre la gran explotación y aquella que le sigue media un gran abismo; se calcula que la gran propiedad tiene una extensión media de 200 hectáreas, mientras que el promedio de la mediana propiedad no sobrepasa las 30 hectáreas, lo que la acerca más a la pequeña propiedad que es de aproximadamente 2 hectáreas.

El cultivo de la caña de azúcar experimentó problemas cuando reiniciada la producción agrícola metropolitana, se impulsó, en Francia, la siembra y el procesamiento del azúcar de remolacha, y esto repercutió en la paulatina disminución de las superficies destinadas a la caña de azúcar en las islas; así, durante la década de 1960-1970 dichas áreas perdieron cerca de la mitad de su extensión.

Uno de los objetivos —siempre enunciados en todos los planes departamentales— ha sido el renglón de la industrialización, pues el desarrollo de este rubro, hasta 1966, se había reducido a unas cuantas fábricas azucareras, destilerías de ron y algunas industrias menores de conservas y refrescos. Además, se pretendía robustecer la infraestructura, en lo cual se invirtió cerca de una tercera parte de los subsidios. Sin embargo, durante algún tiempo este proyecto fue obstaculizado por ciertos sectores de la población que argumentaban que la isla carecía de fuentes de energía, materias primas, capitales y un mercado interior considerable. A fin de cuentas, esta incertidumbre fue aprovechada por las transnacionales del petróleo: Standard Oil Texaco e International Shell, quienes instalaron en Martinica una refinería con capacidad de procesamiento de 60 000 (barriles) anuales, empresa que, hasta el momento, es lo más moderno del rubro industrial insular.

El sector que más se benefició con la departamentalización fue el terciario, particularmente el área de servicios turísticos, que, se pensaba, sería la panacea para equilibrar los gastos del país. De igual forma, los servicios administrativos públicos experimentaron una hipertrofia al incrementarse el número de los funcionarios encargados del aspecto político-administrativo, y los de los demás servicios.

Este modelo de desarrollo no ha podido constituir una base productiva propia, pues se trata sólo de una especie de continuación del modelo dependiente colonial, característica que sobresale al hacer “un examen del uso que se da a la fuerza de trabajo; de la misma incapacidad de desarrollo industrial, junto a la degradación de la agricultura que determina la falta de

oportunidades de empleo".²¹ El alto índice de desempleo, que se ha convertido en un problema estructural, ha causado graves inconvenientes al propiciar una movilidad de población en busca de mejores oportunidades de vida allende sus fronteras; el índice de emigración al Viejo continente es particularmente alto, pese a que allí la población caribeña sufre una discriminación que se ve reflejada en los salarios.

El desequilibrio y dependencia comercial, característica de esta economía, se reflejan claramente en su balanza, en la que las importaciones se componen básicamente de productos manufacturados cuyos elevados precios no pueden ser compensados con la exportación de productos agrícolas.²² La gravedad del desequilibrio en el intercambio reside en que gran parte de las importaciones, provenientes de Francia, se compone de víveres indispensables en la dieta básica local, deprimiendo, de esta forma, los intentos nativos por crear una agricultura de subsistencia propia.

3.4 Antillas Holandesas

Por su localización geográfica, las Antillas holandesas se dividen en dos grupos de islas; el primero: Aruba, Curazao y Bonaire, y el segundo: las islas de Barlovento, archipiélago compuesto por San Martín, San Eustaquio y Saba; además, hay un territorio continental: Surinam. Este último logró su independencia total en 1975, mientras que, como se mencionaba anteriormente, las islas están aún ligadas por ciertos vínculos a la metrópoli.

Secularmente, la actividad de estos territorios ha estado destinada a la promoción comercial y gracias a ello se introdujo y fomentó la plantación de la caña de azúcar; por otra parte, durante los primeros años de la colonización, fueron los holandeses los más activos comerciantes de la zona. Con el tiempo estas características básicas sólo han cambiado en sus técnicas, pero en esencia, su espíritu sigue siendo el mismo. Ello se refleja más claramente en el segundo grupo de islas, las más pequeñas, que prácticamente son meras rocas en medio del mar: Saba, por ejemplo, tiene una superficie de 8 kilómetros cuadrados.

3.4.1 Surinam

La vocación comercial de esta excolonia se hace patente en la ubicación de su ciudad capital y en la distribución de su población, pues contando con un gran territorio, la mitad de sus habitantes reside en las zonas costeras y, la otra mitad, en Paramaribo, la capital, en donde se concentran los trabajadores del sector terciario, los subocupados y los desocupados, que constituyen un 30 por ciento del total de la fuerza de trabajo.

Durante varios siglos las actividades agro-exportadoras de Surinam se combinaron con la explotación de metales preciosos, hasta que la demanda mundial de aluminio hizo costear la explotación de los ricos yacimientos de bauxita. En la actualidad, este territorio es el cuarto productor mundial de dicho mineral, que es explotado por la Surinam Aluminium Company (SURALCO), filial de la transnacional ALCOA, y por una subsidiaria del consorcio anglo-holandés Royal Dutch-Shell, la Billiton Bauxite Mining Co. En comparación con su importancia económica (31 por ciento del PIB, 30 por ciento de los ingresos gubernamentales, 90 por ciento de las exportaciones y 20 por ciento de la inversión privada) la industria de la bauxita sólo da empleo a 600 trabajadores, ya que sus procesos técnicos han incorporado una tecnología muy moderna.

Frente a la importancia de la industria minera, la agricultura proporciona sólo el 10 por ciento del PIB, por lo que los nuevos gobiernos han procurado incrementar la extensión de las tierras dedicadas a la agricultura, ya que las fronteras agrícolas no propician ninguna tensión social, pero sí demandan una fuerte inversión inicial. Se ha puesto especial interés en la siembra de productos agrícolas para el consumo local, como por ejemplo el arroz, que es alimento básico en la dieta nacional, dado que la población se compone en gran parte de asiáticos (hindúes, indostanos y chinos) aunque también hay holandeses, portugueses y descendientes de otras nacionalidades europeas. La sociedad surinamesa contemporánea es, pues, una sociedad multirracial integrada como comunidad.

Las diferencias surgidas entre los regímenes post-independentistas con sus antiguas metrópolis se han acentuado, sobre todo después de la nacionalización de la industria minera de la bauxita, que proporciona al Estado, hoy en día, un ingreso de aproximadamente 60 millones de dólares. También, siguiendo esta línea, se han nacionalizado los servicios de gas, electricidad, agua y la mayor parte de los bancos. Sin embargo, el actual gobierno no ha cerrado las puertas de la economía local a la inversión extranjera, pues, como bien lo sabe, no existen capitales nativos suficientes, ni tecnología local adecuada para lograr el apoyo a la promoción de la industria local. Uno de los países que, por su posición geográfica, ha abierto brecha en este país es Brasil, que ve en Surinam un sustancioso mercado para sus productos de exportación.

3.4.2 Aruba, Curazao y Bonaire

La economía de las Antillas holandesas depende en gran medida de la refinación de petróleo. La empresa Shell tiene una refinería en Curazao cuya capacidad original de refinamiento (410 000 barriles diarios) se ha visto reducida desde la crisis de sobreproducción petrolera de 1975. En Aruba, la Exxon posee una subsidiaria de la Lago Oil and Transport que

procesa, principalmente, crudo de origen venezolano, mientras que el refinado en Curazao proviene del Cercano Oriente y de Africa. En su actividad petrolera estas islas han sufrido la competencia de las Islas Vírgenes norteamericanas que se han especializado en el transbordo de crudos; este factor, sumado a la crisis, ha reducido las exportaciones hacia los Estados Unidos en un 15 por ciento.

En la década de los setenta, las transnacionales impulsaron un programa de diversificación del petróleo que puso en marcha un nuevo complejo petroquímico para producir ácido nítrico y fertilizantes, y si bien su alto grado de tecnificación incorpora poca mano de obra, sí amplía la capacidad exportadora de las islas, contribución fundamental, ya que el comercio exterior de ambas islas depende en un 85 por ciento de sus exportaciones de petróleo crudo y en un 90 por ciento de las de hidrocarburos. Tradicionalmente Holanda había sido su principal comprador, pero en la actualidad ha sido superado, con creces, por los Estados Unidos.

Además de su actividad petrolera, estas entidades se caracterizan como paraísos fiscales y proporcionan condiciones y facilidades óptimas de operación empresarial que han sido aprovechados por numerosas sociedades extranjeras.

Los intentos de crear nuevas industrias se han visto ensombrecidos por el oportunismo de las compañías manufactureras, que dedican su producción a la exportación y no crean "raíces", lo que refuerza la estructura extrovertida de la economía de estas islas. Además, su otra única opción económica: el turismo, tampoco produce lo suficiente como para convertirse en polo diversificador de la economía.

IV. Modelos de desarrollo e integración regional

Desde la posguerra, las sendas de desarrollo económico en la región se definieron por la expansión de las exportaciones minerales y el petróleo (Trinidad-Tobago, Guyana y Jamaica); los plátanos (Jamaica y las Islas de Barlovento); el azúcar (Guyana, Belice, y más tarde en Barbados, Jamaica, St. Kitts-Nevis-Anguilla y Trinidad-Tobago); y el turismo, "la industria sin chimeneas" (particularmente en Antigua, Barbados, Grenada, Jamaica y Sta. Lucía). En el caso de los países más desarrollados: Guyana, Jamaica, Trinidad-Tobago y Barbados, la expansión de la producción manufacturera sobre los mercados locales, estimulada por incentivos arancelarios y fiscales, proveyó parte de los recursos necesarios al crecimiento económico.

Este desarrollo y el incremento concomitante en el consumo de los grupos privilegiados (incluyendo a los trabajadores mejor pagados) se había presentado acompañado de una dependencia continuada en la toma de decisiones. A pesar del alto nivel a que llegaron los ingresos *per capita*, las economías nacionales seguían estancadas, sobre todo a causa de la enorme dependencia de los capitales foráneos, del creciente subempleo y desem-

pleo, del rezago tecnológico en el sector agrícola y del uso insuficiente de recursos locales; a todo ello habría que agregar lo escaso del ahorro nacional y la reducida participación de los empresarios locales en la economía.

Un recuento de las fallas y debilidades en cada uno de estos sectores, muestra la existencia de un factor histórico común a todos ellos: la grave dependencia del exterior. El débil desarrollo de la actividad agrícola se manifestó en el enorme volumen de importación de alimentos para el consumo local y turístico; el crecimiento del sector manufacturero, desarrollado en los años sesenta, vino aparejado con varias características indeseables: una alta dependencia del capital, la tecnología y los insumos extranjeros, además del elevado costo de las tecnologías empleadas y, sobre todo, de una mínima relación con otros sectores de la economía. El turismo, como fuente de ingreso, a pesar de su rápida expansión, mostró casi las mismas características de dependencia y aislamiento que aparecieron en el sector manufacturero.

El perfil institucional y estructural caribeño, comprendido en el periodo de la posguerra hasta finales de los años sesenta, mostraba nuevas formas de la vieja dependencia estructural que caracterizaron a la región desde su inclusión en la economía internacional, como zona de colonias monoproductoras de azúcar. Históricamente hablando, esas mismas fuerzas habían impedido la creación de una economía regional integrada y más bien provocaron su fragmentación y desintegración.

Con el fin de contrarrestar esa tendencia a la desintegración y promover el desarrollo económico, se propició la formación de unidades regionales para la cooperación, cuya historia comienza en 1968 con el establecimiento de la Asociación de Libre Comercio del Caribe (ALCC/CARIFTA) que, más tarde (1973), se convirtió en Comunidad del Caribe, incorporando a casi todas las colonias y excolonias británicas. Las principales actividades de esta comunidad se orientaban hacia:

la integración económica mediante los acuerdos del Mercado Común del Caribe; cooperación en la organización de servicios comunes para la educación, la salud, los transportes, las comunicaciones, la cultura y el deporte, así como coordinar la política exterior.²³

El grupo también se apoyó en otras instituciones de carácter independiente, pero asimismo regionales, como el Banco de Desarrollo del Caribe, la Corporación Naviera de las Indias Occidentales, la Corporación de Alimentos del Caribe y la Universidad de las Indias Occidentales. Sin embargo, en poco tiempo resultó evidente que los propósitos para los que había sido creada la Comunidad eran vanos. En realidad, las dificultades habían comenzado ya un poco antes, y su primera manifestación visible fueron los problemas de balanza de pagos de Jamaica y Guyana, originados por las alzas en el precio del petróleo y por la recesión internacional, que impidieron a Jamaica cumplir con la parte que le co-

rrespondía en el acuerdo concertado, cuando Trinidad y Tobago contribuyó con 77 millones de dólares a la ayuda regional conjunta de 87.42 millones que se había otorgado a Jamaica para aliviar sus problemas financieros. A ello hay que sumar el factor político, fuente de mayores tensiones: Jamaica y Guyana buscaron el apoyo de Cuba y de otros países socialistas, mientras que Trinidad y Tobago hacían lo propio con Estados Unidos.

Otras corporaciones de integración, fundadas con similares intereses, han tenido el mismo destino; ejemplo de ello es la Corporación Alimentaria del Caribe, creada como fondo de inversión para proyectos agrícolas, que parece haber abortado ya que, hasta 1978, sólo uno de sus miembros había hecho efectiva su contribución.

V. *Los Estados Unidos y la integración regional*

Aunque la posición oficial de los Estados Unidos favorece la integración económica interna del Caribe, la verdad es que ese país se inclina a actuar bilateralmente con el propósito de aumentar su influencia al grado máximo. Prueba de ello fueron los seis puntos de la *Iniciativa para la Cuenca del Caribe* de Reagan, que proponen: "1) el libre comercio, 2) estímulos fiscales a los estadounidenses que inviertan en la región, 3) una ayuda de 350 millones de dólares, 4) asistencia técnica para el sector privado, 5) coordinación con otros países y 6) medidas especiales para compensar a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes por las pérdidas que pudieran sufrir como consecuencia del programa".²⁴

Al revisar estas propuestas y recordando los orígenes de los problemas regionales mencionados páginas atrás, no cabe duda de que este tipo de iniciativas no tienen ningún futuro, puesto que fueron precisamente las inversiones extranjeras las que engendraron las dificultades actuales. Aun suponiendo que la liberación arancelaria tuviera algún efecto positivo sobre las exportaciones agrícolas de la región, dicha política sólo beneficiaría a los grandes propietarios dedicados a los cultivos de exportación. Por ello, coincidimos con la afirmación de James Petras, quien señala que "la ayuda económica es sólo una máscara de la política militarista", lo que se evidencia por el incremento en la asistencia militar norteamericana a Jamaica que, de 1 661 000 dólares en 1981, pasa a 6 700 000 en 1982,²⁵ así como en la reciente intervención a Grenada, tal vez circunstancial, pero ella sí, desenmascarada.

¹ La subregión antillana a la que dedicamos este ensayo, está compuesta básicamente por aquellos países que sostuvieron una relación colonial con Francia, Inglaterra y Holanda.

² Gordon Lewis, *The Growth of the Modern West Indies*, New York, Modern Readers Paperback, 1969, p. 370 (traducción del autor).

³ Ma. Emilia Paz Salinas, *El Neocolonialismo francés en las Antillas: Martinica y Guadalupe* (tesis inédita, presentada en la Facultad de Filosofía y Letras), UNAM, 1976, p. 16.

⁴ Como resultado de las elecciones generales de 1961, el Partido Progresista del Pueblo de Cheddi Jagan ganó el poder. Dada la crítica situación económica del país, se siguió una política de austeridad y, además, se crearon nuevos impuestos, lo que produjo una situación tensa que culminó con enfrentamientos políticos y odios raciales que fueron utilizados como motivo para que en 1964 intervinieran tropas británicas y se disolviera el gobierno establecido.

⁵ Desde 1838 hasta 1916 se intentó en toda la región caribeña sustituir la mano de obra esclava por fuerza de trabajo "contratada" traída esencialmente de Asia, por lo que a lo largo de este periodo se conformó una migración de más de un millón de personas que, por lo general, terminó asentándose en las diferentes islas de la región, hecho que confirió a éstas características étnico-culturales muy peculiares.

⁶ Watson A. Hilbourne, "Aspects of the problem of metropolitan influence and dependence in the Caribbean" en: *Lecturas del CEESTEM*, vol. 1, núm. 4, 1981, p. 35.

⁷ Gerard Pierre Charles, *El Caribe Contemporáneo*, México, Siglo XXI, 1981, p. 303.

⁸ *Ibid.*, p. 305.

⁹ En 1973, con una producción de 13 601 000 toneladas, Jamaica figuraba como el segundo productor mundial de bauxita. Dos años más tarde (1975), proporcionaba entre la cuarta y quinta parte de la producción mundial, y cubría el 80 por ciento del consumo norteamericano. La producción jamaicana, sumada, durante el mismo lapso, a la de cuatro países más del Caribe (Surinam, 4 751 000 toneladas; Haití, 523 000 toneladas; Guyana 3 128 toneladas y República Dominicana, 785 000 toneladas) representó casi una tercera parte de la producción mundial total del mineral de aluminio. Véase: *Ibid.*, p. 300.

¹⁰ Jefferson Owen, *The Postwar Economic Development of Jamaica*, Kingston, ISER-UWI, 1972 p. 67.

¹¹ Citado en: *Comercio Exterior*, vol. 30, núm. 11, noviembre 1980, p. 1232.

¹² Hasta mayo de 1974 el país recibía 26 centavos de dólar por tonelada de bauxita, además de 2.25 dólares por concepto de impuestos a la utilidad. Después de que las transnacionales se negaron a proporcionar, en la medida justamente exigida, un aumento, el Parlamento propuso y aprobó un impuesto de 11.71 dólares por tonelada de bauxita extraída y vendida.

¹³ Además, por haber ocurrido en un periodo electoral, los enfrentamientos adquirieron un tinte político, lo que hizo que las manifestaciones de violencia alcanzaran dimensiones considerables.

¹⁴ Pierre Charles, *op. cit.*, p. 295.

¹⁵ *Ibid.*, p. 310.

¹⁶ A través de 15 filiales la Booker daba empleo a 22 000 personas. Poseía grandes tiendas, impresoras, emparadoras, navieras, laboratorios médicos, plantas lecheras, destiladoras, etcétera. Fuente: *Comercio Exterior*, vol. 26, núm. 10, octubre 1976, p. 1171.

¹⁷ *Caribbean Monthly Bulletin*, I.C.S.-U.P.R., vol. 14, núm. 11-12, nov-dic. 1980, p. 36.

¹⁸ Maurice Bishop, "La Revolución Popular en Grenada", en: *Nueva Sociedad*, núm. 46, enero-febrero, 1980, p. 119.

¹⁹ Pierre Charles, *op. cit.*, p. 355.

²⁰ Al respecto ver: Amin Samir, *El capitalismo periférico*, México, Nuestro Tiempo, 1976.

²¹ Pierre Charles, *op. cit.*, p. 361.

²² “Cabe señalar que el déficit de la balanza comercial de Martinica y Guadalupe creció de la siguiente manera: Martinica, entre 1963 y 1973, 250 por ciento; Guadalupe, entre 1965 y 1970, 90 por ciento.” Paz Salinas, *op. cit.*, p. 44.

²³ *Comercio Exterior*, vol. 29, núm. 6, junio 1979, p. 685-686.

²⁴ James Petras. “El programa de Reagan para la Cuenca del Caribe: La máscara económica de una política militar”, en: *Comercio Exterior*, vol. 32, núm. 9, septiembre 1982, p. 984.

²⁵ *Caribbean Monthly Bulletin*, vol. 16, núms. 5-6, mayo-junio, 1982, p. 46.

BIBLIOGRAFÍA

a) Libros

- LEWIS K, Gordon, *The Growth of the Modern West Indies*, New York, Modern Readers, 1969.
- PIERRE CHARLES, Gerard, *El Caribe Contemporáneo*, México, S. XXI, 1981.
- JEFFERSON, Owen, *The Postwar Economic Development of Jamaica*, Kingston, ISER-UWI, 1972.
- PAZ SALINAS, Ma. Emilia, *El neocolonialismo francés en las Antillas: Martinica y Guadalupe* (tesis inédita, presentada en la Facultad de Filosofía y Letras), UNAM, 1976.
- SAMIR AMIN, *El capitalismo periférico*, México, Nuestro Tiempo, 1976.
- SHERLOCK PHILIP, Parry J. B., *Historia de las Antillas*, Buenos Aires, Kapeluz, 1976.
- WILLIAMS, Eric, *From Columbus to Castro, the History of the Caribbean 1492-1962*, London-New York, Harper & Row, 1969.

b) Artículos

- Hilbourne WATSON A., "Aspects of the Problem of Metropolitan Influence and Dependence in the Caribbean", en: *Lecturas del CEESTEM*, vol. 1, núm. 4, 1981, p. 29-48.
- PETRAS, James, "El programa de Reagan para la Cuenca del Caribe: la máscara económica de una política militar", en: *Comercio Exterior*, vol. 32, núm. 9, septiembre, 1982.
- BISHOP Maurice, "La Revolución Popular en Grenada", en: *Nueva Sociedad*, núm. 46, enero-febrero, 1980.

c) Revistas

- 1) *Comercio Exterior*, años 1970 a 1983.
- 2) *Caribbean Monthly Bulletin*, años 1974 a 1983.
- 3) *Nueva Sociedad*, 1980 y 1983.

ÍNDICE

Presentación	5
Crisis energética: Su impacto en Paraguay, JULIA BÁEZ	9
Crisis, política económica y comportamiento reciente de la economía mexicana, FAUSTO BURGUEÑO LOMELÍ	39
Historia contemporánea de Venezuela (1945-1983), FELÍCITAS LÓPEZ PORTILLO T.	61
La economía antillana de posguerra (1945-1983) una interpretación, JUAN MANUEL DE LA SERNA H.	131

Imperialismo y economía en América Latina, editado por la Dirección General de Publicaciones, se terminó de imprimir en la Imprenta Universitaria el 31 de agosto de 1989. Su composición se hizo en tipo Electra de 10:11, 9:10 y 8:9 puntos. La edición consta de 1 300 ejemplares.

Los ensayos que aquí se reúnen intentan responder al porqué de la presente crisis económica y sus proyecciones futuras para América Latina, concretamente para el Caribe, México, Venezuela y Paraguay. El trabajo se divide en dos secciones: la primera está formada por las colaboraciones de dos economistas miembros del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS de la UNAM quienes, con los elementos propios de su disciplina desmenuzan los hechos y presentan sus conclusiones. La segunda parte está integrada por los trabajos de dos investigadores miembros del CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (CCYDEL), los cuales, con un enfoque histórico, dan una visión panorámica de los temas estudiados.

La lectura de los trabajos contenidos en la presente serie ayudará a la comprensión de los complejos fenómenos que se viven actualmente, prolegómenos de un fin de siglo que se presenta preñado de dificultades.